**MEMORIA**

Presentada por el Gobierno de México, de conformidad con las disposiciones del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, correspondiente al período comprendido entre el 1º de septiembre de 2013 al 30 de agosto de 2018, acerca de las medidas adoptadas para dar efectividad a las disposiciones del

**CONVENIO 169**

**SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES, 1989**

Cuya ratificación formal fue registrada el 5 de septiembre de 1990.

**I**

**México 2018**

De conformidad con lo dispuesto en el formulario de Memoria, que solicita facilitar una lista de las leyes, reglamentos y normas que dan cumplimiento a las disposiciones del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a continuación se menciona la reglamentación adoptada en el período comprendido entre 2014 y 2018 en materia de protección a los pueblos y comunidades indígenas de México, la cual puede ser consultada en los vínculos electrónicos correspondientes:

* “DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2015. El Decreto citado modifica los artículos 5, 22, 22 Bis, 23, 174, 175, 175 Bis, 176, 178, 179, 180, 191, 267, 362, 372, 998 y 995 Bis, de Ley de la Ley Federal del Trabajo.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396526&fecha=12/06/2015>

* “DECRETO por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas”, publicado el 20 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdlpi/LGDLPI_ref08_20jun18.pdf>

* “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura”. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdlpi/LGDLPI_ref07_17dic15.pdf>

* “DECRETO por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2015.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5419964&fecha=15/12/2015>

* “DECRETO por el que se reforma el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2015.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdlpi/LGDLPI_ref05_15dic15.pdf>

* “DECRETO por el que se adicionan una fracción XIX al artículo 2, una fracción V al artículo 6, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcndpi/LCNDPI_ref04_22jun17.pdf>

* “DECRETO por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2016.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcndpi/LCNDPI_ref03_07abr16.pdf>

* “DECRETO por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2018.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped/LFPED_ref08_21jun18.pdf>

* “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 2016.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped/LFPED_ref07_01dic16.pdf>

* “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2014.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped/LFPED_ref06_20mar14.pdf>

* Reglamento de la Ley de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2012, artículos 144, fracción IV inciso b); 225 cuarto párrafo; y 230, último párrafo.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf>

* Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018.

Disponible en los siguientes enlaces electrónicos:

<https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf>.

<https://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18>.

* Acuerdo a través del cual se crea la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. Diario Oficial de la Federación del 13 de febrero de 2013.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5287739&fecha=13/02/2013>.

* Recomendación General No. 27/2016 sobre el derecho a la Consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447796&fecha=12/08/2016>.

* Protocolo para la Implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

https://www.gob.mx/pa/documentos/protocolo-para-la-implementacion-de-consultas-a-pueblos-y-comunidades-indigenas

* Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/nueva_version_ProtocoloIndigenasDig.pdf>.

* Ley de la Industria Eléctrica (Decretada en agosto de 2014).

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355986&fecha=11/08/2014>.

* Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (Decretada en octubre de 2014).

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366665&fecha=31/10/2014>.

* Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones administrativas de carácter general sobre la evaluación de impacto social en el sector energético (publicado el 1 de junio de 2018).

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5524885&fecha=01/06/2018>.

* “DECRETO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018.

Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

http://www.dof.gob.mx/nota\_detalle.php?codigo=5509126&fecha=27/12/2017.

**II**

**México 2018**

**Observación 2013**

*La Comisión toma nota de la información completa presentada por el Gobierno en la memoria detallada recibida en septiembre de 2013 que incluye una contribución de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). La Comisión toma también nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) que fueron transmitidas al Gobierno en septiembre de 2012. La CONCAMIN indica que es importante definir y poner en práctica programas en beneficio de los diversos grupos indígenas y tribales, y también manifiesta su preocupación por la confusión que podría generar el hecho de tener que someter toda acción en materia de infraestructura, de desarrollo económico o social a la aprobación de los pueblos indígenas. La CONCAMIN considera positivo que el Gobierno haya proporcionado informaciones sobre los programas vinculados con la incorporación de los grupos indígenas a la actividad productiva en diversas zonas del país. De igual manera, la OIE, refiriéndose a la obligación de consulta establecida en los* artículos 6, 7, 15 y 16 del Convenio, *expresó su preocupación por el impacto negativo que puede tener el incumplimiento de dicha obligación por los Estados parte en los proyectos que llevan a cabo empresas tanto públicas como privadas. La Comisión toma nota de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) realizó más de 30 consultas, las cuales fueron utilizadas en el ámbito federal y estatal, como medio para la armonización legislativa, la elaboración de planes y programas de desarrollo, la generación de políticas públicas, la protección y reproducción cultural y la protección de recursos naturales. En particular, el Gobierno resalta los resultados de las consultas celebradas en los estados de Guanajuato, Hidalgo y Nueva León*  **La Comisión se remite a su solicitud directa donde se tratan otros aspectos relacionados con la consulta e invita al Gobierno a que, junto con los interlocutores sociales y las organizaciones indígenas, continúe presentado informaciones sobre los progresos alcanzados en relación con las medidas tomadas para dar efecto al Convenio (partes VII y VIII del formulario de memoria).**

El Gobierno de México toma nota de los comentarios formulados por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones e informa que en el cuerpo de la presente Memoria se atienden varios requerimientos de la Comisión de Expertos,

**Parte I Política General**

**Artículo 1**

**México 2018**

**Solicitud Directa 2013**

*Parte I. Política general. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en la memoria recibida en septiembre de 2013 sobre la modificación del rango de edad en el Censo de 2010 para captar a los hablantes de lenguas indígenas. El Gobierno indica que se trabaja en una propuesta para incluir en 2015 la pregunta de autoadscripción indígena en el cuestionario básico.* **La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionando información estadística actualizada sobre los pueblos indígenas del país y la manera en que se promueve la autoidentificación de los pueblos interesados (artículo 1 del Convenio).**

La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos define a la Nación como pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, a los cuales los define como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), organismo de la Administración Pública Federal, con base en la Ley que le dio origen establece las bases para integrar y operar un sistema de información e indicadores de la población indígena,

Para la identificación de la población indígena, la CDI ha establecido una metodología cuyo principio es considerar a los hogares como las instituciones socioeconómicas fundamentales de la sociedad en donde se reproducen las prácticas sociales, económicas y culturales. A partir de esta definición, se considera población indígena a todas las personas que forman parte de un hogar donde el jefe (a) del hogar, su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre, padre, madrastra o padrastro, abuelo (a), bisabuelo (a), tatarabuelo (a), suegro (a)) declaró ser hablante de lengua indígena. Todos los integrantes de este hogar se contabilizan como población indígena aun cuando hayan manifestado no hablar alguna lengua indígena. También se incluye a personas que declararon hablar alguna lengua y que no forman parte de estos hogares.[[1]](#footnote-1)

La aplicación de este criterio permite incorporar a aquella población que comparte normas, valores y costumbres comunitarias de los pueblos indígenas, a pesar de haber dejado de usar o no haber aprendido la lengua, con ello se pretende entender la etnicidad y su relación con la identidad desde una perspectiva dinámica.

Por otro lado, con base en la variable etnolingüística captada en el censo y en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales[[2]](#footnote-2), del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), se identifican los pueblos indígenas a los que pertenece la población indígena contabilizada por la CDI.

Las cifras disponibles actualmente se refieren al Censo General de Población y Vivienda 2010 y a la Encuesta Intercensal 2015 (EIC 2015). A partir del Censo General de Población y Vivienda 2010, el volumen de población indígena estimado por CDI fue de 11,132,562 personas, cantidad que representa el 9.9% de la población.

**Población total e indígena por sexo 2010**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Población indígena/total | **2010** | | |
| **Total** | **Hombres** | **Mujeres** |
| Población indígena | 11,132,562 | 5,469,325 | 5,663,237 |
| Población total | 112,336,538 | 54,855,231 | 57,481,307 |

Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

De las 68 lenguas o agrupaciones lingüísticas consideradas en el Catálogo del INALI, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 identificaron 66. Los nombres de las lenguas o pueblos indígenas identificados son Amuzgo, Awakateko, Ayapaneco, Chatino, Chichimeco jonaz, Chinanteco, Chocholteco, Ch'ol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Chuj, Cora, Cucapá, Cuicateco, Guarijío, Huasteco, Huave, Huichol, Ixcateco, Ixil, Jakalteko, K’iche’, Kaqchikel, Kickapoo, Kiliwa, Kumiai, Lacandón, Mam, Matlatzinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Oluteco, Otomí, Paipai, Pame, Pápago, Pima, Popoloca, Popoluca de la sierra, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Qato'k, Sayulteco, Seri, Tarahumara, Tarasco, Teko, Tepehua, Tepehuano del norte, Tepehuano del sur, Texistepequeño, Tlahuica, Tlapaneco, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tseltal, Tzotzil, Yaqui, Zapoteco y Zoque.

A continuación, se presenta la población indígena de los 66 pueblos indígenas identificados en 2010.

| **Pueblo indígena** | | **Población 2010** |
| --- | --- | --- |
|  | **Total nacional** | **11,132,562** |
| 1 | Amuzgo | 67,349 |
| 2 | Awakateko | 2,270 |
| 3 | Ayapaneco | 57 |
| 4 | Chatino | 63,155 |
| 5 | Chichimeco jonaz | 4,222 |
| 6 | Chinanteco | 207,643 |
| 7 | Chocholteco/Chocho | 1,937 |
| 8 | Ch'ol | 283,797 |
| 9 | Chontal de Oaxaca | 10,137 |
| 10 | Chontal de Tabasco | 70,929 |
| 11 | Chuj | 4,145 |
| 12 | Cora | 27,712 |
| 13 | Cucapá | 353 |
| 14 | Cuicateco | 22,444 |
| 15 | Guarijío | 3,128 |
| 16 | Huasteco | 237,876 |
| 17 | Huave | 24,627 |
| 18 | Huichol | 59,820 |
| 19 | Ixcateco | 462 |
| 20 | Ixil | 240 |
| 21 | Jakalteko | 1,359 |
| 22 | K'iche' | 699 |
| 23 | Kaqchikel | 297 |
| 24 | Kickapoo | 552 |
| 25 | Kiliwa | 148 |
| 26 | Kumiai | 851 |
| 27 | Lacandón | 1,130 |
| 28 | Mam | 27,210 |
| 29 | Matlatzinca | 2,417 |
| 30 | Maya | 1,500,441 |
| 31 | Mayo | 98,869 |
| 32 | Mazahua | 336,546 |
| 33 | Mazateco | 336,158 |
| 34 | Mixe | 194,845 |
| 35 | Mixteco | 771,455 |
| 36 | Náhuatl | 2,587,452 |
| 37 | Oluteco | 144 |
| 38 | Otomí | 623,121 |
| 39 | Paipai | 426 |
| 40 | Pame | 15,520 |
| 41 | Pápago | 426 |
| 42 | Pima | 1,603 |
| 43 | Popoloca | 29,945 |
| 44 | Popoluca de la sierra | 44,252 |
| 45 | Q'anjob'al | 14,508 |
| 46 | Q'eqchi' | 1,893 |
| 47 | Qato'k/Motocintleco | 361 |
| 48 | Sayulteco | 2,440 |
| 49 | Seri | 1,031 |
| 50 | Tarahumara | 124,947 |
| 51 | Tarasco/Purépecha | 193,426 |
| 52 | Teko | 149 |
| 53 | Tepehua | 15,506 |
| 54 | Tepehuano del norte | 12,125 |
| 55 | Tepehuano del sur | 38,219 |
| 56 | Texistepequeño | 1,032 |
| 57 | Tlahuica/Ocuilteco | 1,882 |
| 58 | Tlapaneco | 167,029 |
| 59 | Tojolabal | 71,424 |
| 60 | Totonaco | 407,617 |
| 61 | Triqui | 37,368 |
| 62 | Tseltal | 583,111 |
| 63 | Tzotzil | 535,117 |
| 64 | Yaqui | 29,815 |
| 65 | Zapoteco | 771,577 |
| 66 | Zoque | 100,225 |
|  | Otras lenguas de América | 1,912 |
|  | Lengua insuficientemente especificada | 351,679 |
| ***Fuente:*** *CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, Censo de Población y Vivienda, México, 2010.* ***Nota:*** *Este listado, no incluye cifras para el pueblo Ku'ahl ni AkateKo, debido a que en el último evento censal, ninguna persona declaró hablar estas lenguas.* | | |

A partir de la EIC2015 y el criterio de hogar indígena se cuantifica una población indígena de 12,025,947 personas, que representa el 10.1% de la población total del país. Además, existen 7,382,785 personas mayores de 3 años de edad hablantes de lenguas indígenas. Es importante señalar que las personas hablantes de lenguas indígenas (HLI) representan el 6.5% del total de población de 3 años y más de edad en el país, y de ellos el 12.3% son monolingües.

De acuerdo a lo anterior, de las 68 lenguas o agrupaciones lingüísticas consideradas en el Catálogo del INALI, los resultados de la EIC2015 identificaron 67, (no se captó información del pueblo Ku'ahl con presencia histórica en Baja California). Los nombres de las lenguas o pueblos indígenas identificados son Akateko, Amuzgo, Awakateko, Ayapaneco, Ch’ol, Chatino, Chichimeco jonaz, Chinanteco, Chocholteco, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Chuj, Cora, Cucapá, Cuicateco, Guarijío, Huasteco, Huave, Huichol, Ixcateco, Ixil, Jakalteko, K’iche’, Kaqchikel, Kickapoo, Kiliwa, Kumiai, Lacandón, Mam, Matlatzinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Oluteco, Otomí, Paipai, Pame, Pápago, Pima, Popoloca, Popoluca de la sierra, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Qato’k, Sayulteco, Seri, Tarahumara, Tarasco, Teko, Tepehua, Tepehuano del norte, Tepehuano del sur, Texistepequeño, Tlahuica, Tlapaneco, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tseltal, Tzotzil, Yaqui, Zapoteco y Zoque.

A continuación, se presenta una tabla con el listado de pueblos indígenas, el total de población indígena y el número de hablantes identificados en la EIC2015.

| Pueblo\* | Población indígena 2015 |
| --- | --- |
| 1. **Akateko** | **3,202** |
| 1. **Amuzgo** | **75,953** |
| 1. **Awakateko** | **31** |
| 1. **Ayapaneco** | **35** |
| 1. **Ch’ol** | **328,867** |
| 1. **Chatino** | **69,663** |
| 1. **Chichimeco jonaz** | **4,709** |
| 1. **Chinanteco** | **211,760** |
| 1. **Chocholteco** | **1,296** |
| 1. **Chontal de Oaxaca** | **10,848** |
| 1. **Chontal de Tabasco** | **57,792** |
| 1. **Chuj** | **4,557** |
| 1. **Cora** | **37,300** |
| 1. **Cucapá** | **542** |
| 1. **Cuicateco** | **22,086** |
| 1. **Guarijío** | **2,946** |
| 1. **Huasteco** | **255,190** |
| 1. **Huave** | **24,222** |
| 1. **Huichol** | **71,450** |
| 1. **Ixcateco** | **485** |
| 1. **Ixil** | **335** |
| 1. **Jakalteko** | **1,315** |
| 1. **K’iche’** | **1,388** |
| 1. **Kaqchikel** | **207** |
| 1. **Kickapoo** | **241** |
| 1. **Kiliwa** | **306** |
| 1. **Kumiai** | **1,197** |
| 1. **Lacandón** | **1,166** |
| 1. **Mam** | **27,050** |
| 1. **Matlatzinca** | **3,893** |
| 1. **Maya** | **1,646,782** |
| 1. **Mayo** | **108,180** |
| 1. **Mazahua** | **360,231** |
| 1. **Mazateco** | **358,829** |
| 1. **Mixe** | **190,040** |
| 1. **Mixteco** | **819,725** |
| 1. **Náhuatl** | **2,886,767** |
| 1. **Oluteco** | **268** |
| 1. **Otomí** | **664,293** |
| 1. **Paipai** | **667,038** |
| 1. **Pame** | **16,736** |
| 1. **Pápago** | **440** |
| 1. **Pima** | **1,375** |
| 1. **Popoloca** | **28,783** |
| 1. **Popoluca de la sierra** | **45,628** |
| 1. **Q’anjob’al** | **13,737** |
| 1. **Q’eqchi’** | **2,138** |
| 1. **Qato’k** | **456** |
| 1. **Sayulteco** | **10,462** |
| 1. **Seri** | **1,263** |
| 1. **Tarahumara** | **113,129** |
| 1. **Tarasco** | **221,555** |
| 1. **Teko** | **303** |
| 1. **Tepehua** | **16,585** |
| 1. **Tepehuano del norte** | **14,342** |
| 1. **Tepehuano del sur** | **47,144** |
| 1. **Texistepequeño** | **1,340** |
| 1. **Tlahuica** | **2,863** |
| 1. **Tlapaneco** | **180,327** |
| 1. **Tojolabal** | **74,924** |
| 1. **Totonaco** | **438,756** |
| 1. **Triqui** | **37,028** |
| 1. **Tseltal** | **689,797** |
| 1. **Tzotzil** | **614,105** |
| 1. **Yaqui** | **35,132** |
| 1. **Zapoteco** | **819,725** |
| 1. **Zoque** | **104,321** |

*Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.*

A nivel nacional, del total de la población de 3 años y más que habla lengua indígena, el 84.6% habla también español, mientras que del total de población que no habla lengua indígena, el 1.5% entiende alguna lengua originaria.

De igual forma, en el país hay 7,382,785 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6.5% del total de la población y las lenguas más habladas son el Náhuatl (1,725,620 hablantes), Maya (859,607 hablantes), Tseltal (556,720 hablantes), Mixteco (517,665 hablantes) y Tzotzil (487,898 hablantes).

**Población 3 años y más Hablante de alguna Lengua Indígena (HLI) por agrupación lingüística:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Nacional** | **7,382,785** |  |  |
| Náhuatl | 1,725,620 | 23.37% |  |
| Maya | 859,607 | 11.64% |  |
| Tseltal | 556,720 | 7.54% |  |
| Mixteco | 517,665 | 7.01% |  |
| Tzotzil | 487,898 | 6.61% |  |
| Zapoteco | 479,474 | 6.49% |  |
| Otomí | 307,928 | 4.17% |  |
| Totonaco | 267,635 | 3.63% |  |
| Ch'ol | 251,809 | 3.41% |  |
| Mazateco | 239,078 | 3.24% |  |
| Huasteco | 173,765 | 2.35% |  |
| Mazahua | 147,088 | 1.99% |  |
| Tarasco | 141,177 | 1.91% |  |
| Chinanteco | 138,741 | 1.88% |  |
| Tlapaneco | 134,148 | 1.82% |  |
| Mixe | 133,632 | 1.81% |  |
| Tarahumara | 73,856 | 1.00% |  |
| Zoque | 68,157 | 0.92% |  |
| Amuzgo | 57,589 | 0.78% |  |
| Tojolabal | 55,442 | 0.75% |  |
| Huichol | 52,483 | 0.71% |  |
| Chatino | 51,612 | 0.70% |  |
| Mayo | 42,601 | 0.58% |  |
| Popoluca de la sierra | 37,707 | 0.51% |  |
| Tepehuano del sur | 36,543 | 0.49% |  |
| Cora | 28,718 | 0.39% |  |
| Chontal de Tabasco | 27,666 | 0.37% |  |
| Triqui | 25,674 | 0.35% |  |
| Yaqui | 20,340 | 0.28% |  |
| Huave | 18,539 | 0.25% |  |
| Popoloca | 18,206 | 0.25% |  |
| Cuicateco | 13,318 | 0.18% |  |
| Pame | 12,232 | 0.17% |  |
| Mam | 11,387 | 0.15% |  |
| Tepehua | 10,427 | 0.14% |  |
| Tepehuano del norte | 9,568 | 0.13% |  |
| Q'anjob'al | 8,421 | 0.11% |  |
| Popoluca insuficientemente especificado | 6,122 | 0.08% |  |
| Chontal de Oaxaca | 5,064 | 0.07% |  |
| Sayulteco | 4,117 | 0.06% |  |
| Chuj | 2,890 | 0.04% |  |
| Akateko | 2,837 | 0.04% |  |
| Chichimeco jonaz | 2,134 | 0.03% |  |
| Guarijío | 2,088 | 0.03% |  |
| Matlatzinca | 1,568 | 0.02% |  |
| Tlahuica | 1,548 | 0.02% |  |
| Q'eqchi' | 1,324 | 0.02% |  |
| Chontal insuficientemente especificado | 1,135 | 0.02% |  |
| Lacandón | 998 | 0.014% |  |
| Seri | 754 | 0.010% |  |
| Pima | 743 | 0.010% |  |
| K'iche' | 730 | 0.010% |  |
| Chocholteco | 729 | 0.010% |  |
| Jakalteko | 527 | 0.007% |  |
| Kumiai | 486 | 0.007% |  |
| Texistepequeño | 455 | 0.006% |  |
| Cucapá | 278 | 0.0038% |  |
| Paipai | 216 | 0.0029% |  |
| Kiliwa | 194 | 0.0026% |  |
| Tepehuano insuficientemente especificado | 170 | 0.0023% |  |
| Ixcateco | 148 | 0.0020% |  |
| Qato'k | 134 | 0.0018% |  |
| Kickapoo | 124 | 0.0017% |  |
| Pápago | 112 | 0.0015% |  |
| Ixil | 103 | 0.0014% |  |
| Oluteco | 90 | 0.0012% |  |
| Teko | 81 | 0.0011% |  |
| Kaqchikel | 61 | 0.0008% |  |
| Ayapaneco | 24 | 0.0003% |  |
| Awakateko | 17 | 0.0002% |  |
| Otras lenguas de América | 1,126 | 0.0153% |  |
| No especificado | 101,187 | 1.37% |  |

A continuación se desglosa la información de Hablante de Lengua Indígena (HLI) por edad y sexo, alusiva a la población de 3 años y más, hablante de alguna lengua indígena:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hablante de Lengua Indígena (HLI) por Edad y Sexo. Nacional.** | | | | | |  |  |
| Población 3 años y más **hablante de alguna lengua indígena** (HLI) por edad y sexo. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grupo. Edad | Total | |  | Sexo | |  |
|  |  |  |  | Hombre | Mujer |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nacional | 7,382,785 | 100% |  | 3,596,112 | 3,786,673 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,4 | 209,251 | 2.83% |  | 104,118 | 105,133 |  |
|  | 5 - 9 | 611,292 | 8.28% |  | 305,132 | 306,160 |  |
|  | 10 - 14 | 684,664 | 9.27% |  | 343,282 | 341,382 |  |
|  | 15 - 19 | 647,652 | 8.77% |  | 324,262 | 323,390 |  |
|  | 20 - 24 | 627,299 | 8.50% |  | 304,067 | 323,232 |  |
|  | 25 - 29 | 560,054 | 7.59% |  | 265,311 | 294,743 |  |
|  | 30 - 34 | 576,154 | 7.80% |  | 274,849 | 301,305 |  |
|  | 35 - 39 | 557,578 | 7.55% |  | 267,068 | 290,510 |  |
|  | 40 - 44 | 517,715 | 7.01% |  | 252,158 | 265,557 |  |
|  | 45 - 49 | 460,316 | 6.23% |  | 220,503 | 239,813 |  |
|  | 50 - 54 | 429,659 | 5.82% |  | 206,885 | 222,774 |  |
|  | 55 - 59 | 369,215 | 5.00% |  | 180,059 | 189,156 |  |
|  | 60 - 64 | 311,882 | 4.22% |  | 151,777 | 160,105 |  |
|  | 65 - 69 | 261,241 | 3.54% |  | 127,362 | 133,879 |  |
|  | 70 y más | 558,813 | 7.57% |  | 269,279 | 289,534 |  |
| Fuente: Estimación del INALI con base en: Encuesta Intercensal 2015, Microdatos, INEGI. | | | | | | | |

**Censo Alojamientos y Asistencia Social (CAAS 2015)**

El Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) es el primer proyecto que se realiza para generar información estadística de la población usuaria residente, del personal que ahí labora, de las características de los inmuebles y sobre los servicios que otorgan.

Sobre el tema de población indígena en el instrumento de captación de este proyecto estadístico se incluyeron preguntas respecto a las siguientes variables: Habla lengua indígena o extranjera, nombre de la lengua indígena y habla española.

En los tabulados básicos se presenta información sobre la población que trabaja y de la población usuaria residente en alojamientos de asistencia social por entidad federativa y clase de alojamiento según condición que habla lengua indígena o extranjera.

De acuerdo con los resultados del CAAS 2015, a nivel nacional de un total de 55,440 trabajadores en alojamientos de asistencia social únicamente 844 (1.5%) hablan alguna lengua indígena.

Asimismo, a nivel nacional de un total de 116,620 personas de 3 años y más usuarias residentes en centros de alojamiento de asistencia social sólo 3.4% (3,948 personas) son hablantes de lengua indígena (**ANEXO 1**). La información mencionada también se puede consultar en el siguiente link: <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encotras/caas/2015/>.

**Características de las localidades 2014**

Este proyecto estadístico captó información en cabeceras municipales con menos de 2,500 habitantes; localidades con menos de 5,000 habitantes, no conurbadas a otra de 5,000 o más habitantes; conurbaciones dentro del municipio, menores de 5,000 habitantes; y localidades urbanas o rurales que no son desarrollos habitacionales, ubicadas dentro del perímetro de 3 km de una localidad con 5,000 o más habitantes.

El instrumento de captación del proyecto estadístico de Características de las localidades 2014, incluyó dentro de sus preguntas las que se refieren a sí actualmente se habla una lengua indígena en la localidad y su ámbito de uso (escuela, iglesia, festividades, comprar o vender, entre familiares y vecinos, y en el hogar).

Los resultados muestran a nivel nacional que de un total de 194,992 localidades habitadas, se registraron 22,448 (11.5%) localidades con 30% y más de población hablante de lengua indígena en 2010.

Asimismo, a nivel nacional, el uso de las lenguas indígenas se captó en 22,448 localidades y el porcentaje de localidades por ámbitos de uso de las lenguas indígenas en el hogar fue de 96.8%, entre familiares y vecinos 96.2%, comercio 80.6%, festividades 78.9%, iglesia 69.6% y escuela 68.4% (**ANEXO 2**). La información mencionada también se puede consultar en el siguiente link: <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encotras/cleu/2014/>.

**Manera en que se promueve la autoidentificación de los pueblos indígenas**

El Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), promueve la autoidentificación de la población indígena en sus proyectos estadísticos censales captando y publicando información sobre estas poblaciones bajo el criterio de autorreconocimiento.

En los censos de población y vivienda de 2000 y 2010, así como de la EIC2015 se identificó el volumen de población indígena, utilizando una pregunta con el criterio de autorreconocimiento en los instrumentos de captación, es decir, indagando si la persona se consideraba o no indígena.

En el censo de 2000 la pregunta fue “¿(NOMBRE) es náhuatl, maya, zapoteco, mixteco o de otro grupo indígena?, mientras que para el censo de 2010 y la EIC 2015 se formuló de la siguiente manera “De acuerdo con su cultura, (NOMBRE) se considera indígena?

Los resultados obtenidos en la EIC 2015 fueron los siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Autoadscripción como indígena. Nacional.** | |  |  |
| Población total del país: | | 119,530,753 |  |
| Población que se **autoadscribe como indígena**: | | **25,694,928** |  |
| % respecto a la población de la entidad: | | **21.5%** |  |
| Se considera indígena. Sí en parte | | **1,903,998** |  |
| Se considera indígena. Sí y sí en parte | | **27,598,926** | 23.1% |
| Población de 3 años y más que se **autoadscribe como indígena** según condición de **hablante de alguna lengua indígena** | | | |
| **Habla alguna lengua indígena** | Sí | 6,706,487 | 26.1% |
| No | 17,673,179 | 68.8% |
| No especificado o fuera del rango de edad | | 1,315,262 | 5.1% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| Fuente: Estimación del INALI con base en: Encuesta Intercensal 2015, Microdatos, INEGI. |  | | |
|  |  | | |
| **Hablantes de alguna lengua indígena Nacional.**  Población total de la entidad: 119,530,753  Población total de la entidad de 3 años y más: 113,294,340  Población 3 años y más hablante de alguna lengua indígena (HLI) 7,382,785  % respecto a la población de la entidad: 6.5% |  | | |
| **HLI por Agrupación lingüística. Nacional.** | |  |
| 00_Nacional.jpg | |  |
| Fuente: Estimación del INALI con base en: Encuesta Intercensal 2015, Microdatos, INEGI. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HLI por condición de autoadscripción indígena y sexo. Nacional.** | | | | | | | | | | |
|  |  | Total | |  | Hombre | |  | Mujer | |  |
|  |  | Abs. | % |  | Abs. | % |  | Abs. | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nacional | 7,382,785 | 100 |  | 3,596,112 | 100 |  | 3,786,673 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sí | 6,706,487 | 90.84 |  | 3,254,206 | 90.49 |  | 3,452,281 | 91.17 |  |
|  | Sí, en parte | 85,451 | 1.16 |  | 43,765 | 1.22 |  | 41,686 | 1.10 |  |
|  | No | 535,368 | 7.25 |  | 268,211 | 7.46 |  | 267,157 | 7.06 |  |
|  | No sabe | 40,379 | 0.55 |  | 22,759 | 0.63 |  | 17,620 | 0.47 |  |
|  | No especificado | 15,100 | 0.20 |  | 7,171 | 0.20 |  | 7,929 | 0.21 |  |
| Fuente: Estimación del INALI con base en: Encuesta Intercensal 2015, Microdatos, INEGI. | | | | | | |  |  |  |  |

**Artículo 2 y 33**

**México 2018**

**Observación 2013**

*Artículos 2 y 33. Acción coordinada y sistemática. La Comisión toma nota de los recursos presupuestarios asignados para el período 2012 2013 destinados a la atención de la población indígena y del impacto de los programas y actividades desarrollados por la CDI. Los programas ejecutados por la CDI que contaron con la mayor asignación presupuestaria para el período 2012 2013 fueron: el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), el Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) y el Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI). Durante el período 2011 2013, el PIBAI logró beneficiar, a través de acuerdos de coordinación o bien por ejecución directa, a 2,321,000 habitantes; el PFRI financió 3,433 proyectos productivos, beneficiando a 31,987 productores indígenas, de los cuales 53,8 por ciento son mujeres; y, por su parte, el POPMI apoyó 7,696 proyectos productivos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 82,739 mujeres indígenas residentes en localidades de alta y muy alta marginación. Además, la Comisión toma nota con* **interés** *de la inclusión de la estrategia 2.2.3 en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018, publicado en mayo de 2013, que cuenta con tres líneas de acción destinadas a impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas, a fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario y a promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas. Además, en febrero de 2013, se estableció una Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, en la Secretaría de Gobernación.* **La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre el impacto de los programas y proyectos ejecutados para promover los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Sírvase indicar cómo se ha hecho partícipes a los pueblos interesados del desarrollo de los programas y medidas ejecutadas.**

En materia indígena, el Gobierno de la República ha asumido el compromiso de “apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas de todo el país”, a través de políticas públicas que promueven su desarrollo y bienestar a través de promover el respeto y garantizar los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los pueblos indígenas.

Con base en ello la CDI, definió sus ejes estratégicos de actuación bajo una visión de perspectiva de género e interculturalidad, a efecto de promover acciones de política que permitan cerrar las brechas que impiden el pleno acceso de las mujeres y niñas indígenas al desarrollo.

* Derechos Indígenas y Acceso a la Justicia, que impulsa la armonización legislativa, y el apoyo legal a indígenas encarcelados o sujetos a algún tipo de proceso penal, agrario o administrativo.
* Desarrollo Social, a través del cual se da atención a las necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda e infraestructura básica.
* Desarrollo Económico, el cual considera la promoción y diversificación de las fuentes de ingreso monetario y no monetario para las comunidades y familias indígenas.
* Participación de la sociedad indígena y coordinación intergubernamental para la planeación y gestión del desarrollo de los Pueblos Indígenas.
* Preservación y fomento de la cultura de los Pueblos Indígenas para coadyuvar en la revaloración del patrimonio cultural nacional y elemento articulador de los anteriores cuatro ejes estratégicos de atención.

Una de las características esenciales de la acción institucional de la CDI ha sido el reconocimiento de que sólo a través de las acciones transversales se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo de los Pueblos Indígenas. La conjunción de esfuerzos y recursos federales, estatales y municipales, así como de los sectores público, social y privado e instancias internacionales, puede lograr que los derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas sean vigentes.

**ACCIONES Y OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 2013-2017.**

**DERECHOS INDÍGENAS Y ACCESO A LA JUSTICIA.**

En el marco de una política pública de derechos humanos, con perspectiva intercultural y de género la CDI, por medio de su *Programa de Derechos Indígenas,* ha promovido el reconocimiento y la vigencia de los derechos de los Pueblos Indígenas y el acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades para el ejercicio de sus derechos.

Destacan las acciones realizadas en materia de reconocimiento del derecho a la identidad a partir del cual se han realizado acciones para garantizar que la población indígena cuente con un nombre y una nacionalidad, es decir, para el registro de personas, la reexpedición de actas de nacimiento, rectificaciones en datos o aclaraciones. El resultado de esta acción conlleva a su inclusión en la vida social, económica, política y cultural de la Nación.

A fin de garantizar el acceso a la justicia en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con un enfoque intercultural y multilingüe, se brinda atención a indígenas en materia penal y penitenciaria contribuyendo a que la población indígena sujeta a un proceso o sentenciada, acceda a la jurisdicción del Estado conforme a derecho, proporcionando servicios de asesoría y gestión en favor de integrantes de pueblos y comunidades indígenas, dando particular atención a las víctimas del delito.

En materia de excarcelación, se ha logrado la liberación de casi 5 mil personas indígenas a través del apoyo económico para la aplicación de medidas cautelares (Garantía económica, reparación del daño, sanción pecuniaria) o salidas alternas (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias) en términos de la nueva legislación que rige al sistema de justicia penal acusatorio.

También se ha dado un impulso a una política pública de derechos humanos con perspectiva de género e interculturalidad, para fortalecer las capacidades en el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, y con ello contribuir a la disminución de las brechas de desigualdad de género mediante la implementación de acciones para la apertura y operación de las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) que es un espacio físico en el cual las mujeres indígenas brindan atención a otras mujeres, desde una perspectiva de género, intercultural y derechos humanos y materia de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

* De enero de 2013 a septiembre de 2017 se autorizó la apertura de 14 casas de la Mujer Indígena, (Representa el 43.75% del total de casas). A la fecha se cuenta con 31 CAMI en 16 entidades federativas.[[3]](#footnote-3)

**DESARROLLO SOCIAL.**

En materia de desarrollo social, la CDI lleva a cabo obras de infraestructura que garanticen el acceso a los servicios básicos en la vivienda y que mejoran la calidad de vida de las familias indígenas y contribuyen a la disminución de la incidencia de enfermedades asociadas a las carencias de estos servicios.

Con el *Programa de Infraestructura Indígena* se ha contribuido a que los habitantes de las localidades indígenas superen el aislamiento y tengan acceso a bienes y servicios básicos, mediante la construcción de infraestructura para agua potable, drenaje y electricidad, comunicación terrestre, vivienda y salud.

Con estas acciones se han mejorado las condiciones de bienestar de la población indígenas y se han reducido considerablemente las brechas de carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda entre la población indígena y la no indígena.

El derecho a la educación, es un derecho fundamental, con el propósito de garantizarlo, la CDI, brinda apoyo a niñas, niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, para coadyuvar en su permanencia en el sistema educativo, a través de diferentes modalidades de atención, priorizando a aquellos educandos que no tienen opciones educativas en su comunidad.

Con el *Programa de Apoyo a la Educación* se proporcionan servicios de hospedaje, alimentación, salud y para el fortalecimiento de su identidad cultural a través de actividades de recreación y esparcimiento.

Anualmente, la CDI contribuye a que más de 74 mil niñas, niños y jóvenes indígenas concluyan de manera satisfactoria su ciclo educativo de preescolar, primaria, secundaria o bachillerato.

Es importante señalar que, bajo este programa, durante un ciclo escolar se otorga diariamente 225,000 raciones nutritivas y balanceadas de alimentos calientes, en las 1,321 casas y comedores del Niño Indígena y comunitarios, consistente en desayuno, comida y cena.

Asimismo, la CDI beneficia a 8,994 estudiantes indígenas de nivel superior con una beca económica y apoyos para la titulación, lo que contribuye a cerrar las brechas en el acceso a todos los niveles de educación para las y los jóvenes indígenas.

Actualmente se encuentra en desarrollo las Casas del Joven Universitario Indígena que dará atención a estudiantes indígenas de nivel superior, esta modalidad esta próxima a iniciar en Quintana Roo, Sinaloa y Oaxaca.

**DESARROLLO ECONÓMICO.**

Con el *Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena*, la CDI fomenta el bienestar a la población indígena a través de la sostenibilidad de las actividades productivas que permiten impulsar el desarrollo económico con la puesta en marcha de proyectos productivos que mejoran el ingreso.

Los proyectos se trabajan bajo esquemas de planeación participativa y orientados a ser sostenibles con pertinencia cultural y con equidad de género.

Con el propósito de fortalecer la productividad y la comercialización de los productos y servicios que ofrecen los productores indígenas se crearon y registraron las marcas colectivas “Manos Indígenas Calidad Mexicana” y “Paraísos Indígenas” que otorgan un distintivo de calidad y con ello un valor agregado que facilita su ingreso y venta en el mercado local y nacional; así como promover la riqueza cultural y natural de los sitios turísticos de las comunidades indígenas.

“Manos Indígenas Calidad Mexicana”, es una marca distintiva de calidad que acompaña el esfuerzo, dedicación e identidad que cada uno de los productores y artesanos indígenas de México imprime a sus productos.

La marca “Paraísos Indígenas”, garantiza la calidad que brindan los grupos indígenas organizados dedicados a la actividad turística y reconoce el alto valor natural, cultural e histórico de los sitios, bajo el resguardo de las comunidades que permite conservar, transmitir y compartir su herencia cultural.

A la fecha, 105 empresas turísticas indígenas, ubicadas en 15 estados[[4]](#footnote-4), cuentan con la marca Paraísos Indígenas.

Asimismo, para facilitar el ingreso de los productos y servicios a los circuitos comerciales se creó el espacio “Expo de los Pueblos Indígenas” para la promoción y comercialización de los productos y servicios con el objetivo de impulsar la comercialización de los productos indígenas.

**PRESERVACIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA.**

A partir de que se reconoce que el patrimonio cultural de los pueblos indígenas es un bien social que da cohesión e identidad colectiva y es un factor de desarrollo, la CDI lleva a cabo, entre otras, acciones que promueven el ejercicio de sus derechos culturales, impulsan la creatividad y la recuperación de los elementos y manifestaciones de su patrimonio cultural, así como apoyo a la documentación y difusión de dichas manifestaciones culturales.

**INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA.**

Los indicadores socioeconómicos, son una herramienta que, a partir de variables cuantitativas o cualitativas, miden el logro de los objetivos de los programas y políticas de desarrollo social. A través del seguimiento de estos indicadores, es posible contar con información oportuna sobre el desempeño del Estado mexicano.

Los datos de la Encuesta Intercensal del 2015, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que en los últimos cinco años se registran importantes significativas en las brechas existentes entre la población indígena y no indígena en materia de las coberturas de los servicios de agua potable, drenaje y electrificación, así como de los servicios de salud y el analfabetismo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | 2010 | | | 2015 | | | Reducción  de brecha  2010-2015 |
| **% de cobertura población no indígena** | **% de cobertura**  **población indígena** | **Brecha**  **(Puntos porcentuales)** | **% de cobertura población no indígena** | **% de cobertura**  **población indígena** | **Brecha (Puntos porcentuales)** |
| Agua potable | 93.3 | 72.5 | 20.8 | 96.3 | 87.2 | 9.1 | 11.7 |
| Drenaje | 92.8 | 63.6 | 29.2 | 95.0 | 73.1 | 21.9 | 7.3 |
| Electricidad | 98.3 | 92.5 | 5.8 | 98.9 | 95.6 | 3.3 | 2.5 |
| Analfabetismo | 5.4 | 21.5 | 16.1 | 4.2 | 17.8 | 13.6 | 2.5 |
| Servicios de Salud | 65.3 | 57.8 | 7.5 | 82.1 | 83.1 | -1.1 | 8.6 |

Por otra parte, los indicadores de la medición de la pobreza calculados por la instancia gubernamental responsable de la evaluación de la política social del Estado Mexicano –Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) – denotan avances positivos en los indicadores socioeconómicos a nivel nacional. Los resultados de pobreza para el 2016, señalan lo siguiente:

* El número de personas en situación de pobreza disminuyó de 2010 (8.5 millones) al 2016 (8.3 millones), en términos porcentuales pasó de 74.8% al 71.9%, respectivamente.
* El número de personas en situación de pobreza extrema en 2016 (3.2 millones) fue menor que en el 2010 (4.3 millones). En porcentajes disminuyó en 2016 al 28.0%, cuando en 2010 fue de 37.8%.

**CARENCIAS SOCIALES.**

* Entre 2010 y 2016, se observa una mejora continua en los indicadores de carencias sociales.
* El número de carencias promedio de la población en situación de pobreza, pasó de 3.4 a 2.8 entre 2010 y 2016.
* De igual forma, las carencias sociales promedio de la población en situación de pobreza extrema se redujeron de 4.0 a 3.6.
* Los porcentajes de población con carencias se han disminuido.
* El rezago educativo se ha reducido del 2010 (36.2%) al 2016 (31.6%).
* La carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó, al pasar de 36.0% en 2010 a 15.1% en 2016.
* La carencia por acceso a la seguridad social tuvo un decremento en el periodo 2010-2016. Al pasar de 81.5% a 77.6 por ciento.
* La carencia por calidad y espacios de la vivienda ha tenido una reducción del 2010 (40.2%) al 2016 (30.2%).
* La carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en 2016 fue menor (56.3%) al 2010 (65.3%).
* La carencia por acceso a la alimentación también ha tenido una reducción en el periodo 2010-2016, pasando de 39.7% en 2010 a 30.5% en 2016.
* La población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo en 2016 (41.9%) fue menor que la reportada en 2010 (45.5%).
* La población con un ingreso inferior a la línea de bienestar en 2016 (74.3%) fue menor que la reportada en 2010 (76.4%).

**RESULTADOS DE POBREZA A NIVEL NACIONAL Y**

**EN LA POBLACIÓN INDÍGENA, 2012-2016.**

|  |  |
| --- | --- |
| **POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, 2012-2016.** | **POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, 2012-2016.** |

*Fuente: Elaborado con información del CONEVAL, Resultados de Pobreza 2016.*

|  |  |
| --- | --- |
| **REZAGO EDUCATIVO, 2012-2016.** | **CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, 2012-2016.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, 2012-2016.** | **CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN.** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, 2012-2016.** | **CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, 2012-2016. (SIN COMBUSTIBLE).** |

Para México, el diálogo y la comunicación con los pueblos indígenas resulta imprescindible para fortalecer los objetivos de respeto, integración, desarrollo y autodeterminación de los pueblos indígenas, a fin de lograr una oportuna atención que abone a la paz y a la gobernabilidad de las comunidades, así como a la conservación de sus costumbres, cultura y lengua indígena. Por ello, como es del conocimiento de la Comisión, el 13 de febrero de 2013, el Gobierno mexicano creó la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM). **ANEXO 3.**

Con el compromiso de establecer un diálogo constructivo y permanente con los pueblos indígenas para encontrar alternativas de solución a sus problemáticas, principalmente en materia de derechos humanos y colectivos como la libre determinación, sistemas normativos, representación política, participación, organización, consulta y reconocimiento territorial, así como el atender conflictos agrarios, sociales y de acceso a la justicia, se han realizado desde la creación de la CDPIM, diversas mesas interinstitucionales de trabajo con la finalidad de distender los conflictos y contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país.

De forma particular, en el año 2013, la CDPIM recibió una solicitud de intervención en el proceso para la liberación del Profesor Tzotzil Alberto Patishtán Gómez, acusado por haber presuntamente cometido los delitos de homicidio, lesiones, robo y portación de arma prohibida, por los hechos violentos ocurridos el 12 de junio de 2000, en el Municipio de El Bosque, Chiapas; del que resultaron 7 personas fallecidas y 2 lesionadas. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, confirmó la sentencia impuesta por el Juez Primero de Distrito de aquel Estado, mediante la cual se le condenó a 60 años de prisión, agotando con ello el último recurso legal del Profesor Tzotzil.

Sin embargo, después de que la CDPIM realizó una revisión exhaustiva de su proceso jurídico y agotadas todas las instancias legales, la citada Comisión impulsó ante los legisladores de la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión, reformar el Código Penal Federal, lográndose la modificación del artículo 97 Bis, con lo cual, de manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad pública, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada y el Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.

Esta reforma al Código Penal Federal permitió que el caso del Prof. Tzotzil Alberto Patishtán Gómez fuera revisado y que el 31 de octubre de 2013 se le concediera el indulto, quedando en libertad. **ANEXO 4.**

En el año 2014, la CDPIM sostuvo mesas de trabajo con funcionarios y legisladores federales en las que se propuso garantizar la protección de los derechos colectivos indígenas en el marco de la Reforma Energética, con lo que logró, mediante acuerdos, que en los Dictámenes de los Proyectos de Decretos aprobados por el Congreso de la Unión, en los artículos 119 y 120 de la Nueva Ley de Hidrocarburos, se incluyera la realización de un estudio de impacto social y se llevaran a cabo los procedimientos de una consulta previa, libre e informada; de igual manera, en el artículo 119 de la Nueva Ley de Industria Eléctrica, se logró incluir la realización de la consulta indígena ante cualquier proyecto.

Durante ese mismo año, la CDPIM elaboró una propuesta para armonizar el marco jurídico nacional con los acuerdos y tratados internacionales en materia indígena, misma que contenía las aportaciones de representantes indígenas que participaron en el Foro “Derechos Indígenas y Armonización Legislativa”, realizado en el mes de febrero. Dicha propuesta fue entregada en diciembre de 2014 a la SEGOB para su análisis y observaciones. **ANEXO 5.**

A principios de 2017, diversas organizaciones indígenas asociadas en una red nacional solicitaron la intervención de la CDPIM para impulsar la representación indígena en los órganos legislativos ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Luego de la resolución a finales de ese año del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de un acuerdo del INE, y del proceso electoral del 1 de julio de 2018, por primera vez en la Cámara de Diputados habrá 13 legisladores indígenas.

En lo que respecta al impacto de los programas y proyectos ejecutados para promover los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y cómo se ha hecho partícipes a los pueblos interesados en el desarrollo de los programas y medidas ejecutadas, en 2018, el presupuesto federal para la atención de los pueblos y comunidades indígenas ha tenido un incremento con respecto a 2017 de 7.9%, al pasar de 74,895.77 a 80,884.56 millones de pesos.

Estos recursos se encuentran distribuidos en 16 ramos presupuestarios, los de mayor cuantía corresponden a Desarrollo Social; el Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Educación; el presupuesto de la CDI y salud. En estos ramos se concentran casi cuatro quintas partes del presupuesto federal para la atención de la población indígena con un monto de 63,981.31 millones de pesos.

**Distribución del presupuesto 2018 para la atención de la población indígena por ramo presupuestario**

**(Millones de pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAMO PRESUPUESTARIO** | **PEF PI 2018**  **(mdp)** | **%** | **%**  **acumulado** |
| 20 Desarrollo Social | 31,044.32 | 38.4 | 38.4 |
| 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativa y Municipios | 11,305.33 | 14.0 | 52.4 |
| 11 Educación Pública | 10,128.11 | 12.5 | 64.9 |
| 47 Entidades no sectorizadas | 6,088.94 | 7.5 | 72.4 |
| 12 Salud | 5,414.62 | 6.7 | 79.1 |
| 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 5,240.05 | 6.5 | 85.6 |
| 19 Aportaciones a Seguridad Social | 3,956.98 | 4.9 | 90.5 |
| 09 Comunicaciones y Transportes | 3,838.07 | 4.7 | 95.3 |
| 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 1,622.81 | 2.0 | 97.3 |
| 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1,407.92 | 1.7 | 99.0 |
| 23 Provisiones Salariales y Económicas | 584.00 | 0.7 | 99.7 |
| 48 Cultura | 74.91 | 0.1 | 99.8 |
| 21 Turismo | 56.04 | 0.1 | 99.9 |
| 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 30.00 | 0.0 | 99.9 |
| 04 Gobernación | 27.41 | 0.0 | 100.0 |
| 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 25.06 | 0.0 | 100.0 |
| Total | 80,844.56 | 100 | |

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

La evolución, entre los años 2013 y 2018, del presupuesto aprobado en el Anexo de Erogaciones para el Desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas muestra un incremento de 9.1%. A lo largo de este periodo, se han ajustado ramos presupuestales y programas con el objetivo de mejorar la atención por parte del Estado mexicano, a través de políticas públicas, para abatir la pobreza y discriminación de esta población.

**DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 – 2018 PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA POR RAMO PRESUPUESTARIO**

**(MILLONES DE PESOS)**



En 2018, el presupuesto federal aprobado para la atención de los pueblos indígenas es de 80,844.56 millones de pesos, 7.49% mayor que en 2017 pero 5.2% menor que en 2016. Este decremento, que también se refleja en el presupuesto asignado a la CDI (4.9% y -4.8%, respectivamente), se realizó conforme a las directrices que el Gobierno Federal tuvo que tomar para hacer frente a las circunstancias económicas por las que atravesó el país derivadas de la crisis económica mundial.

**Recursos del Presupuesto 2013 – 2018 para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)**

**(Millones de pesos)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ramo 47 Entidades no sectorizadas (CDI)** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Presupuesto Federal para Pueblos Indígenas | 74,102.06 | 77,174.10 | 82,185.90 | 85,260.40 | 74,895.80 | 80,844.56 |
| Presupuesto para la CDI | 10,364.12 | 11,408.83 | 12,129.31 | 11,900.50 | 5,806.61 | 6,088.94 |
| Porcentaje de presupuesto de la CDI con respecto al presupuesto federal | 14.0 | 14.8 | 14.8 | 14.0 | 7.8 | 7.5 |

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

En el ramo 47 Entidades no sectorizadas se ubica el presupuesto de la CDI con un monto ejercido del orden de 4,672.75 millones de pesos, por los Programas de Infraestructura Indígena (PROII), Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN), Derechos Indígenas (PRODEI) y el Apoyo a la Educación Indígena (PAEI).

**Cumplimiento porcentual de los programas del ramo 47 (CDI) con recursos para población indígena 2017**

**(Millones de pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Aprobado** | **Ejercido** | **% de cumplimiento** |
| Apoyo a la educación indígena | 1,261.60 | 1,192.36 | 94.5 |
| Infraestructura indígena | 2,264.13 | 2,428.54 | 107.3 |
| Mejoramiento de la producción y la productividad indígena | 772.21 | 844.47 | 109.4 |
| Derechos indígenas | 288.68 | 207.38 | 71.8 |

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

En 2014, se reformaron los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a efecto de alinearse con lo establecido en el Programa Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014 – 2018, por lo que ahora las acciones que realiza la Comisión se enmarcan en cuatro grandes programas, a saber: i) Programa de Derechos Indígenas (PRODEI), ii) Programa de Infraestructura Indígena (PROII), iii) Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN), y iv) Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), todos los programas publican anualmente reglas de operación en las que se establecen las convocatorias para el otorgamiento de apoyos, dichas reglas se promueven y difunden a través de la página de internet de la CDI y las radiodifusoras indigenistas de la CDI.

**Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN)**

Tiene como objetivo impulsar la consolidación de proyectos productivos y turísticos, para la población indígena organizada en grupos, sociedades o empresas; para mejorar sus ingresos monetarios y/o no monetarios y crear condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres.

El PROIN consolida los esfuerzos de los programas productivos que hasta el ejercicio fiscal 2013 operaban por separado: Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI), Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI), Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) y Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI); así como del proyecto no sujeto a reglas de operación denominado Proyectos de Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas (MANCON).

En lo que se refiere al apoyo a proyectos productivos, el PROIN cuenta con los siguientes tipos de apoyo: Proyectos Productivos Comunitarios, Mujer Indígena, Turismo de Naturaleza y Acciones para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático (Este último dentro de Apoyos Complementarios). Desde su creación, en 2014 al primer trimestre de 2018, los resultados alcanzados por su tipo de apoyo son los siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUJER INDÍGENA** | | | | |
| **Año** | **Presupuesto ejercido** | **Acciones** | **Beneficio total** | **Beneficio mujeres** |
| **2014** | $432,368,380.19 | 3033 | 22,298 | 22,298 |
| **2015** | $381,908,629.54 | 2,923 | 20,213 | 20,213 |
| **2016** | $316,400,288.51 | 2,736 | 17,077 | 17,077 |
| **2017** | $250,212,805.57 | 2,139 | 12,586 | 12,586 |
| **2018** | $48,203,056.00 | 368 | 2,210 | 2,210 |
| **Total** | **$1,429,093,159.81** | **11,199** | **74,384** | **74,384** |

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS** | | | | | |
| **Año** | **Presupuesto ejercido** | **Acciones** | **Beneficio total** | **Beneficio hombres** | **Beneficio mujeres** |
| **2014** | $448,092,515.00 | 2,071 | 18,993 | 10,313 | 8,680 |
| **2015** | $499,517,698.55 | 3,361 | 25,596 | 13,344 | 12,252 |
| **2016** | $588,948,510.29 | 4,672 | 35,789 | 18,753 | 17,036 |
| **2017** | $271,533,377.56 | 1,789 | 13,739 | 5,395 | 8,344 |
| **2018** | $43,191,395.00 | 318 | 1,881 | 895 | 986 |
| **Total** | **$1,851,283,496.40** | **12,211** | **95,998** | **48,700** | **47,298** |

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TURISMO DE NATURALEZA** | | | | | |
| **Año** | **Presupuesto ejercido** | **Acciones** | **Beneficio total** | **Beneficio hombres** | **Beneficio mujeres** |
| **2014** | $175,268,030.33 | 241 | 6,679 | 4,294 | 2,385 |
| **2015** | $216,646,223.85 | 207 | 11,256 | 8,963 | 2,293 |
| **2016** | $200,319,337.20 | 219 | 15,940 | 12,601 | 3,339 |
| **2017** | $22,100,000.00 | 48 | 3,681 | 2,935 | 746 |
| **Total** | $614,333,591.38 | 715 | 37,556 | 28,793 | 8,763 |

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO** | | | | | |
| **Año** | **Presupuesto ejercido** | **Acciones** | **Beneficio total** | **Beneficio hombres** | **Beneficio mujeres** |
| **2014** | $55,245,920.27 | 280 | 10,320 | 5,316 | 5,004 |
| **2015** | $60,326,830.00 | 251 | 8,377 | 4,859 | 3,518 |
| **2016** | $116,781,129.00 | 400 | 32,358 | 18,710 | 13,648 |
| **2017** | $55,000,000.00 | 401 | 34,929 | 20,121 | 14,808 |
| **Total** | $287,353,879.27 | 1,332 | 85,984 | 49,006 | 36,978 |

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

Desde el ejercicio de 2014 al Primer trimestre del ejercicio de 2018, el PROIN ha apoyado la implementación de 25,457 proyectos productivos y turísticos, ejerciendo un presupuesto de $4,182,064,126.86 pesos, en beneficio de 293,922 personas indígenas, siendo 126,499 hombres y 167,423 mujeres, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROIN 2014 - 2018** | | | | | |
| **Año** | **Presupuesto ejercido** | **Acciones** | **Beneficio total** | **Beneficio hombres** | **Beneficio mujeres** |
| **2014** | $1,110,974,845.79 | 5,625 | 58,290 | 19,923 | 38,367 |
| **2015** | $1,158,399,381.94 | 6,742 | 65,442 | 27,166 | 38,276 |
| **2016** | $1,222,449,265.00 | 8,027 | 101,164 | 50,064 | 51,100 |
| **2017** | $598,846,183.13 | 4,377 | 64,935 | 28,451 | 36,848 |
| **2018** | $91,394,451.00 | 686 | 4,091 | 895 | 3,196 |
| **Total** | $4,182,064,126.86 | 25,457 | 293,922 | 126,499 | 167,423 |

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

**Programas de Infraestructura Indígena (PROII)**

El PROII está orientado a disminuir los rezagos de infraestructura básica para que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen su aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de agua potable, alcantarillado, electrificación, caminos y carreteras. El programa se instrumenta de manera focalizada, atendiendo a la población que se ubica en localidades que cumplen con los 3 requisitos que se enuncian a continuación, en función de información oficial derivada de Censos y Conteos Poblacionales:

1. Con 40% y más de población indígena.
2. De 50 a 15,000 habitantes.
3. De alta y muy alta marginación.

**Ejercicio 2013**

**Suma total de recursos**

**(Millones de pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **MONTO** | **CDI** | **GOBIERNOS ESTATALES** | **ENTIDADES FEDERALES** |
| **Acuerdos de Coordinación y Ejecución Directa** | 6,395.2 | 5,165.6 | 1,229.6 | 0.0 |
| **Convenio de colaboración** | 592.7 | 330.5 | 71.8 | 190.4 |
| **Total** | **6,987.9** | **5,496.1** | **1,301.4** | **190.4** |

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

El PROII aplicó un presupuesto directo de inversión de 5,496.1 millones de pesos, de los cuales, 5,165.6 millones de pesos se canalizaron a la ejecución de 1,142 obras y acciones comprometidas a través de Acuerdos de Coordinación firmados con Gobiernos Estatales o bien por ejecución directa y 330.5 millones de pesos a la ejecución de obras de infraestructura eléctrica en diversos estados, en el marco de los convenios suscritos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta inversión fue complementada con 1,301.4 millones de pesos, producto de las aportaciones de los gobiernos locales, y 190.4 millones de pesos por parte de las entidades federales, para una inversión total de 6,987.9 millones de pesos.

**Convenios suscritos por la CFE.**

En 2013, la CFE celebró convenios por un total de 592.7 millones de pesos, de los cuales la CDI aportó 330.5 millones de pesos, los gobiernos estatales 71.8 millones de pesos y la CFE aportó los 190.4 millones de pesos restantes para la construcción de 419 obras de infraestructura eléctrica en los Estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.

Las obras y acciones ejecutadas en el ejercicio fiscal 2013 beneficiaron aproximadamente a 1,428,000 habitantes, ubicados en 2,563 localidades de 24 entidades federativas.

**Ejercicio 2014**

**SUMA TOTAL DE RECURSOS-\*/**

**(Millones de pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Monto** | **CDI** | **Gobiernos Estatales** | **Entidades federales** |
| **Acuerdos de Coordinación y Ejecución Directa** | 7,119.6 | 5,885.1 | 1,234.5 | 0.0 |
| **Convenio de colaboración** | 1,407.4 | 724.6 | 221.0 | 461.8 |
| **Total** | **8,527.0** | **6,609.7** | **1,455.5** | **461.8** |

-\*/No incluye 189.6 mdp de gastos de operación.

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

En 2014, el PROII aplicó un presupuesto directo de inversión de 6,609.7 millones de pesos, de los cuales, 5,885.1 millones de pesos se canalizaron a la ejecución de 1,377 obras y acciones comprometidas a través de Acuerdos de Coordinación firmados con gobiernos estatales o bien por ejecución directa y 724.6 millones de pesos a la ejecución de obras de infraestructura eléctrica en diversos Estados, en el marco de los convenios suscritos con la CFE.

Convenios Suscritos.

En 2014, la CFE celebró convenios por un valor de 1,179.4 millones de pesos, de los cuales la CDI aportó 617.7 millones de pesos, los gobiernos estatales 176.8 millones de pesos y la CFE aportó los 384.9 millones de pesos restantes para la construcción de 967 obras de infraestructura eléctrica en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) suscribió un Convenio por 198 millones de pesos, de los cuales la CDI aportó 76.9 millones de pesos, los gobiernos estatales aportaron 44.2 millones de pesos y la CONAGUA aportó los 76.9 millones de pesos restantes para la construcción de 44 obras de infraestructura eléctrica en el Estado de Hidalgo.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) suscribió convenios por 30 millones de pesos, aportados en su totalidad por la CDI, para la construcción de 3 obras de infraestructura en materia de comunicación terrestre en el Estado de Hidalgo. Las obras y acciones ejecutadas en el ejercicio fiscal 2014 beneficiaron aproximadamente a 1,855,000 habitantes, ubicados en 2,447 localidades de 26 entidades federativas.

**Ejercicio 2015**

**SUMA TOTAL DE RECURSOS-\*/**

**(Millones de pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Monto** | **CDI** | **Gobiernos Estatales** | **Entidades federales** |
| **Acuerdos de Coordinación y Ejecución Directa** | 5,772.6 | 4,853.2 | 919.4 | 0.0 |
| **Convenio de colaboración** | 920.9 | 501.2 | 173.9 | 245.8 |
| **Total** | **6,693.5** | **5,354.4** | **1,093.3** | **245.8** |

-\*/No incluye 203.8 mdp de gastos de operación.

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

En 2015, el PROII aplicó un presupuesto directo de inversión de 5,354.4 millones de pesos, de los cuales 4,853.2 millones de pesos se canalizaron a la ejecución de 1,258 obras y acciones comprometidas a través de Acuerdos de Coordinación firmados con gobiernos Estatales o bien por ejecución directa y 501.2 millones de pesos a la ejecución de obras de infraestructura eléctrica en diversos Estados, en el marco de los Convenios suscritos con la CFE.

Esta inversión fue completada con 1,093.3 millones de pesos, producto de las aportaciones de los gobiernos locales, y 245.8 millones de pesos por parte de las entidades federales, para una inversión total de 6,693.5 millones de pesos.

Convenios suscritos.

La CFE suscribió convenios por 920.9 millones de pesos, de los cuales la CDI aportó 501.2 millones de pesos, los gobiernos estatales 173.9 millones de pesos y la CFE aportó los 245.8 millones de pesos restantes para la construcción de 694 obras de infraestructura eléctrica en los Estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.

Las obras y acciones ejecutadas en el ejercicio fiscal 2015 beneficiaron aproximadamente a 1,530,000 habitantes, ubicados en 2,152 localidades de 26 entidades federativas.

**Ejercicio 2016**

**SUMA TOTAL DE RECURSOS-\*/**

**(Millones de pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Monto** | **CDI** | **Gobiernos Estatales** | **Entidades federales** |
| **Acuerdos de Coordinación y Ejecución Directa** | 4,399.2 | 3,668.7 | 730.5 | 0.0 |
| **Convenio de colaboración** | 554.6 | 300.8 | 87.4 | 166.4 |
| **Total** | **4,953.8** | **3,969.5** | **817.9** | **166.4** |

-\*/No incluye 153.3 mdp de gastos de operación.

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

En 2016, el PROII aplicó un presupuesto directo de inversión de 3,969.5 millones de pesos, de los cuales 3,668.7 millones de pesos se canalizaron a la ejecución de 1,433 obras y acciones comprometidas a través de Acuerdos de Coordinación firmados con gobiernos estatales o bien por ejecución directa y 300.8 millones de pesos a la ejecución de obras de infraestructura eléctrica en diversos Estados, en el marco de los convenios suscritos con la CFE.

Esta inversión fue complementada con 817.9 millones de pesos, producto de las aportaciones de los gobiernos locales, y 166.4 millones de pesos por parte de las entidades federales, para una inversión total de 4,953.8 millones de pesos.

Convenios suscritos.

La CFE suscribió convenios por 554.6 millones de pesos, de los cuales la CDI aportó 300.8 millones de pesos, los gobiernos estatales 87.4 millones de pesos y la CFE aportó los 166.4 millones de pesos restantes para la construcción de 494 obras de infraestructura eléctrica en los Estados de Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz. Las obras y acciones ejecutadas en el ejercicio fiscal 2016 beneficiaron aproximadamente a 1,365,000 habitantes, ubicados en 2,033 localidades de 25 entidades federativas.

**Ejercicio 2017**

**SUMA TOTAL DE RECURSOS-\*/**

**(Millones de pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Monto** | **CDI** | **Gobiernos Estatales** | **Entidades federales** |
| **Acuerdos de Coordinación y Ejecución Directa** | 2,427.8 | 1,991.4 | 436.4 | 0.0 |
| **Convenio de colaboración** | 281.2 | 160.6 | 38.4 | 82.2 |
| **Total** | **2,709.0** | **2,152.0** | **474.8** | **82.2** |

-\*/No incluye 73.7 mdp de gastos de operación.

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

En 2017, el PROII aplicó un presupuesto directo de inversión de 2,152 millones de pesos, de los cuales, 1,991.4 millones de pesos se canalizaron a la ejecución de 778 obras y acciones comprometidas a través de Acuerdos de Coordinación firmados con gobiernos estatales o bien por ejecución directa y 160.6 millones de pesos a la ejecución de obras de infraestructura eléctrica en diversos Estados, en el marco de los convenios suscritos con la CFE.

Esta inversión fue complementada con 474.8 millones de pesos, producto de las aportaciones de los gobiernos locales, y 82.2 millones de pesos por parte de las entidades federales, para una inversión total de 2,709 millones de pesos.

Convenios suscritos.

La CFE suscribió convenios por 281.2 millones de pesos, de los cuales la CDI aportó 160.6 millones de pesos, los gobiernos estatales 38.4 millones de pesos y la CFE aportó los 82.2 millones de pesos restantes para la construcción de 143 obras de infraestructura eléctrica en los Estados de Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.

Las obras y acciones ejecutadas en el ejercicio fiscal 2017 beneficiaron aproximadamente a 863,000 habitantes, ubicados en 1,008 localidades de 24 entidades federativas.

**Ejercicio 2018**

**SUMA TOTAL DE RECURSOS-\*/**

**(Millones de pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Monto** | **CDI** | **Gobiernos Estatales** | **Entidades federales** |
| **Acuerdos de Coordinación y Ejecución Directa** | 2,954.7 | 2,303.1 | 651.6 | 0.0 |
| **Convenio de colaboración** | 59.9 | 49.8 | 6.5 | 3.6 |
| **Total** | **3,014.6** | **2,352.9** | **658.1** | **3.6** |

-\*/No incluye 72.1 mdp de gastos de operación.

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

Al mes de abril de 2018, el PROII tiene comprometido un presupuesto directo de inversión de 2,352.9 millones de pesos, de los cuales 2,303.1 millones de pesos se canalizarán a la ejecución de 710 obras y acciones comprometidas a través de Acuerdos de Coordinación firmados con gobiernos estatales o bien por ejecución directa y 49.8 millones de pesos a la ejecución de obras de infraestructura eléctrica en diversos Estados, en el marco de los convenios suscritos con la CFE.

Esta inversión será complementada con 658.1 millones de pesos producto de las aportaciones de los gobiernos locales y 3.6 millones de pesos de la CFE, para una inversión total de 3,014.6 millones de pesos.

Convenios suscritos.

La CFE suscribió convenios por 59.9 millones de pesos, de los cuales la CDI aporta 49.8 millones de pesos, 6.5 millones de pesos por parte de los gobiernos estatales y la CFE 3.6 millones de pesos para la construcción de 63 obras de infraestructura eléctrica en los Estados de Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco.

Con las acciones a realizar durante el ejercicio fiscal 2018 se espera beneficiar a aproximadamente 905,000 habitantes, ubicados en 723 localidades de 24 entidades federativas.

Edificación de vivienda.

En 2014, el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) incluyó en sus reglas de operación el tipo de apoyo a la edificación de vivienda, el cual lleva a cabo en coordinación con el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), a través de la firma de un Convenio de colaboración, con la finalidad de conjugar esfuerzos para reducir la carencia por calidad y espacios en la vivienda, a fin de que la población indígena habite en una vivienda con materiales resistentes.

Desde entonces, se han ejecutado las siguientes acciones:

**Acciones realizadas en el periodo 2014 - 2016[[5]](#footnote-5)**

**Ejercicio 2014**

**Suma total de recursos**

**(Millones de pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. acciones | No. beneficiarios | Monto | CDI | FONHAPO |
| 5693 | 25618.5 | $797,020,000.00 | $424,760,000.00 | $372,260,000.00 |

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

**Ejercicio 2015**

**Suma total de recursos**

**(Millones de pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. acciones | No. beneficiarios | Monto | CDI | FONHAPO |
| 6066 | 27297 | $849,240,000.00 | $427,000,000.00 | $422,240,000.00 |

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

**Ejercicio 2016**

**Suma total de recursos**

**(Millones de pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. acciones | No. beneficiarios | Monto | CDI | FONHAPO |
| 2329 | 10480.5 | $326,060,000.00 | $131,040,000.00 | $195,020,000.00 |

Fuente: Datos proporcionados por la CDI.

**PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS (PRODEI)**

**Tipos de apoyo: Acciones de fortalecimiento para el ejercicio de derechos, excarcelación de indígenas; intérpretes-traductores en lenguas indígenas.**

Con el propósito de contribuir a garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2018, la CDI promovió la excarcelación de 5,157 indígenas primo delincuentes y de escasos recursos económicos; a través del apoyo económico para garantizar su libertad provisional o definitiva ante las autoridades competentes y de actividades de colaboración institucional; propiciando con ello su reinserción al núcleo familiar y a la vida comunitaria. De este número de personas 491 son mujeres, y con esta acción llevada a cabo del 27 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014, se dio cumplimiento a la instrucción Presidencial 219, que estableció “Apoyar el programa de excarcelación de mujeres indígenas, específicamente a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, …”, ejerciendo un presupuesto total de $72,459,603.00.

Durante el mismo período, se han proporcionado 6,841 apoyos para intérpretes-traductores en lenguas indígenas, diligencias de carácter penal y administrativo, solicitados por las autoridades correspondientes. Se ejerció un presupuesto total de $6,921,261.04 pesos.

Adicionalmente, en el periodo 2013 – 2014 se aprobó el financiamiento de 1,618 proyectos presentados por organizaciones de la sociedad civil y núcleos agrarios, con el propósito de realizar acciones en torno a la capacitación y ejercicio de los derechos reconocidos en el orden jurídico nacional, así como para la promoción y actuación de acciones legales orientadas a la solución de asuntos jurídicos, excarcelación, registro civil, entre otros. En el período se ejerció un monto de $130,200 de pesos.

**Tipo de Apoyo para el Ejercicio del Derecho a la Identidad.**

El 27 de enero de 2016, se firmó el Convenio Marco de colaboración entre la CDI y la SEGOB para promover y garantizar el derecho a la identidad de la población indígena.

Con base en este convenio, en 2016 se instalaron 33 módulos de registro civil para población indígena en Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena (CCDI), se llevaron a cabo 4 campañas interestatales en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Sinaloa y dos campañas estatales en Campeche y Chiapas, que permitieron apoyar el ejercicio del derecho a la identidad de más de 52,832 personas indígenas, quienes ahora cuentan con sus actas de nacimiento.

En 2017, se incluyó en el PRODEI un tipo de apoyo en específico para impulsar el ejercicio del derecho a la identidad de este sector de la población.

En el marco de este tipo de apoyo, la CDI en colaboración con la Dirección General del Registro Nacional de Población de la SEGOB y de los Registros Civiles de 15 entidades federativas, apoyó a 107,528 indígenas mediante el desarrollo de 13 campañas internas de registro civil en los Estados de Campeche, México, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero, Durango, Chiapas y Chihuahua, una campaña interestatal en Sinaloa y 6 proyectos de atención regional en Baja California, Hidalgo, Jalisco y Quintana Roo.

Al 31 de mayo de 2018, se habían autorizado campañas de registro civil en los Estados de México, San Luis Potosí, Morelos, Campeche, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas y proyectos de Atención Regional en Durango y Baja California, con los cuales se tiene previsto atender a 58,743 indígenas. En el marco de estas campañas se dará atención a la reposición y actualización de actas y al registro ordinario y extemporáneo y a la corrección de los registros de nacimiento, que se han detectado como los problemas más agudos que enfrentan los indígenas para ejercer su derecho a la identidad.

**Tipo de Apoyo Derecho a la Igualdad de Género.**

Se implementa el tipo de apoyo Derecho a la Igualdad de Género, con el objetivo de fortalecer las capacidades de la población indígena para el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, con la finalidad de contribuir a la disminución de las brechas de desigualdad de género mediante acciones intersectoriales, de coordinación y de interlocución con distintos actores.

Este tipo de apoyo opera a través de 4 modalidades, a saber:

M1 Casas de la Mujer Indígena

M2 Coordinación para la Prevención y atención de la violencia contra mujeres indígenas con enfoque intercultural.

M3 Fortalecimiento para el ejercicio de derechos de las mujeres indígenas.

M4 Otras acciones para el fortalecimiento de capacidades de la población indígena para el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Las Casas de la Mujer Indígena (CAMI)[[6]](#footnote-6) son espacios físicos en los que mujeres indígenas brindan atención a otras mujeres indígenas, desde una perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos, en derechos sexuales y reproductivos, al igual que en prevención y atención de la violencia de género.

Las principales actividades que se realizan en las Casas son las siguientes:

* Sensibilización y capacitación desde la perspectiva de género e interculturalidad, en los temas de prevención de la violencia contra las mujeres y derechos sexuales y reproductivos.
* Difusión de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
* Identificación, canalización y acompañamiento de casos en las instancias de procuración de justicia y salud del Estado.
* Generación y actualización de información, registro de casos e integración de diagnósticos sobre la situación de la violencia contra las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, a nivel micro-local.
* En algunas casas se realizan acciones de partería tradicional.

De 2013 a 2018 se autorizó la apertura de trece nuevas Casas de la Mujer Indígena, lo que representa el 41.94% del total de CAMI autorizadas, contando con 31 casas en los Estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Con las acciones realizadas a través de las CAMI en el periodo referido, se han beneficiado a 112,158 personas indígenas, de las cuales 88,920 son mujeres y 23,238 son hombres con un presupuesto total de $147,172,585.13 pesos.

En la modalidad “Coordinación para la Prevención y Atención de la Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas”, se apoyan propuestas de mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer a nivel estatal y municipal para la realización de diagnósticos sobre la situación de sus derechos sexuales y reproductivos y de la violencia que viven las mujeres indígenas; así como para realizar proyectos de continuidad con base en lo obtenido en los diagnósticos.

Estos diagnósticos sirven como insumo para focalizar, orientar, diseñar e implementar políticas públicas locales para la atención con pertinencia cultural y perspectiva de género en comunidades indígenas.

Del 1 de enero de 2013 a la fecha, se atendieron a 272,680 personas indígenas; 71,642 hombres y 201,038 mujeres, con un presupuesto total de $120,317,437.00 pesos, a través de 461 apoyos en temas relativos a: prevención del VIH y canalización de personas indígenas portadoras del virus; prevención de la violencia contra las mujeres indígenas; fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos; prevención del embarazo en adolescentes; erradicación del embarazo en niñas y adolescentes de 10 a 14 años; y nuevas masculinidades con enfoque intercultural.

A través de la modalidad “Fortalecimiento para el ejercicio de derechos de las mujeres y niñas indígenas”, se apoya a organizaciones de la sociedad civil y universidades públicas para el desarrollo de acciones específicas y de formación con el propósito de fortalecer las capacidades de la población indígena para el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas; y la sensibilización de la población indígena masculina en cuanto a los temas de género, al igual que al trabajar con autoridades tradicionales, lo que permite incidir en las relaciones desiguales que se gestan al interior de las comunidades.

Del año 2013 al 2018, se destinaron $116,434,229.94 para financiar 647 apoyos que beneficiaron a 133,659 personas indígenas: 46,152 hombres y 87,507 mujeres, en temas relativos a: sensibilización en equidad de género; derechos de las mujeres; atención y prevención de la violencia familiar y de género; salud sexual y reproductiva; violencia obstétrica hacia mujeres indígenas; prevención de embarazos en adolescentes; erradicación del embarazo en niñas y adolescentes de 10 a 14 años; prevención del VIH; partería tradicional; masculinidades con enfoque intercultural; y derechos de las mujeres indígenas con discapacidad.

En la modalidad Otras acciones para el fortalecimiento de capacidades de la población indígena para el ejercicio de los derechos de las mujeres, las acciones están dirigidas a fortalecer las capacidades de la población indígena para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la promoción de la igualdad.

Durante el periodo 2013-2018, se han otorgado 49 apoyos con un presupuesto autorizado de $31, 695,386.30, beneficiándose con ello a 3,721 personas indígenas, 3,088 mujeres y 633 hombres.

**Tipo de apoyo “Ejercicio de derechos culturales y comunicación”.**

En sus tres modalidades (Apoyo a proyectos culturales para el fortalecimiento, difusión y preservación del patrimonio cultural indígena; apoyo a promotores culturales indígenas para la salvaguardia de sus culturas comunitarias; y apoyo a proyectos de comunicación intercultural para la promoción y difusión del patrimonio cultural indígena), ha beneficiado a 37,451 indígenas, esto es 20,833 hombres y 16,618 mujeres, con un presupuesto ejercido de $192,195,712.85 pesos, que permite que las comunidades y población indígena ejerza sus derechos y fortalezca sus capacidades mediante el desarrollo y ejecución de un proyecto cultural, de comunicación intercultural o como promotor cultural, y al mismo tiempo conserve sus usos, tradiciones, costumbres, valores y la práctica de su lengua.

Con el primer tipo de apoyo, se apoyaron 2,452 proyectos culturales para el fortalecimiento, difusión y preservación del patrimonio cultural indígena, con lo que se beneficiaron a 36,760 indígenas (20,452 hombres y 16,308 mujeres) de 62 pueblos originarios, en donde la comunidad está al pendiente del buen desarrollo del proyecto. La cobertura geográfica de los apoyos aborda 2,063 comunidades en 644 municipios de 28 Estados de la República Mexicana.

En relación al segundo tipo, se brindaron 300 apoyos a proyectos de comunicación intercultural para la promoción y difusión del patrimonio cultural indígena, con lo que se benefició al mismo número de personas de 30 pueblos originarios; la comunidad participa en el desarrollo del proyecto con historias, relatos y cuentos, describen la forma de elaborar su gastronomía, expresa sus creencias, saberes, valores y conocimiento ancestral. La cobertura geográfica alcanza 225 comunidades en 155 municipios de 23 Estados de la República Mexicana.

Finalmente, se otorgaron 391 apoyos para promotores culturales indígenas para la salvaguardia de sus culturas comunitarias, de 65 pueblos originarios, quienes se capacitaron al participar en un diplomado, ahora son un grupo de personas ya formadas, con experiencia en la gestión intercultural, que mantienen una vinculación activa con su región de origen, lo que propicia que los miembros de las comunidades se involucren en actividades de la CDI, lo cual representa una condición que favorece la salvaguardia del patrimonio cultural comunitario indígena. La cobertura geográfica alcanza 271 comunidades en 201 municipios de 27 entidades federativas.

**Apoyo para el acceso a la atención médica del tercer nivel.**

Esta acción se encuentra normada en los “Lineamientos para el Programa de Derechos Indígenas”, numeral 4.1.2, pero se opera a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

La finalidad del proyecto es proporcionar apoyos económicos, de gestión y asesoría para trámites, a los solicitantes indígenas que requieren atención médica de tercer nivel a efecto de que puedan tener acceso a estos servicios.

Se entiende por atención médica de tercer nivel, a todas las actividades encaminadas a restaurar la salud y habilitar a pacientes referidos por los anteriores niveles, que presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, a través de una o varias especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas, empleando tecnología médica compleja y altamente especializada. Siendo sus funciones principales la curación y la rehabilitación de pacientes.

Las enfermedades que atiende son cáncer, leucemia, hemofilia, insuficiencia renal crónica, del hígado, páncreas y riñón y enfermedades hematológicas. Los apoyos que otorga son para gestionar atención médica-hospitalaria, para gastos de consultas, estudios, hospitalización, cirugías, entre otros; para gastos de medicamentos, prótesis diversas e insumos diversos; hospedaje y alimentación en el albergue Mil colores de la Ciudad de México; apoyo económico para pasajes; apoyo psicológico, actividades recreativas y culturales en el albergue; apoyo para gastos funerarios y traslados (sólo se apoyará lo que no cubra su seguro popular). Los apoyos económicos dependerán de la suficiencia presupuestal del proyecto.

El proyecto atiende el problema de acceso a los servicios de atención médica especializada que presenta la población indígena, derivado de los altos niveles de pobreza, del aislamiento geográfico, de la escasa cobertura de la infraestructura hospitalaria de tercer nivel y de los sistemas de seguridad social.

En el periodo 2013 a marzo de 2018 el proyecto ha ejercido 88.0 millones de pesos proporcionando 17,611 apoyos económicos para beneficiar a 11,214 pacientes indígenas en el acceso y atención en las unidades médico-hospitalarias de atención especializada del sector salud.

El proyecto ha contribuido a disminuir el rezago que tiene la población indígena en el acceso y la atención médica-hospitalaria de tercer nivel con el apoyo al 54.8% de la población potencial del proyecto en el periodo que se informa. Asimismo, se han realizado las siguientes acciones relevantes:

**Período de enero a diciembre de 2013.**

* Apoyo integral para una cirugía de alto riesgo – cambio valvular- en el Instituto Nacional de Cardiología a una paciente de 38 años del Albergue Mil Colores, resultando exitosa.
* Apoyo integral para una cirugía de alto riesgo a paciente menor del Albergue –extracción de un pulmón cancerígeno- en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, resultando exitosa.
* Apoyo económico y de trámite para la realización de dos cirugías: cambio valvular y colocación de válvula, ambas de alto riesgo, resultando exitosas las dos, en el Instituto Nacional de Cardiología.
* Gestión de recursos ante otras instancias a nivel nacional por 3.3 millones de pesos para apoyar a pacientes indígenas.

**Período de enero a diciembre de 2014.**

* Gestión para la realización de una cirugía para la colocación de válvula ocular, sin costo para el paciente; colocación de marcapaso para otro paciente sin costo; gestión y trámite para la realización del protocolo de un trasplante de riñón, y gestión ante los laboratorios PROBIOMED para la donación de factor VIII para pacientes del Albergue Mil Colores (medicamento para hemofilia).
* Gestión y trámite de un descuento del 50% en el trasplante de córnea en la asociación para evitar la ceguera para un paciente del Albergue Mil Colores.
* Gestión y trámite en otras instancias de aportaciones para pacientes indígenas por 5.8 millones de pesos, a nivel nacional.

**Período de enero a diciembre de 2014.**

* Gestión ante la Asociación AMPAHS medicamento para 10 pacientes del Albergue Mil Colores con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica (200 cajas) con un costo total de $280,000 pesos.
* Gestión y trámite en otras instancias de aportaciones para pacientes indígenas por 1.6 millones de pesos, a nivel nacional.
* Gestión, atención médica y obtención de 2 sillas de ruedas ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Delegación Benito Juárez, una para un paciente mixteco de 23 años atendido en el Hospital General de Xoco debido a un accidente automovilístico y la otra para un paciente del Albergue Mil Colores.
* Gestión ante la Fundación “Aquí nadie se rinde” para la donación de una prótesis de pierna completa, con un costo de $45,000 pesos, para una paciente femenina de 14 años del Albergue Mil Colores.

**Período de enero a diciembre de 2016.**

* Se gestionó ante el Hospital Infantil de México, la aportación de $250 pesos para la adquisición de un medicamento especial para paciente con Síndrome de Moebius.
* Se gestionó ante el Hospital Asociación para Evitar la Ceguera en México, la aportación de $25,000 pesos para la realización de una cirugía especial de glaucoma.
* Se gestionó ante el Hospital General de México, la aportación de $100,845 pesos para medicamento, estudios, cirugías, para pacientes con tumores e insuficiencia renal crónica, del Albergue Mil Colores.
* Gestión y trámite en otras instancias de aportaciones para pacientes indígenas por un millón de pesos, a nivel nacional.

**Período de enero a diciembre de 2017.**

* Gestión ante el Gobierno del Estado de Hidalgo, para el pago de una cirugía de una menor, en el Instituto Nacional de Cancerología, por un monto de $162,000 pesos.
* Se participó en la Novena Campaña de Cirugías de la Fundación “Austin Smiles” para la corrección de labio leporino y paladar hendido, polidactilia, sindáctila y secuelas de quemaduras. A través de la Delegación Estatal de la CDI en Veracruz, se canalizó a 22 pacientes para que fueran intervenidos quirúrgicamente.
* Se realizó la gestión ante el Patrimonio para la Beneficencia Pública y el DIF de Durango, por la cantidad de $20,000 pesos para el pago de una cirugía que se realizó a un joven indígena de 17 años de edad, por colapso de disco intervertebral con un costo total de $41,000 pesos.
* Se gestionó la atención médica sin costo a 5 pacientes del Albergue Mil Colores en el Hospital General de México durante un año y se gestionó la consulta sin costo a un paciente del mismo albergue, en la Asociación para Evitar la Ceguera en México para su cirugía de cataratas y vitrectonia.

**Período de enero a diciembre de 2018.**

* Se han proporcionado 103 apoyos económicos para beneficiar a 102 pacientes indígenas de 78 Municipios y 96 localidades.
* El albergue la Casa de los Mil Colores reporta 6,610 acciones de enfermería: curaciones, asesorías para tratamientos, entre otras; 5,858 acciones de trabajo social: seguimiento médico hospitalario, entre otras; 4,244 acciones de psicología: terapias grupales y/o individuales y 1,870 donativos recibidos para los pacientes como son: medicamentos, ropa, juguetes, entre otros.

**Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI)**

El PAEI opera con las siguientes modalidades de atención:

1. Casa del Niño Indígena. Brinda alimentación, hospedaje y actividades complementarias a la población beneficiaria, atendiendo preferentemente aquella que proviene de localidades que no cuentan con servicios de educación.
2. Comedor del Niño Indígena. Brinda alimentación y actividades complementarias a la población beneficiaria que vive en la localidad donde se ubica el centro educativo al que asisten.
3. Casa o Comedor Comunitario del Niño Indígena. El Programa otorga apoyo a través de instancias estatales, municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que operan espacios comunitarios para brindar servicio de alimentación y material de higiene a estudiantes indígenas.

A partir del ejercicio fiscal 2015 se puso en marcha la estandarización de menús en las casas y comedores del niño indígena, esto como una estrategia revisada y valorada por nutriólogos a partir del consumo adecuado de kilocalorías, proteínas, cereales, frutas y verduras adecuados para los beneficiarios, acorde a su edad y su condición de nutrición.

Esta estrategia permite tener los siguientes controles:

• Alimentación saludable, suficiente y balanceada para los beneficiarios.

• Compras consolidadas de los alimentos frescos y perecederos.

• Consistencia de revisión de los menús en la supervisión.

A fin de brindar mejores servicios de hospedaje y alimentación, se hace necesario establecer los mecanismos normativos que orienten y den un orden a las actividades, funciones, responsabilidades y derechos de las y los beneficiarios, así como de las personas responsables del cuidado de los mismos, por lo que a partir del ejercicio fiscal 2015 se puso en marcha la Guía Operativa de las Casas y Comedores del Niño Indígena que tiene como propósitos: definir perfiles de los jefes y ecónomas, estandarizar procesos y establecer normas de convivencia y controles. Dicha Guía se muestra en las Reglas de Operación Vigentes del Programa de Apoyo a la Educación Indígena (**ANEXO 6**).

1. Becas de Educación Superior y Apoyo a la Titulación. Para estudiantes indígenas que cursen estudios de nivel superior.

A partir de la actual administración, se realizó una serie de análisis sobre el comportamiento de los Programas, esto ante la naturaleza de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCh). Se replantearon escenarios y se reafirmaron los Programas de la CDI al PND, así como al Programa Especial de los Pueblos Indígenas. A partir de esto, se realizan las siguientes mejoras:

|  |  |
| --- | --- |
| **HASTA 2013** | **A PARTIR DE 2014** |
| Programa de Albergues Escolares Indígenas | Programa de Apoyo a la Educación Indígena |
| Albergues y Comedores Escolares Indígenas | Casas y Comedores del Niño Indígena |
| Albergues Comunitarios | Casas y Comedores Comunitarios del Niño Indígena |
|  | Se incorpora la Modalidad de Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación |

**BENEFICIARIOS DEL PERIODO 2013 A 2018 (Cifras al primer trimestre de 2018).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Casas del Niño Indígena** | **Comedores del Niño Indígena** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ejercicio fiscal** | **Casas** | **Hombres** | **Mujeres** | **total** | | **2013** | 942 | 29,119 | 25,322 | 54,441 | | **2014** | 934 | 28,878 | 25,699 | 54,577 | | **2015** | 924 | 28,515 | 25,275 | 53,790 | | **2016** | 921 | 28,084 | 25,410 | 53,494 | | **2017** | 914 | 27,945 | 25,515 | 53,460 | | **2018\*** | 915 | 27,888 | 25,586 | 53,474 | | \*Cifras al 1er. trimestre 2018 | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ejercicio Fiscal** | **Comedores** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** | | 2013 | 109 | 2,463 | 2,413 | 4,876 | | 2014 | 130 | 3,040 | 2,927 | 5,967 | | 2015 | 140 | 3,272 | 3,165 | 6,437 | | 2016 | 143 | 3,454 | 3,289 | 6,743 | | 2017 | 147 | 3,640 | 3,386 | 7,026 | | 2018\* | 147 | 3,632 | 3,382 | 7,014 | | \*Cifras al 1er. trimestre 2018 | | | | | |  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Casas Comunitarias del Niño Indígena** | **Comedores Comunitarios del Niño Indígena** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ejercicio fiscal** | **Casas** | **Hombres** | **Mujeres** | **total** | | **2013** | 230 | 6,819 | 6,184 | 13,003 | | **2014** | 200 | 6,142 | 5,567 | 11,709 | | **2015** | 202 | 6,110 | 5,655 | 11,765 | | **2016** | 203 | 6,254 | 5,772 | 12,026 | | **2017** | 204 | 6,246 | 5,967 | 12,213 | | **2018\*** | 204 | 6,213 | 5,997 | 12,210 | | Para el ejercicio 2013, no se contaba con un sistema que permitiera delimitar el número de casas y comedores comunitarios por separado, la cifra representa el total de ambas funcionalidades  \*cifras al 1er trimestre de 2018. | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ejercicio Fiscal** | **Comedores** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** | | 2013 |  |  |  |  | | 2014 | 47 | 1,544 | 1,285 | 2,829 | | 2015 | 48 | 1,496 | 1,308 | 2,804 | | 2016 | 51 | 1,608 | 1,519 | 3,127 | | 2017 | 61 | 1,976 | 1,873 | 3,849 | | 2018\* | 61 | 1,983 | 1,873 | 3,856 | | \*Cifras al 1er. trimestre 2018 | | | | | | Para el ejercicio 2013, no se contaba con un sistema que permitiera delimitar el número de casas y comedores comunitarios por separado, la cifra representa el total de ambas funcionalidades | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Becas de Educación Superior** | **Apoyos a Titulación** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ejercicio fiscal** | **Becas Autorizadas** | **Hombres** | **Mujeres** | **total** | | **2013** | 1,001 | 550 | 678 | 1,228 | | **2014** | 1,725 | 983 | 1,043 | 2.026 | | **2015** | 1,725 | 1,019 | 1,116 | 2,135 | | **2016** | 2,040 | 1,213 | 1,367 | 2,580 | | **2017** | 4,000 | 2,122 | 2,667 | 4,789 | | **2018\*** | 4,000 | 1,681 | 2,274 | 3,955 | | **Total** | 14,491 | 7,568 | 9,145 | 16,713 | | \*Cifras al 1er. trimestre 2018 | | | | |   Nota. Durante 2013, el proyecto de becas de educación superior y apoyo a la titulación fue operado por la extinta Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de los Indígenas. Las becas son constantes, en tanto que los beneficiarios son variables, esto obedece a que con una beca, se puede beneficiar a 1 o más estudiantes durante el mismo ejercicio fiscal. | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ejercicio Fiscal** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** | | 2013 | 12 | 25 | 37 | | 2014 | 23 | 26 | 49 | | 2015 | 16 | 16 | 32 | | 2016 | 27 | 26 | 53 | | 2017 | 54 | 72 | 126 | | 2018\* | 22 | 37 | 59 | | Totales | 154 | 202 | 359 |   \*Corte a mayo de 2018  Nota. Durante 2013, el proyecto de becas de educación superior y apoyo a la titulación fue operado por la extinta Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de los Indígenas. |

**Artículo 2, 3 y 7**

**México 2018**

**Observación 2013**

*Seguimiento de las recomendaciones del Comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT).*

*Artículos 2, 3 y 7. Derechos sexuales y reproductivos. En el informe del comité tripartito adoptado por el Consejo de Administración en marzo de 2004 (documento GB.289/17/3), se solicitó al Gobierno que tomara medidas para garantizar que la decisión de adoptar métodos contraceptivos definitivos sea libre, y para asegurarse de que las personas afectadas estén plenamente conscientes del carácter definitivo de dichos métodos de contracepción. En la memoria recibida en septiembre de 2013, el Gobierno informa que el mecanismo implementado por el programa Oportunidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido el consentimiento informado y compartido. Los criterios de operación, políticas y estrategias para la prestación de los servicios se rigen principalmente por la Norma Oficial Mexicana de los servicios de planificación familiar y por el lineamiento técnico para el uso de los métodos contraceptivos del IMSS. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno sobre el impacto que han tenido las medidas adoptadas y los programas ejecutados en materia de salud reproductiva. La Comisión toma nota en particular del impacto del programa en el ámbito de salud materna, específicamente en la disminución de la tasa de mortalidad materna, pasando de 65,9 a 37,3 por mil nacidos vivos, de 2007 a 2012. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno reafirma que hay conocimiento o registro de demandas o quejas por esterilizaciones forzosas registradas en el ámbito de responsabilidad del Programa IMSS Oportunidades. La Comisión también toma nota con* **interés** *del programa Acciones de Equidad de Género con Población Indígena (PAIGPI) entre cuyos objetivos figura el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. En 2012, el PAIGPI consolidó sus iniciativas para la Casa de la Mujer Indígena y desarrolló proyectos de organizaciones de mujeres indígenas para la atención de la violencia y de la salud sexual y reproductiva. Se estima que el PAIGPI atendió a 17 350 mujeres y a 2 368 hombres.* **La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionado informaciones sobre la manera en que el consentimiento informado sobre los derechos sexuales y reproductivos ha sido incluido en los programas destinados a las comunidades indígenas.**

El Gobierno de México toma nota de la observación formulada por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en donde se invita al Gobierno de México a continuar proporcionando informaciones sobre la manera en que el consentimiento informado sobre los derechos sexuales y reproductivos ha sido incluido en los programas destinados a las comunidades indígenas, y se permite hacer las siguientes observaciones:

En México, toda persona tiene derecho a la salud y a la salud reproductiva. No sólo al acceso, sino a una atención de calidad. Dentro de los servicios de salud reproductiva se encuentran los de anticoncepción. Para el otorgamiento de un método anticonceptivo se deben de llevar a cabo varios procesos, entre los cuales destacan:

1.- El proceso de educación en anticoncepción que el personal de salud brinda a los solicitantes o beneficiados de dichos métodos.

2.- El proceso de consentimiento informado, que se ve reflejado y sustentado en el documento llamado Carta de Consentimiento informado.

Ambos procesos son indispensables hablando de anticoncepción. La atención a la salud en general, y a la salud reproductiva en particular se da en un marco de no discriminación por sexo, raza, color de piel, edad, género, religión, nivel socio económico, nacionalidad, idioma, etnia.

El Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018 reconoce la necesidad de impulsar acciones para hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos de la población con enfoque intercultural. Una de sus principales metas es reducir la demanda no satisfecha de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no planeados, con énfasis en el grupo de adolescentes, en población indígena y en áreas rurales. Asimismo, se promueve la prestación de servicios de planificación familiar y anticoncepción con enfoque intercultural.

En particular, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, plasman en el documento Guía para la Implementación del Modelo de Atención a las Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio, con Enfoque Humanizado, Intercultural y Seguro, las directrices determinadas para atención incluyente de las culturas indígenas en México. Involucra a los procesos mencionados en educación para la anticoncepción y consentimiento informado.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) ha desarrollado diversas estrategias comunitarias que permiten facilitar el acceso a los servicios de salud y fomentar un encuentro respetuoso y de mejor calidad entre el prestador de servicios y las (los) usuarias (os) indígenas.

**Enlaces Interculturales.** Los enlaces interculturales son personas que hablan la lengua indígena predominante en la región y que han sido capacitadas en temas de atención materna y neonatal con el objetivo de garantizar un encuentro respetuoso entre las diversas culturas de las usuarias hablantes de lengua indígena y el personal de salud para mejorar la calidad de la atención obstétrica, fortaleciendo entre la población indígena la credibilidad y confianza en los servicios de salud.

Su función es interpretar la información oral de la lengua materna de la mujer indígena al español y viceversa; brindan acompañamiento a la usuaria en el proceso de atención médica asegurando la plena comprensión de las recomendaciones dadas por el personal de salud; además, facilita los trámites administrativos que sean necesarios. En caso de hospitalización, auxilia al personal médico para informar a los familiares del estado de salud de la mujer embarazada y/o puérpera y del recién nacido.

Por las características de sus funciones que demandan un conocimiento pleno de la cultura de la población, se pide que los enlaces interculturales sean originarios de la región y, preferentemente, que residan en la misma, lo que facilita que coadyuven con el personal de salud para la identificación de casos con complicaciones o que requieren atención médica inmediata. El CNEGSR apoya a este personal para que sea certificado por el INALI.

Esta estrategia está operando desde 2013 en 11 entidades federativas: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Se ubican en unidades hospitalarias de atención obstétrica. Se cuenta con 123 Enlaces Interculturales ubicados en 58 hospitales del país. Las lenguas cubiertas son: Amuzgo, Cora, Náhuatl, Maya, Mixe, Mixteco, Popoluca, Rarámuri, Tepehuano, Tlapaneco, Tojolabal, Tzotsil, Tzeltal, Wiharika (Huichol) y Zapoteco. En 2017 apoyaron a 81,631 personas indígenas.

**Posadas para la Atención de las mujeres embarazadas (Posadas AME).** Esta estrategia se creó para incrementar el acceso a la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio por personal calificado en unidades de salud y para asegurar la atención oportuna en caso de complicaciones obstétricas, especialmente para mujeres que:

* Residen en localidades dispersas o que se ubican a más de dos horas de un servicio de salud;
* Requieren atención especializada durante el embarazo, el parto o el puerperio o para sus hijas(os);
* Son madres de recién nacidos complicados.

Se ubican cerca de un hospital con atención obstétrica, a no más de 10 minutos de distancia. Los servicios que se otorgan en las Posadas AME incluyen:

* Hospedaje, alimentación, baño para aseo personal y equipo para lavado de ropa,
* Supervisión por personal médico o de enfermería,
* Cuidado de los hijos (en caso necesario),
* Vigilancia de la evolución del parto por personal especializado,
* Acompañamiento inmediato al hospital en caso de complicación o urgencia.

En 2017 se brindó alojamiento en 115 Posadas AME a 38,059 mujeres que viven en zonas lejanas a los hospitales o de difícil acceso, de las cuales 9,166 residían en comunidades indígenas.

**Madrinas y Padrinos comunitarios.** Son personas, mujeres en su gran mayoría, que provienen de la comunidad y que de manera voluntaria participan en esta estrategia, reciben orientación por el personal médico para brindar acompañamiento a la embarazada y dar seguimiento al cuidado de la salud de una mujer (su ahijada) durante la gestación y hasta la finalización del puerperio. La estrategia fue creada para:

* + Generar una mayor demanda de atención oportuna de las emergencias obstétricas a través de la elaboración de planes de seguridad.
  + Lograr una mayor asistencia de las mujeres de municipios con alto grado de marginalidad a los servicios de salud, durante el control prenatal, la atención del parto y la vigilancia del puerperio.

Para ser Madrina o Padrino se requiere que la persona cuente con:

* + Reconocimiento del Personal de Salud,
  + Liderazgo o reconocimiento en la comunidad,
  + Capacitación para desempeñar su función,
  + Materiales informativos/educativos.

La capacitación incluye el conocimiento de signos y señales de alarma durante el embarazo, puerperio y de la persona recién nacida, la elaboración del Plan de Seguridad, la formación de Redes de Servicios de Salud y de Apoyo social, el funcionamiento de la Línea 01800 MATERNA, y la anticoncepción post evento obstétrico.

A través de asambleas comunitarias en las que estén presentes autoridades locales, el comité de salud, personal de salud, embarazadas y puérperas, las embarazadas o puérperas eligen a su Madrina o Padrino. El Padrino o Madrina realizan visitas domiciliarias periódicas a su ahijada para brindarle acompañamiento a la unidad médica para su control prenatal, identifica señales de alarma, elabora el Plan de Seguridad con su ahijada y familiares y apoya, de ser el caso, el traslado a la unidad de salud correspondiente ante una urgencia obstétrica. Asimismo, dan aviso al personal de la Unidad Médica cuando identifican una nueva embarazada.

Las Madrinas y Padrinos participan en las reuniones comunitarias convocadas por el Comité de Salud y personal de salud.

La estrategia permite el incremento en las consultas de primera vez, incremento en las consultas dentro del primer trimestre del embarazo y durante el puerperio, y el aumento en las atenciones oportunas por referencia al segundo nivel de atención.

Al cierre de 2017 se contaba con un total de 40,262 Madrinas y Padrinos comunitarios en 538 municipios de 14 entidades federativas; que apoyaron a 45,831 mujeres embarazadas, y gestionaron 528 traslados.

**Parteras tradicionales.** Son personas que pertenecen a comunidades indígenas y rurales que practican el modelo tradicional de atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Adquirieron sus conocimientos por aprendizaje con otra partera, por sí mismas y en la práctica continua. Se les considera como personal no profesional, autorizado para la prestación de los servicios de atención médica. Su presencia se favorece por:

* El tipo de relaciones que las parteras establecen con las personas que atienden, resalta el profundo e intenso vínculo afectivo.
* El manejo común de códigos culturales basados en el uso de la misma lengua, tradiciones, mitos y costumbres.
* Conocen la historia de la localidad y sus familias, quienes confían en ellas.
* Dan explicaciones aceptables a sus vivencias en materia de salud y en otros aspectos de la vida familiar y social.
* Con frecuencia son el enlace entre la comunidad y los servicios de salud.

Desde los años 70 del siglo pasado se ha fortalecido el vínculo de los servicios de salud con las parteras tradicionales[[7]](#footnote-7) que se ha establecido a través de una *relación de coordinación e interrelación* que se lleva a cabo a través de *acciones voluntarias* como son:

* Su participación en las redes de apoyo social y médica,
* La identificación, referencia de la embarazada a la unidad de salud,
* La atención y orientación en el embarazo, parto, puerperio y persona recién nacida,
* Su capacitación periódica para mejorar sus conocimientos, habilidades y destrezas con pleno respeto a su saber y a sus identidades culturales de sus comunidades.

Para la capacitación de las parteras se utiliza la metodología participativa, que sitúa a la partera como sujeta activa y no receptora pasiva, en una relación de igualdad entre el personal de salud y las parteras, lo que permite desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión, al mismo tiempo que permite conocer y respetar la cultura de los grupos con quienes se trabaja.

Las reuniones que establece el personal de salud con el grupo de parteras se efectúan en las distintas entidades federativas periódicamente y permiten vincular el trabajo de las parteras con las unidades de salud. Se programan de acuerdo a las necesidades detectadas y permiten tomar acuerdos conjuntos.

En 2017, se contaba con un registro de 14,798 parteras tradicionales capacitadas, de las cuales el 96% son mujeres y el 4% son hombres. De ellos, 6,687 (45%) son hablantes de lengua indígena.

En cumplimiento a la atribución del CNEGSR, le corresponde impulsar políticas públicas para prevenir y atender las diversas formas de violencia contra las mujeres; así como difundir sus derechos humanos y en particular el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia en los diversos espacios sociales en que se desarrollan. Desde el año 2014 se ha implementado de manera progresiva la ***“Estrategia de capacitación para la promoción del buen trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio en salas de obstetricia de los Servicios de Salud”.***

Durante el período 2014-2016 se realizaron seis talleres regionales a nivel nacional y cinco estatales para la formación de facilitadoras (es), quienes actualmente replican a nivel estatal esta estrategia. De la misma manera, se han realizado un total de 809 talleres de réplica dirigidos a personal de salud, con 14, 697 participantes, conformado por 11,117 mujeres y 3,580 hombres.

Para fortalecer la sensibilización, tanto del personal directivo y de toma de decisiones, así como de quienes atienden directamente a la población usuaria durante los eventos obstétricos (de las especialidades de ginecobstetricia, anestesiología y enfermería), los talleres incluyen aspectos técnicos y vivenciales.

Entre los ejes temáticos se encuentran:

* Sensibilización para la prevención de la violencia obstétrica desde el buen trato.
* Protocolos de atención obstétrica.
* Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres usuarias de los servicios de ginecoobstetricia y derechos laborales del personal que otorga la atención.
* Sistema patriarcal, maltrato y perspectiva de género.
* Generación de propuestas del grupo para mejorar la atención obstétrica.

Los elementos de la Estrategia se enmarcan en la importancia del reconocimiento de las mujeres usuarias de los servicios de salud como personas sujetas de derechos y al personal de salud, como garante de su cumplimiento.

En el caso específico del Estado de Chiapas, los Servicios Estatales de Salud adecuaron este Taller, en el que incorporaron el enfoque intercultural con temas como parto humanizado y respeto a la diversidad cultural, en el que se ha capacitado al personal de salud del 100% de las unidades de salud del segundo nivel de atención, al que se debe dar continuidad durante 2018 con una meta de 5 talleres.

La Secretaría de Salud, en atención a los señalamientos realizados por la Organización Mundial de la Salud, incorporó en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 “Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”, las mejores prácticas médicas y de los servicios de salud para incrementar la calidad de la atención de la mujer durante su proceso gestacional y en el periodo postparto.

En este mismo sentido, se manifiesta el derecho universal a la salud sexual y reproductiva, la opción libre e informada, el respeto a la integridad física y el derecho a no sufrir discriminación ni coerción en todos los asuntos relacionados con la vida sexual y reproductiva de las personas, y a su vez recibir un trato digno y respetuoso bajo los derechos humanos y la perspectiva de género, llevando un embarazo más seguro y protegido. Se incorpora un nuevo enfoque de control prenatal, el cual debe ser realizado por personal calificado, **con pertinencia cultural**, considerando las diversas cosmovisiones en salud, especialmente de los pueblos indígenas, siempre con dirección a la promoción de estilos de vida saludables, a la prevención, detección y control de factores de riesgo obstétrico como anemia, preclamsia, complicaciones hemorrágicas del embarazo e infecciosas, entre otras.

La actualización de la norma también uniforma la aplicación de procedimientos previa valoración de los factores de riesgo, con la finalidad de realizar acciones eminentemente preventivas en el control prenatal, durante el trabajo de parto, parto y puerperio, fomentando la eliminación o racionalización de algunas prácticas generalizadas que llevadas a cabo en forma rutinaria y sin indicaciones generan riesgos innecesarios. Por lo tanto, las acciones incluidas en esta norma tienden a favorecer el desarrollo fisiológico de cada una de las etapas del embarazo y a prevenir la aparición de complicaciones.

En el marco del acuerdo de colaboración con la CDI para la difusión de diversas temáticas de interés para dicho sector de la población, a través del programa “Ecos Indígenas, La voz de la diversidad”, de enero 2013 a diciembre de 2017 se coordinaron y realizaron 195 entrevistas otorgadas por médicos especialistas, cuyos temas tratados fueron: Prevención del embarazo en adolescentes, métodos de planificación familiar, beneficios del ácido fólico, enfermedades de transmisión sexual y embarazo saludable.

Cada tema consta de tres o cuatro entrevistas, una por semana, y se transmiten a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, conformado por un total de 21 radiodifusoras en 16 estados del país, las cuales cubren 965 municipios con una población hablante de lengua indígena de 5,484,538 personas y una población total de 22,807,272 personas, durante el periodo reportado.

De manera adicional a las entrevistas, durante 2016, se grabó una serie de cápsulas informativas con el tema de “Prevención del embarazo en adolescentes”, las cuales se transmiten a lo largo del día, durante la programación de las 21 radiodifusoras culturales indigenistas de la CDI.

Asimismo, el Plan de Comunicación Indígena, se encuentra enfocado a mejorar las actitudes y aptitudes de los beneficiarios de PROSPERA en torno al autocuidado de la salud bajo un esquema de sensibilidad intercultural, equidad y respeto a sus usos y costumbres, mediante la generación, distribución y apoyo de diversos materiales educativos con temas de salud.

Esta estrategia opera en las unidades médicas ubicadas en zonas indígenas de 19 entidades federativas: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Actualmente se trabaja con 23 lenguas indígenas, contando con la participación comunitaria y mediante material audiovisual impreso (de comunicación educativa) y audiovisual (cápsulas de radio y videos) en su lengua materna.

Durante 2013, se produjeron carteles, tarjetas, audios y videos en los temas de embarazo (en las lenguas yaqui, mayo, mixteco bajo y triqui), planificación familiar (rarámuri), embarazo parto y puerperio (wixárika) y métodos anticonceptivos, planificación, y signos de alarma durante el embarazo (en lengua otomí). Además, fueron traducidas al náhuatl y maya historietas en el tema de salud sexual y reproductiva.

En 2014, los carteles, tarjetas, audios y videos se produjeron sobre los temas: adolescencia y sexualidad (en lengua triqui), alimentación, embarazo y planificación familiar (lenguas rarámuri, otomí, náhuatl y amuzgo) y enfermedades de transmisión sexual (náhuatl y amuzgo).

Durante el período enero-diciembre de 2015 en el Estado de Chihuahua, se produjeron carteles, audios y videos en lengua rarámuri en los temas de Embarazo de alto riesgo y nutrición en el embarazo, Suplementos para embarazadas y lactantes, Salud de la mujer; y Cuidados en el embarazo. Para el Estado de San Luis Potosí, se elaboraron en una tercera etapa del Plan de Comunicación Indígena, materiales (videos y carteles) en lengua Pame en los siguientes temas: Embarazo, Planificación Familiar y Enfermedades de Transmisión Sexual.

Durante 2016, se elaboró material audiovisual tipo radionovela en los temas de Adolescencia y Sexualidad y Adicciones, en las lenguas indígenas más habladas: Náhuatl y Maya. En el estado de Oaxaca, se produjeron 4 carteles, 4 calendarios de pared y 4 calendarios de mesa, 8 cápsulas de audio y 8 cápsulas de video en lengua mazateco, dentro de los cuales se incluyó el tema “Embarazo en adolescentes”.

En 2017, se distribuyó material audiovisual en formato tipo radionovela, en el tema Adolescencia y Sexualidad y Adicciones, en las lenguas indígenas más habladas: Náhuatl y Maya.

Por otra parte, la CDI, a través del PRODEI, promueve la igualdad de género en la población indígena a través del fortalecimiento de capacidades para el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, y con ello contribuir a la disminución de las brechas de desigualdad.

En las 31 CAMI[[8]](#footnote-8) operadas por la CDI, actualmente 9 realizan actividades de partería, entre las que se encuentran visitas de control a embarazadas, actividades de sensibilización y formación, pago de traslados de las mujeres embarazadas; y recursos para acompañar y canalizar a las mujeres embarazadas a los centros de atención cuando así se requiera.

Adicionalmente, y tras la publicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 2014, la CDI se propuso iniciar un proceso de capacitación, que comenzó en el ejercicio fiscal 2015, dirigido a jefes y ecónomas de las casas y comedores del niño indígena. Para ello, se impartieron talleres con la participación de Instituciones Estatales y municipales tales como: Comisiones de Derechos Humanos, Sistemas DIF, Sector Salud, Protección Civil, Dirección de Educación Indígena; así como de la Fundación Coca Cola. Se planificaron y realizaron 40 talleres en 21 Delegaciones Estatales, capacitando a 834 jefes y 1,758 ecónomas.

Para el año 2016 el modelo de capacitación continuó a partir de la experiencia del ejercicio anterior, lo que llevó a enriquecer los contenidos temáticos y abordar temas actuales que permitan atender las necesidades de los beneficiarios; para ello, se realizaron 50 talleres a nivel nacional, capacitando a un total de 966 Jefes, 1,992 Ecónomas de las Casas y Comedores del Niño Indígena en 21 estados de la República. Los temas tratados en 2016, relacionados con derechos sexuales y reproductivos fueron los siguientes:

* **Prevención del Embarazo en Adolescentes**
  + Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA)
  + Prevención y atención de enfermedades.
  + Conocimiento y uso de anticonceptivos.
  + Servicios de Salud Estatal
  + Factores coadyuvantes (baja autoestima, violencia, falta de conocimiento, etc.)
  + Implicaciones del embarazo en los adolescentes
  + Decisiones libres, informadas y responsables para el ejercicio de su sexualidad y prevención del embarazo.
* **Derechos Humanos, Derechos de los Niños (Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes)**
  + Legislación Infantil Nacional.
  + Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes (LGDNNA).
  + Equidad e igualdad de género.

Para el ejercicio fiscal 2017 se programaron 50 talleres, sin embargo, como resultado de la planeación y el buen manejo de los recursos, se logró superar esta meta al llevarse a cabo 55 talleres, capacitando a 1,003 Jefes, 2,019 ecónomas y se incluyó a 215 Promotores digitales, culturales y formativos de las Casas y Comedores del Niño Indígena. Esto a través de un modelo homogéneo de contenidos temáticos y, contando con facilitadores expertos en su materia. Los temas tratados en 2017, relacionados con derechos sexuales y reproductivos fueron los siguientes:

* **“Planea tu vida”**
  + Salud y plan de vida.
* **Derechos Humanos**
  + Derechos de los niños, para garantizar su ejercicio pleno y bienestar (LGDNNA).

Para el ejercicio fiscal 2018, se contempla llevar a cabo un proceso de capacitación que permita atender de manera eficiente las necesidades que requiere el PAEI, para garantizar el interés superior de la niñez. Este proceso está enfocado en capacitar al personal institucional de la CDI que opera el Programa, generar un proceso de formación a promotores de los derechos humanos y supervisores para las modalidades de atención del programa, jefes, ecónomas, promotores culturales, formativos y digitales, padres de familia y beneficiarios de las casas y comedores del niño indígena y casas y comedores comunitarios del niño indígena.

Los contenidos temáticos se encuentran en construcción, considerando el abordaje de temas como: prevención y atención de la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, acciones de equidad e igualdad de género, prevención del embarazo adolescente, prevención del matrimonio infantil, prevención de la violencia sexual, derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros. Con este proceso de capacitación se busca sensibilizar a los responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes a fin de que se privilegie el interés superior de la niñez, generando con ello herramientas que permitan brindar la atención y sobre todo prevenir cualquier tipo de abuso o violencia en contra de los beneficiarios.

Finalmente, la difusión de las Radios Culturales Indigenistas de la CDI ha apoyado iniciativas del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y del Consejo Nacional de Población (CONAPO) sobre el tema, tanto en su difusión como en su propia traducción y producción en las lenguas que se cubren. El programa Red Mira por otro lado, ha abordado el tema de manera recurrente siempre con el objetivo de tener un espacio con información sobre el tema de manera permanente. Se anexan ejemplos de audios. **ANEXO 7**.

Adicionalmente, y a fin de compartir con la Comisión de Expertos mayor información sobre la manera en que el Gobierno de México impulsa acciones en favor de la población indígena sobre los derechos sexuales y reproductivos y la situación de la salud sexual y reproductiva en la República Mexicana, a continuación se citan los documentos que pueden ser consultados vía electrónica:

* Situación de la salud sexual y reproductiva. República Mexicana. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237216/Cuadernillo_SSR_RM.pdf>.
* Situación de la salud sexual y reproductiva. Entidades Federativas.

<https://www.gob.mx/conapo/documentos/sitacion-sexual-y-reproductiva-de-las-entidades-federativas>.

* Artículo Mujeres indígenas y su acceso a los derechos sexuales y reproductivos 2009 y 2014, en el Libro La Situación Demográfica de México 2016.

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232089/03_Hernandez-Meneses-Sanchez.pdf>.

**Artículo 3**

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Sírvase indicar toda medida especial que se haya tomado a fin de aplicar este artículo.

Las acciones del PRODEI de la CDI, tal como se comentó anteriormente, se abocan a apoyar a la población indígena en el ejercicio de sus derechos en materia cultural, de comunicación, de acceso a la justicia, a la identidad, equidad de género y salud.

Por ejemplo, las mujeres indígenas de las diferentes edades representan el sector de la población que acumula mayores rezagos sociales. Ellas han sido discriminadas y afectadas por la pobreza y por diversos referentes culturales, que, en ocasiones, fomentan la desigualdad y que se traducen en menores oportunidades para acceder a la educación, la salud y a los niveles mínimos de bienestar. Los factores que han provocado esta situación tienen naturalezas diferentes, algunos tienen que ver con el desconocimiento de la existencia de los derechos y de los alcances de los mismos o con la discriminación, y otros con la ausencia de procedimientos y recursos para asegurar su observancia.

Adicionalmente, en las reglas de operación de dos de los Programas que opera la CDI, (Programa de Apoyo a la Educación Indígena y Programa de Infraestructura), está estipulada la siguiente leyenda:

“Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de disponibilidad, accesibilidad y calidad en las acciones que realiza este Programa, se implementarán mecanismos que hagan efectivo el acceso a la información gubernamental y se asegurará que el acceso a los apoyos y servicios se dé únicamente con base en lo establecido en las presentes Reglas de Operación, sin discriminación o distinción alguna. De igual manera, se fomentará que las y los servidores públicos involucrados en la operación del Programa, promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos de la población beneficiaria, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, brindando en todo momento un trato digno y de respeto, con apego a los criterios de igualdad y no discriminación”.

Asimismo, el PAEI fomenta la vigencia efectiva y el respeto irrestricto de los derechos de las personas con discapacidad y miembros de pueblos y comunidades indígenas, contribuyendo a generar conocimiento y acciones que potencien su desarrollo integral e inclusión plena. Lo anterior en cumplimiento de la Ley General de Victimas y atendiendo a la Reglas de Operación vigentes.

Se favorece el acceso al Programa de las personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, que se encuentren en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación y mediante solicitud escrita, fundada y motivada que emane de autoridad competente.

El programa busca la equidad de género en el número de beneficiarios apoyados en las diferentes modalidades de atención del mismo. A continuación, se muestra el comportamiento de las distintas modalidades del Programa, en cuanto a población atendida por modalidad y distribución por género.

## Modalidad “Casas del Niño Indígena”

**Periodo 2013-2018**

**Beneficiarios de casas del Niño Indígena por ejercicio fiscal y por género.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJERCICIO FISCAL** | **CASAS** | **HOMBRES** | **MUJERES** | **TOTAL** |
| 2013 | 942 | 29,119 | 25,322 | **54,441** |
| 2014 | 934 | 28,878 | 25,699 | **54,577** |
| 2015 | 924 | 28,515 | 25,275 | **53,790** |
| 2016 | 921 | 28,084 | 25,410 | **53,494** |
| 2017 | 914 | 27,945 | 25,515 | **53,460** |
| 2018\* | 915 | 27,888 | 25,586 | **53,474** |
| Cifras corte 1er trimestre 2018\* | | | | |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

**Modalidad “Comedores del Niño Indígena”**

**Periodo 2013-2018**

**Beneficiarios de comedores del Niño Indígena por ejercicio fiscal y por género.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJERCICIO FISCAL** | **COMEDORES** | **HOMBRES** | **MUJERES** | **TOTAL** |
| 2013 | 109 | 2,463 | 2,413 | **4,876** |
| 2014 | 130 | 3,040 | 2,927 | **5,967** |
| 2015 | 140 | 3,272 | 3,165 | **6,437** |
| 2016 | 143 | 3,454 | 3,289 | **6,743** |
| 2017 | 147 | 3,640 | 3,386 | **7,026** |
| 2018\* | 147 | 3,632 | 3,382 | **7,014** |
| Cifras corte 1er trimestre 2018\* | | | | |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

Como se puede observar en los cuadros anteriores, en el ejercicio fiscal 2013 se contaba con 1,051 casas y comedores del niño indígena beneficiando a 59,317 estudiantes indígenas de niveles de educación básico, medio superior y superior, estas cifras se han ido incrementando con sus respectivas variaciones, sin embargo y de acuerdo a las cifras del cierre del primer trimestre de 2018, se observa que se atiende a través de 1,062 casas y comedores del niño indígena a un total de 60,488 estudiantes indígenas, esto representa un incremento con relación a 2013 del 1.98% de atención a beneficiarios.

Para efectos de contrastar las cifras de los cuadros anteriores con la Modalidad de Casas y Comedores Comunitarios del Niño Indígena, operadas por instancias estatales o municipales, así como por Organizaciones de la Sociedad Civil, se puede observar que en 2013 se atendieron a través de 230 casas y comedores comunitarios a un total de 13,003 beneficiarios, en tanto que para el cierre del primer trimestre de 2018, se atendió a través de 265 casas y comedores comunitarios a 16,066 beneficiarios, esto representa un incremento en la atención del 23.56%.

## Modalidad “Casas Comunitarias del Niño Indígena”

**Periodo 2013-2018**

**Beneficiarios por ejercicio fiscal y por género**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJERCICIO FISCAL** | **CASAS** | **HOMBRES** | **MUJERES** | **TOTAL** |
| 2013 | 230 | 6,819 | 6,184 | **13,003** |
| 2014 | 200 | 6,142 | 5,567 | **11,709** |
| 2015 | 202 | 6,110 | 5,655 | **11,765** |
| 2016 | 203 | 6,254 | 5,772 | **12,026** |
| 2017 | 204 | 6,246 | 5,967 | **12,213** |
| 2018\* | 204 | 6,213 | 5,997 | **12,210** |
| Notas.- Para el ejercicio 2013, no se contaba con un sistema que permitirá delimitar el número de casas y comedores comunitarios por separado, la cifra representa el total de ambas funcionalidades.  \*Cifras con corte al Primer trimestre 2018 | | | | |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

**Modalidad “Comedores Comunitarios del Niño Indígena”**

**Periodo 2013-2018**

**Beneficiarios por ejercicio fiscal y por género.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJERCICIO FISCAL** | **COMEDORES** | **HOMBRES** | **MUJERES** | **TOTAL** |
| 2013 |  |  |  |  |
| 2014 | 47 | 1,544 | 1,285 | **2,829** |
| 2015 | 48 | 1,496 | 1,308 | **2,804** |
| 2016 | 51 | 1,608 | 1,519 | **3,127** |
| 2017 | 61 | 1,976 | 1,873 | **3,849** |
| 2018\* | 61 | 1,983 | 1,873 | **3,856** |
| Notas.- Para el ejercicio 2013, no se contaba con un sistema que permitirá delimitar el número de casas y comedores comunitarios por separado, la cifra representa el total de ambas funcionalidades y se reporta en el cuadro de casas comunitarias del Niño Indígena.  \*Cifras con corte al Primer trimestre 2018 | | | | |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

En lo que se refiere a la modalidad de atención “Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación”, modalidad que entró en vigor en el PAEI en el ejercicio fiscal 2014, es notorio el avance e incremento de atención a la demanda de la población estudiantil indígena en edad universitaria, partiendo de que en 2013 se otorgaron 1,001 becas, logrando beneficiar a 1,228 estudiantes mujeres y hombres de distintas comunidades en 25 estados de la República Mexicana. El incremento en el número de becas ha sido del 299.6%, con este número de becas se ha logrado beneficiar a un total de 16,713 estudiantes indígenas a lo largo de 5 años, esto representa una acción de mejora y a la par una acción afirmativa de atención a la población indígena con enfoque de género, lo que ha permitido que un mayor número de mujeres accedan al beneficio de la beca para continuar con sus estudios de nivel superior.

**Modalidad “Becas de Educación Superior”**

**Periodo 2013-2018**

**Beneficiarios de una beca por ejercicio fiscal y por género.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJERCICIO FISCAL** | **BECAS AUTORIZADAS** | **HOMBRES** | **MUJERES** | **TOTAL** |
| 2013 | 1,001 | 550 | 678 | **1,228** |
| 2014 | 1,725 | 983 | 1,043 | **2,026** |
| 2015 | 1,725 | 1,019 | 1,116 | **2,135** |
| 2016 | 2,040 | 1,213 | 1,367 | **2,580** |
| 2017 | 4,000 | 2,122 | 2,667 | **4,789** |
| 2018\* | 4,000 | 1,681 | 2,274 | **3,955** |
| **TOTALES** | **14,491** | **7,568** | **9,145** | **16,713** |
| Notas.- Las becas son constantes, en tanto que los beneficiarios son variables esto obedece a que con una beca, se puede beneficiar a 1 o más estudiantes durante el mismo ejercicio fiscal.  Cifras con corte al primer trimestre 2018\* | | | | |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

**Modalidad “Apoyos a Titulación”**

**Periodo 2013-2018**

**Beneficiarios de apoyo a titulación por ejercicio fiscal y por género.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EJERCICIO FISCAL** | **HOMBRES** | **MUJERES** | **TOTAL** |
| 2013 | 12 | 25 | 37 |
| 2014 | 23 | 26 | 49 |
| 2015 | 16 | 16 | 32 |
| 2016 | 27 | 26 | 53 |
| 2017 | 54 | 72 | 126 |
| 2018\* | 22 | 37 | 59 |
| **TOTALES** | **154** | **202** | **356** |

Corte a mayo 2018\*

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

En el marco del Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN), se atiende de manera específica a la población indígena que habita en la cobertura establecida en la normatividad vigente, incluyendo de manera explícita a hombres y mujeres indígenas con discapacidad, tal como se establece en el numeral 3 de las Reglas de Operación del Programa, que a la letra dice:

*“El Programa atenderá a mujeres y hombres indígenas mayores de edad u hombres y mujeres indígenas emancipados, así como,* ***mujeres y hombres indígenas con discapacidad*** *que sean integrantes de un grupo de trabajo, sociedad o empresa de productores ...”*

Asimismo, se promueve la participación de la población joven en la modalidad *Proyectos de Consolidación,* de acuerdo al numeral 5.2.1 Proyectos Productivos, que establece que el apoyo se otorgará a: *Grupos, sociedades o empresas de al menos cinco personas indígenas que habiten en hogares diferentes y que cuenten con un proyecto productivo operando financieramente y que requieren de capital o capacitación para su sostenibilidad en el tiempo, que no hayan recibido más de tres apoyos* ***y donde participe población joven****.*

Cabe señalar que se privilegia el subsidio al tipo de apoyo denominado **Mujer Indígena**, el cual está destinado exclusivamente a mujeres indígenas organizadas en grupos de trabajo o sociedades legalmente constituidas, para el desarrollo de actividades productivas y turísticas sostenibles, que generen ingresos monetarios y/o no monetarios que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. Dada la importancia específica de promover la equidad de género en las comunidades indígenas, este tipo de apoyo privilegia el apoyo económico para grupos productivos integrados únicamente por mujeres, como una acción afirmativa que impulsa el desarrollo económico de las mujeres y sus familias.

Asimismo, a través del Sistema de Radiodifusoras Indigenistas, que surgieron con el objetivo de fortalecer la cultura, la identidad y las lenguas indígenas, se difunden los derechos de los pueblos indígenas, temática que forma parte integral de las barras de programación de las Radiodifusoras. Los días martes se trasmitió el programa Derechos Indígenas que forma parte de la Serie Ruta Informativa, cuyos contenidos son diversos y se vinculan con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Como parte de las medidas para informar sobre los derechos de las mujeres y los tipos de violencia, la CDI junto con la Red Mira y la organización Mujeres en Frecuencia difundieron a través de programas de radio semanales información sobre derechos de la mujer, prevención contra discriminación y acciones a emprender en caso de violación de los mismos. En 2017 se transmitió el programa de radio Doña Justa, producido por Mujeres en Frecuencia, en el que también se abordaron estos temas. **ANEXO 8.**

**Artículo 4**

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

**Salvaguardia de las culturas.**

Como se indicó anteriormente, la CDI cuenta con el PRODEI, a efecto de **apoyar a los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos, entre ellos los culturales a través del tipo** de Apoyo “Ejercicio de derechos culturales y comunicación.

Durante el periodo de 2014 a la fecha, se ejercieron $192.1 millones de pesos, con los que se han apoyado 2,752 proyectos culturales (grupos organizados) y de comunicación intercultural, y se otorgaron 391 becas para promotores culturales. Estos fueron dirigidos al fortalecimiento, difusión y preservación de los patrimonios culturales indígenas de México, los beneficiarios son avalados por sus asambleas comunitarias, consideradas como el órgano máximo en la toma de decisiones de pueblos y comunidades indígenas. Dichos apoyos se ubican en 28 entidades federativas del país, beneficiando de manera directa a 37,451 indígenas, de los cuales 20,833 son hombres y 16,618 son mujeres.

Los apoyos otorgados se desglosan en la siguiente tabla por año:

| Año | Concepto / Modalidad | Apoyo a Iniciativas Comunitarias de Cultura para el Rescate, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural Indígena. | Apoyo para la formación de jóvenes indígenas para la salvaguardia y desarrollo de su patrimonio cultural \* | Apoyo a comunicadores(as) indígenas para la producción y realización de proyectos de comunicación intercultural |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Apoyo | 505 | 97 | 78 |
| Benef. | 10,319 | 97 | 78 |
| H | 5,559 | 51 | 45 |
| M | 4,760 | 46 | 33 |
| 2015 | Apoyo | 541 | 101 | 79 |
| Benef. | 10,292 | 101 | 79 |
| H | 5,921 | 49 | 53 |
| M | 4,371 | 52 | 26 |
| 2016 | Apoyo | 480 | 78 | 60 |
| Benef. | 8,516 | 78 | 60 |
| H | 4,841 | 40 | 39 |
| M | 3,675 | 38 | 21 |
| 2017 | Apoyo | 397 | 52 | 49 |
| Benef. | 6,877 | 52 | 49 |
| H | 3646 | 26 | 32 |
| M | 3231 | 26 | 17 |
| 2018 | Apoyo | 529 | 63 | 34 |
| Benef. | 756 | 63 | 34 |
| H | 485 | 31 | 15 |
| M | 271 | 32 | 19 |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

Las actividades culturales y educativas desarrolladas permitieron dar a conocer el patrimonio cultural indígena para fomentar la cultura de los pueblos y comunidades indígenas, entre las que se encuentran las siguientes:

* El Programa Cultural en la conmemoración nacional del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con la participación de grupos de música contemporánea indígena.
* En los estados se realizaron 14 eventos de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
* Encuentro de danzas autóctonas en Jalisco.
* El 13° Festival de Cine y Video Indígena en Morelia, Michoacán.
* Crisol de Culturas: Reencuentro con la Historia y la Identidad Indígena en Monterrey, Nueva León.
* El Encuentro Intercultural de Medicina Indígena Tradicional, en Nayarit.
* La Feria Regional del Totopo en Oaxaca.
* Apoyo para el 40 aniversario del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM), Oaxaca.
* El 10° Concierto Monumental de Bandas de Viento Infantiles y Juveniles de los Pueblos Indígenas de Oaxaca.
* Apoyo para el 5° Festival Nacional de la Muñeca Artesanal en Querétaro.
* Aniversario de la radio indígena de Etchojoa, Sonora.
* Celebración del Día de Muertos en Michoacán, Quintana Roo y Yucatán.
* Presentación de las exposiciones de arte indígena:
  + Norte Infinito en el Cuartel del Arte de Pachuca. Hidalgo.
  + Se dio continuidad a la exposición México Megadiverso: Culturas indígenas contemporáneas en el Parque Guanajuato Bicentenario.
  + En el Palacio de Bellas Artes la CDI presentó la obra editorial “Arte y Memoria Indígena de México”; que tiene como objetivo dar testimonio histórico, etnográfico, artístico e iconográfico de la riqueza nacional que conforma a los pueblos indígenas de la nación y que forman parte del Acervo de Arte Indígena de la CDI.
  + En el Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo, en la Ciudad de México se realizaron 12 eventos, en el marco de la Noche de Museos de la CDMX.
  + En el estado de Hidalgo se presentó el libro “Pulque”, de la serie Alimentos y Bebidas de los Pueblos indígenas de México y se apoyó el 8° festival Cultural Hñähñu “butä ma m’uihu” (están vivas nuestras raíces). San Ildefonso, Chantepec, Tepeji del Río.

**Salvaguarda del medio ambiente.**

Hasta el ejercicio 2013, la CDI operó el proyecto **Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas (MANCON),** el cual tenía como objetivo contribuir a que la población indígena conservara sus recursos naturales a través de la operación de proyectos de manejo sustentable, apoyados de manera conjunta por dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, que permitieran potenciar recursos y esfuerzos a fin de coadyuvar en el desarrollo de las comunidades indígenas y contribuir al mantenimiento de la biodiversidad, del entorno natural y de los recursos naturales en sus territorios y regiones.

Durante el período de enero de 2011 a diciembre de 2013, se ejercieron recursos por un monto de 143.7 millones de pesos destinados al desarrollo de 361 proyectos de recuperación, reforestación, rescate y conservación de áreas naturales. A través de estas acciones se logró beneficiar a 41,585 hombres y mujeres indígenas.

A partir del **ejercicio 2014**, se creó el **PROIN**, el cual tiene como objetivo impulsar la consolidación de proyectos productivos y turísticos para la población indígena, para mejorar sus ingresos y crear condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres.

En el marco de las acciones de este Programa hay un componente de apoyo, que tiene el propósito de fortalecer las capacidades de la población indígena, dentro de éste se encuentran las **Acciones para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático,** las cuales consideran aquellas que por su naturaleza estén íntimamente vinculadas a la protección de los recursos naturales, la recuperación de la flora y fauna nativa y la recuperación del suelo de los sitios a beneficiar, como el café, el cacao, la vainilla, la pimienta, la estevia, la apicultura, las UMAS[[9]](#footnote-9) o aquellas áreas de exclusión que la comunidad determine para su recuperación, conservación o mantenimiento.

A través de este tipo de apoyo, desde 2014 se ha ejercido un presupuesto de $287,353,879.27 millones de pesos, en beneficio de 85,894 personas; distribuidos de la siguiente forma:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **PRESUPUESTO**  **EJERCIDO** | **ACCIONES** | **BENEF\_TOTAL** | **BENEF\_HOMBRES** | **BENEF\_MUJERES** |
| 2014 | $55,245,920.27 | 280 | 10,320 | 5,316 | 5,004 |
| 2015 | $60,326,830.00 | 251 | 8,377 | 4,859 | 3,518 |
| 2016 | $116,781,129.00 | 400 | 32,358 | 18,710 | 13,648 |
| 2017 | $55,000,000.00 | 401 | 34,929 | 20,121 | 14,808 |
| TOTAL | **$287,353,879.27** | **1,332** | **85,984** | **49,006** | **36,978** |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

Dentro de las *Acciones para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático*, se ha desarrollado la **Estrategia para la Producción y Productividad del Café en Regiones Indígenas**, la cual es un modelo para promover el desarrollo integral de la producción y productividad del café en zonas cafetaleras indígenas. Esta estrategia ha operado en colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),a través de convenios de colaboración.

Del ejercicio 2015 a diciembre de 2017 se ha logrado el establecimiento de 328 viveros comunitarios tecnificados, paquetes tecnológicos con insumos para la nutrición y sanidad en cafetales, incentivo económico para el pago de jornales por hectárea y la asistencia técnica a través de una red de técnicos seleccionados y capacitados, beneficiando así a 32,354 cafetaleros indígenas.

De igual forma, las radiodifusoras culturales indigenistas difunden contenidos que permiten reconocer el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos originarios en torno a sus intereses y costumbres, así como la riqueza e impacto de sus propios derechos generales. Se anexan ejemplos de los programas “voces de los pueblos indígenas”. Carpeta 2. Cultura. **ANEXO 9**.

**Artículo 6**

**México 2018**

**Observación 2013**

*Artículo 6. Consulta. La Comisión toma nota de la información pertinente proporcionada por el Gobierno en lo que respecta a la inclusión del derecho a la consulta y a la participación de los pueblos y de las comunidades indígenas en las Constituciones y en las leyes de los Estados. Asimismo, la Comisión toma nota de las recomendaciones del informe final de la consulta sobre el anteproyecto de ley general de consulta en materia de legislación, finalidad de la consulta, principios, proceso de consulta y derechos mínimos. En 2012, la CDI actualizó el sistema de consulta indígena y un protocolo de consulta fue aprobado por el Consejo Consultivo de la CDI en ocasión de su XXXIII sesión ordinaria celebrada en febrero de 2013.* **La Comisión invita al Gobierno a transmitir el texto del mencionado protocolo a la Oficina cuando se encuentre disponible. La Comisión también invita al Gobierno a que continúe presentado informaciones sobre los diferentes procesos de consulta llevados a cabo en el país, a nivel federal, de los estados y municipal. Sírvase también proporcionar indicaciones sobre el trámite legislativo del anteproyecto sobre la consulta.**

En atención a la solicitud de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, contenida en el párrafo 4 de la Observación 2013, se comparte un ejemplar del “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” aprobado por el Consejo Consultivo de la CDI en 2013, y que es la base que define las acciones institucionales en materia de Consulta. **ANEXO 10.**

En él se establecen los procedimientos metodológicos y técnicos para que los pueblos y las comunidades indígenas sean consultados a través de sus instituciones y agentes representativos en la formulación, aplicación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones gubernamentales, que inciden en sus derechos y en su desarrollo.

El documento es de carácter general, como tal enuncia principios y guía los procedimientos aplicables a una amplia gama de situaciones, en las cuales la consulta a los pueblos indígenas, su participación o ambas, se consideran necesarias.

Asimismo, establece que las consultas pueden darse mediante diversas modalidades, dependiendo de una combinación de factores como, el alcance legal de la obligación de consultar, el objeto y las finalidades específicas de la consulta, los actores involucrados, la cobertura geográfica y demográfica de los asuntos de que se trate, etc. Consecuentemente, plantea que para cada modalidad se deben establecer las condiciones y procedimientos específicos.

Específicamente el Protocolo tiene como sustento los estándares internacionales en materia de derechos humanos y consulta indígena, define los elementos y pautas que la distinguen a la consulta indígena de otros procesos de participación ciudadana. Señala que los requisitos esenciales que deben estar presentes para un debido proceso de consulta indígena son los siguientes:

* El imperio del principio de buena fe durante los procesos.
* La consulta debe ser sistemática y transparente, con el objeto de dotar de seguridad jurídica al proceso y sus resultados.
* El carácter previo de la consulta.
* El ejercicio libre de la consulta.
* Información vasta y suficiente.
* El respeto de la cultura e identidad de los pueblos indígenas.
* El reconocimiento de que en los procesos de consulta los pueblos indígenas deben poder fijar sus propias condiciones y requisitos, exigir que el proyecto se ajuste a su concepción de desarrollo y que puedan plantear otras alternativas de desarrollo.
* Respetar sus propias formas de generar consensos, sus formas de desarrollar sus argumentos y la importancia de los símbolos e imágenes a través de las cuáles reflejan sus posiciones.
* Respetar los tiempos y ritmos que marcan sus propios procesos de toma de decisiones.
* La obtención del consentimiento libre, previo e informado, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones (en sus propias lenguas, de acuerdo con su tradición oral, en sus propios tiempos, etcétera).

De conformidad con la normatividad aplicable y los estándares internacionalmente establecidos, el área central de aplicación del derecho a la participación, la consulta previa y el consentimiento se enmarca en el contexto de las relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados. Este derecho tiene su correspondencia con la obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas, de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento sobre asuntos que les afecten en distintos contextos.

De conformidad con la situación de que se trate se pueden reconocer tres niveles de participación de los pueblos indígenas:

1. Cuando la medida que les concierna sea de aplicación para toda la población indígena del país, donde habría el derecho a la participación.

2. Cuando las medidas administrativas o legislativas sean susceptibles de afectarlos directamente, donde el Estado tiene el deber de llevar a cabo la consulta previa para llegar a acuerdos, y

3. Cuando la afectación sea de tal grado en cuyo caso no es suficiente la consulta, sino que es necesario el consentimiento libre, previo e informado.

Se requiere consentimiento libre, previo e informado:

* + Cuando el proyecto implique traslado de los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales (Declaración ONU, Pueblos Indígenas, art. 10).
  + Cuando el proyecto implique el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en sus territorios (Declaración ONU, art. 29.2).
  + Cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que pudieran tener un impacto mayor en los territorios indígenas (Corte IDH, Caso Saramaka vs Surinam, párr. 133).
  + Cuando se trate de actividades de extracción de recursos naturales en territorios indígenas que tengan impactos sociales, culturales y ambientales significativos (Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2010).

Los resultados de la consulta, cualesquiera que éstos sean, son de carácter vinculatorio y obligan a las partes. Deben, por tanto, constar en documentos debidamente suscritos y legalizados y estar formulados de manera tal que puedan servir de fundamento para reclamar, incluso por la vía judicial, su cumplimiento.

A la fecha, 23 entidades federativas reconocen dentro de sus Constituciones Locales, el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas: Baja California; Baja California Sur; Campeche; Colima; Chihuahua; Durango; Guerrero; Hidalgo; Jalisco; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Querétaro; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora y Tabasco.

Asimismo, los estados de Durango y San Luis Potosí cuentan con una de Ley de Consulta Indígena, reforzando así el ejercicio del derecho a la consulta de la población indígena.

En atención a la solicitud de información sobre los diferentes procesos de consulta llevados a cabo en el país, a nivel federal, de los Estados y municipal, a continuación se puede ver la información desglosada en la siguiente tabla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2013** | | |
| **TEMA** | **DEPENDENCIA/ INSTANCIA O ENTIDAD INVOLUCRADA** | **PUEBLO INDÍGENA CONSULTADO** |
| Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II, Chiapas. | CFE | Diversos pueblos. |
| **2014** | | |
| **TEMA** | **DEPENDENCIA/ INSTANCIA O ENTIDAD INVOLUCRADA** | **PUEBLO INDÍGENA CONSULTADO** |
| Jornaleros agrícolas, Guanajuato. | CDI | Diversos pueblos indígenas. |
| Carretera Guanajuato-San Miguel de Allende, Guanajuato. | Secretaría de Obra Pública del Gobierno de Guanajuato. | Otomí. |
| Construcción y Operación del Gasoducto de Sonora en territorio Yaqui (Segmento Guaymas - El Oro), Sonora. | SENER | Yaqui. |
| Evaluación Educativa | INEE | Diversos Pueblos Indígenas. |
| **2015** | | |
| **TEMA** | **DEPENDENCIA/ INSTANCIA O ENTIDAD INVOLUCRADA** | **PUEBLO INDÍGENA CONSULTADO** |
| Construcción de una propuesta de reforma constitucional y ley en Baja California Sur. | CDI | Cucapá, kiliwa, ku'al, kumiai, paipái. |
| Identificación de Comunidades Indígenas en el Estado de Campeche. | CDI | Maya, ixil, aguacateco del estado de Campeche. |
| Identificación de Comunidades Indígenas en el Estado de Durango. | CDI | Wixárika, raramuri, mexicaneros, tepehuanos. |
| Estrategia para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENAREDD+). | CONAFOR | Diversos Pueblos Indígenas. |
| Presa La Maroma | CONAGUA | Wixárika, O´dam de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit |
| Lineamientos para el otorgamiento de concesiones de radio indígena. | IFT | Diversos Pueblos Indígenas. |
| Construcción y operación de carretera Poza Rica-Laguna Verde-Gutierrez Zamora, Veracruz. | SCT | Totonaca de Veracruz. |
| Proyecto Eólico en “El Espinal”, Oaxaca. | SENER | Zapoteca del Istmo. |
| Construcción y operación de una central hidroeléctrica, Puebla I. | SENER | Nahua y totonaca de Puebla. |
| **2016** | | |
| **TEMA** | **DEPENDENCIA/ INSTANCIA O ENTIDAD INVOLUCRADA** | **PUEBLO INDÍGENA CONSULTADO** |
| Plan Estatal de Desarrollo en el Estado de Hidalgo. | CDI | Náhua, Otomí, Tepehua y Mixteco. |
| Algodón Genéticamente Modificado en Chihuahua. | CIBIOGEM, SAGARPA, SENASICA, CDI | Tarahumara, Tepehuano, Mixteco y Náhuatl. |
| Algodón Genéticamente Modificado en Durango. | CIBIOGEM, SAGARPA, SENASICA, CDI | Indígenas Migrantes. |
| Algodón Genéticamente Modificado en Reynosa, Tamaulipas. | CIBIOGEM, SAGARPA, SENASICA, CDI | Indígenas Migrantes. |
| Algodón Genéticamente Modificado en San Luis Río Colorado, Sonora. Ciclo PV | CIBIOGEM, SAGARPA, SENASICA, CDI | Cucapah. |
| Algodón Genéticamente Modificado en San Luis Río Colorado, Sonora. Ciclo OI | CIBIOGEM, SAGARPA, SENASICA, CDI | Cucapah. |
| Distritación Electoral. | INE | Todos los asentados en territorio nacional. |
| **2017** | | |
| **TEMA** | **DEPENDENCIA/ INSTANCIA O ENTIDAD INVOLUCRADA** | **PUEBLO INDÍGENA CONSULTADO** |
| Algodón Genéticamente Modificado en Chihuahua. | CIBIOGEM, SAGARPA, SENASICA, CDI | Raramuri |
| Parque Eólico Tizimin | SENER | Maya |
| **2018** | | |
| **TEMA** | **DEPENDENCIA/ INSTANCIA O ENTIDAD INVOLUCRADA** | **PUEBLO INDÍGENA CONSULTADO** |
| Algodón Genéticamente Modificado en Mexicali, Baja California. | CIBIOGEM, SAGARPA, SENASICA, CDI | Cucapah. |
| Algodón Genéticamente Modificado en Pozas de Arvizu, Sonora. | CIBIOGEM, SAGARPA, SENASICA, CDI | Cucapah. |
| Algodón Genéticamente Modificado, Chihuahua | CIBIOGEM, SAGARPA, SENASICA, CDI | Rarámuri |
| Algodón Genéticamente Modificado, Saucillo, Chihuahua | CIBIOGEM, SAGARPA, SENASICA, CDI | Rarámuri |
| Algodón Genéticamente Modificado, Camargo, Chihuahua | CIBIOGEM, SAGARPA, SENASICA, CDI | Rarámuri |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

A consecuencia de los diferentes proyectos desarrollados de infraestructura de gran impacto a nivel nacional; especialmente aquellos en materia energética y de hidrocarburos, que pueden afectar directamente las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas del país y que han vulnerado sus derechos al carecer de una consulta previa, libre e informada, los pueblos indígenas solicitaron la intervención de la CDPIM para mediar con las diversas instancias de los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar el respeto al derecho colectivo a la consulta y coadyuvar a distender los conflictos en las diferentes regiones afectadas del país.

Para lograrlo, la CDPIM llevó a cabo diversas reuniones interinstitucionales para impulsar la realización de los procesos de consulta indígena, a los pueblos Cucapá de Baja California (sobre el decreto de creación de una reserva ecológica que afectó la pesca de curvina golfina, que es su principal actividad económica); Rarámuri y Tepehuan del Norte de Chihuahua (gasoducto); Zapoteco de Valles Centrales, Oaxaca (por un decreto de veda de los mantos acuíferos de la zona); Zapoteco de Juchitán, Oaxaca (por la instalación de un parque eólico), y Yaqui de Sonora (por la construcción de un acueducto) donde ha participado como Órgano Técnico Asesor y en cumplimiento con el Protocolo para la Implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con estándares del Convenio No. 169 de la OIT, de la CDI. En este rubro destacan los siguientes casos:

* Los Rarámuri y Tepehuanes del Norte, que habitan la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en 2013 denunciaron la falta de consulta indígena en el proyecto turístico Barrancas del Cobre y que afecta su territorio; donde la CDPIM llevó a cabo diversas mesas de trabajo interinstitucionales con los representantes de las Comunidades, logrando que éstos fueran incluidos en el Consejo Consultivo del proyecto turístico y que fueran indemnizados a través de un fideicomiso por los daños ocasionados por la construcción del aeropuerto de Creel. Respecto al proyecto del gasoducto El Encino-Topolobampo, la CDPIM impulsó la realización de la consulta, misma que materializó la Secretaría de Energía (SENER) en 2016, donde se lograron acuerdos con las comunidades afectadas.
* Los zapotecas de 16 comunidades de Valles Centrales, en Oaxaca, solicitaron en 2014, que la CONAGUA llevara a cabo el proceso de consulta indígena, a fin de modificar el Decreto de Veda de 1967 sobre los mantos acuíferos de la zona, mismo que delimitó el uso de dicho recurso y perjudicó el uso para el riego de sus cosechas; este Decreto no fue consultado de manera previa, libre e informada. La CDPIM, a la fecha, participa en diversas mesas de trabajo interinstitucionales, a fin de impulsar este proceso, logrando la aceptación del Protocolo de Consulta, el cual actualmente se encuentra en la fase consultiva.

**Artículo 7**

**México 2018**

**Solicitud directa 2013**

*Artículo 7. Planes y programas de desarrollo. El Gobierno proporciona informaciones detalladas sobre los programas ejecutados por la CDI con la participación de los pueblos indígenas, bajo el esquema de contraloría social. La contraloría social es una instancia de participación en donde los beneficiarios verifican el cumplimiento de las metas y la correcta utilización de los recursos aplicados. Asimismo, la Comisión toma nota de las informaciones sobre la utilización de las numerosas propuestas generadas en el marco del proceso de consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018 que una vez sistematizadas serán utilizadas como base para la construcción del Programa Especial de Atención a los Pueblos Indígenas, cuya elaboración se inició en julio de 2013.* **La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Especial de Atención a los Pueblos Indígenas y sobre el impacto que su ejecución haya tenido en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos interesados.**

Al respecto, se informa que la Ley de Planeación establece en su Artículo 1º que “Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal;

…/

V.- Las bases de participación y consulta a la sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y

Asimismo, en su Artículo 2º indica que “La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 es el resultado de un amplio ejercicio democrático a fin de orientar las políticas y programas del Gobierno de la República. El marco legal establece la obligación de realizar una planeación democrática donde tenga lugar la participación amplia de los mexicanos, para recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad e incorporarlas al PND. A la luz de lo anterior, se estableció un amplio proceso de consultas con motivo del Plan Nacional de Desarrollo, cuyo proceso de formulación incluyó la participación ciudadana y procesos de consulta a las comunidades indígenas.

La estrategia 2.2.3 del PND 2013-2018 dispone “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.”

Con base en el PND 2013-2018 se definió el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 (PEI 2014-2018), el cual tiene el propósito de orientar las acciones federales para la promoción del desarrollo de los pueblos indígenas, su formulación se fundamenta en los artículos 2 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 16, 22, 26 y 29 de la Ley de Planeación , y se encuentra vinculado a la Meta Nacional del PND 2 “México Incluyente” y a su objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”.

En el PEI se desarrollan seis objetivos:

* Avanzar en la armonización legislativa, el reconocimiento y la vigencia de derechos, así como el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.
* Garantizar el acceso de la población indígena a la alimentación, salud, educación, infraestructura básica y vivienda.
* Mejorar las fuentes de ingreso monetario y no monetario de las familiar y comunidades indígenas.
* Fortalecer la participación de la sociedad indígena y la coordinación intergubernamental en la planeación y gestión del desarrollo de los pueblos indígenas.

De esta forma, y bajo un enfoque de derechos humanos, la CDI opera sus distintos Programas (PRODEI, PROIN, PROII y PAEI) a efecto de alcanzar los objetivos del Programa Especial de los Pueblos Indígenas (PEI), y con ello a su vez al objetivo 2.2 referido del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y otros objetivos de dicho Plan.

En cuanto a los programas que opera la CDI, el PRODEI aboca sus acciones **a diferentes estrategias y líneas de acción del PEI, y también a otros objetivos del PND, a saber:**

* “Excarcelación de indígenas”, se enmarca en el Objetivo 1 “Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas”, particularmente en la Estrategia 1.2 “Proteger el derecho de acceso a la justicia de la población indígena y comunidades equiparables”.
* Intérpretes-Traductores en Lenguas Indígenas, se enmarca en el Objetivo 1 “Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas”, particularmente en la Estrategia 1.2 “Proteger el derecho de acceso a la justicia de la población indígena y comunidades equiparables”, en la línea de acción 1.2.3 “Fortalecer el servicio de intérpretes-traductores especializados y defensores de oficio que acompañen a los indígenas sujetos a proceso.
* Derecho a la identidad. Se enmarca en el Objetivo 1 “Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas”, particularmente en la Estrategia 1.3 “Proteger los Derechos humanos de la población indígena y comunidades equiparables”.
* Derecho a la Igualdad de Género. Se enmarca en el Objetivo 1 “Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas”, particularmente en la Estrategia 1.3 “Proteger los Derechos humanos de la población indígena y comunidades equiparables”.
* “Derechos culturales y comunicación” (en sus tres modalidades ya referidas), sus acciones están enmarcadas en la estrategia 2 México Incluyente, línea de acción 2.1 “Garantizar el ejercicio de los derechos sociales para toda la población” del PND, así como en el Objetivo Especial 6. “Preservar y fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas reconociendo su carácter de patrimonio nacional” del PEI.

**Las acciones del PROIN de la CDI se abocan al PND, en la línea de acción “**Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, a través de la implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de los productos generados, en línea con su cultura y valores”. Estrategia “2.2.3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos” de la Meta “México Incluyente”.

Asimismo, el objetivo general del PROIN, que es impulsar la consolidación de proyectos productivos y turísticos que permitan a los beneficiarios mejorar su ingreso monetario y no monetario y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida, se enmarca en el Objetivo 4 “Mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través del impulso a proyectos productivos” del Programa Especial de Pueblos Indígenas (PEI 2014-2018).

L*os* apoyos complementarios del PROIN, los cuales otorgan capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y certificación a proyectos y/o productores indígenas para maximizar el aprovechamiento de los recursos otorgados, para la resolución de problemas normativos, organizativos, productivos, operativos, administrativos y de comercialización del proyecto, se enmarcan en cuatro líneas de acción de la Estrategia 4.1 “Impulsar el desarrollo de las capacidades y potencialidades productivas de las comunidades y regiones indígenas”, así como de las cuatro líneas de acción de la Estrategia 4.2 “Impulsar esquemas de capacitación para la gestión de proyectos y la formación para el trabajo y la integración productiva de la población indígena.”, ambas del Objetivo 4 “Mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través del impulso a proyectos productivos” del PEI 2014-2018. Cabe señalar que las acciones de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento buscan también la formación y/o fortalecimiento de capacidades, destrezas y habilidades de desarrollo empresarial de los grupos y sociedades o empresas y beneficiarios.

El PROIN promueve la participación de la población beneficiaria del Programa a través de la integración y operación de Comités de Contraloría Social, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados, así como para evaluar el desempeño del servicio público que presta el personal del Programa a los beneficiarios. Para lograr lo anterior, el Programa se sujeta a los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados el 28 de octubre de 2016, en el Diario Oficial de la Federación.

Los resultados alcanzados en los comités de Contraloría Social del PROIN en los ejercicios 2016 y 2017 se resumen en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **NO. ESTADOS QUE IMPLEMENTARON UN PLAN DE CONTRALORÍA SOCIAL** | **NO. COMITÉS DE VIGILANCIA** | **EJERCIDO** |
| 2016 | 28 | 616 | 1,500,000.00 |
| 2017 | 29 | 645 | 748,795.00 |
| **TOTAL** | **57** | **1,245** | **2,248,795** |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

Hasta el ejercicio 2013, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) operó el siguiente proyecto: Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI),cuyo objetivo era disminuir los rezagos de infraestructura básica, a través de construcción de obras de agua potable, alcantarillado, electrificación, caminos y carreteras.

A partir del ejercicio 2014, se creó el PROII,el cual fomenta el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas brindando obras y acciones de Infraestructura básica (agua potable, comunicación terrestre, electrificación, drenaje y saneamiento), fortaleciendo así el proceso de desarrollo social y económico, en un marco de respeto a la cultura y los derechos de los mismos; la participación de los pueblos y comunidades indígenas es de suma importancia en el desempeño del PROII, durante el proceso de decisión, ejecución y entrega de los beneficios del programa a los habitantes de las localidades indígenas.

**Las acciones de este Programa,** que brinda, obras y acciones en materia de electrificación, agua potable y, drenaje y saneamiento, **se enmarcan en el Objetivo 3 “Proveer vivienda e infraestructura de servicios con un enfoque de sustentabilidad a las comunidades indígenas” del PEI.**

La población de las localidades dentro de la cobertura del PROII participa en la determinación de las obras para las cuales solicitarán el apoyo del programa, con base en sus objetivos y procedimientos internos.

De igual manera se promueve la contraloría social como una instancia de participación ciudadana mediante la cual los beneficiarios verifican el cumplimiento de las metas y la correcta utilización de los recursos públicos asignados al programa.

A la entrega de la obra se elabora el acta de entrega-recepción de obra, en donde los beneficiarios, a través del comité de obra, son testigos de las condiciones en la que se recibe la obra construida en su beneficio; en algunos casos también son los responsables del funcionamiento de la obra, al formar parte del órgano responsable de su operación.

Además de la participación en el proceso de definición y construcción de las obras, el PROII considera dentro de su normatividad que ésta debe hacerse conforme a la forma en que las comunidades tradicionalmente expresan su sentir; así también, que deben ser consultados, emitir opinión y ser escuchados cuando se trate de evitar daños a los sitios que valoren de acuerdo a su cultura o les impliquen cambios organizativos que consideren inapropiados.

Los apoyos del PAEI se enmarcan en el PND, específicamente con la Meta “México Incluyente”, Objetivo 2.2. “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, Estrategia 2.2.3. “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos” y con el PEI, en específico con el objetivo 2 de “Incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los pueblos Indígenas”, Estrategia 2.3 “Desarrollar acciones de mejoramiento y ampliación de la infraestructura de los albergues escolares indígenas”.

En el marco de la transparencia y conforme a lo establecido en los lineamientos de la Operación de la Contraloría Social, emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, el PAEI, se sumó al esfuerzo del Gobierno Federal para fomentar la rendición de cuentas y la vigilancia de los recursos, particularmente mediante la constitución de Comités de Contraloría Social por parte de los beneficiarios del programa.

De esta manera se garantiza la participación de la ciudadanía, siendo los Comités de Contraloría Social, de las modalidades de casas y comedores del niño indígena y casas y comedores comunitarios del niño indígena, quienes vigilan la correcta operación de las instalaciones, así como la adecuada ejecución de los recursos públicos, permitiendo con ello evaluar el quehacer institucional del Programa.

Durante el ejercicio fiscal 2014, se conformaron 197 Comités de Contraloría Social, integrados por 347 hombres y 250 mujeres, distribuidos en las 21 entidades federativas donde existen Casas y Comedores del Niño Indígena (antes albergues escolares). Se organizaron 23 talleres de capacitación dirigidos a integrantes de Comités de Contraloría Social y a servidores públicos en 7 entidades federativas con la participación de 30 servidores públicos estatales y 387 integrantes de comités. Al cierre del ejercicio fiscal, se registraron 24 Cédulas de Vigilancia de Apoyo y 94 Cédulas completas de servicio, en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).

En 2015 la participación de los padres de familia, beneficiarios del PAEI aumentó y se registraron 214 comités, integrados por 348 hombres y 316 mujeres, en conjunto levantaron 621 Cédulas de Vigilancia Mixta (Apoyo y Servicio) y 215 Informes Anuales. Estos resultados son producto del proceso de capacitación realizado en 10 entidades federativas del país con la participación de 15 servidores públicos estatales y 12 municipales, 501 integrantes de comités y 22 beneficiarios directos del PAEI, distribuidos en 53 talleres de capacitación.

A lo largo del ejercicio fiscal 2016, las 21 Delegaciones Estatales en conjunto con los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, llevaron a cabo acciones de difusión y promoción del PAEI en paralelo al esquema de Contraloría Social entre la población objetivo y con base al esquema, guía operativa y programa anual de trabajo de contraloría social.

La información proporcionada a los 239 Comités de Contraloría Social, compuestos por 355 hombres y 402 mujeres versó sobre: características de las obras y acciones; costo, periodo de ejecución y fecha programada de entrega; tipos y montos de apoyos económicos o en especie; requisitos para elegir a los beneficiarios; padrón de beneficiarios de la localidad; instancia normativa, ejecutoras del programa federal y órganos de control, así como sus respectivos canales de comunicación; medios institucionales para presentar quejas y denuncias; procedimientos para realizar actividades de contraloría social; y derechos y obligaciones de los beneficiarios.

Dicha información se brindó en 114 talleres de capacitación, impartidos en 19 estados de la República Mexicana, con la asistencia de 60 servidores públicos estatales y 1,042 integrantes de comités de Contraloría Social.

Durante el ejercicio fiscal 2017, se sumó al esquema de Contraloría Social, las Casas y Comedores Comunitarios del Niño Indígena, lo que permitió llegar a 444 comités (550 hombres y 818 mujeres) a los cuales se les capacitó en: Reglas de operación PAEI, Contraloría Social, Constitución de Comités, Normatividad, Funciones del Comité, Captación de informes, y, Quejas y denuncias. Con un total de 135 Talleres de capacitación, 34 servidores públicos estatales, 1761 integrantes de comités y 245 beneficiarios directos.

Con respecto a la proyección 2018, se tiene establecido una meta de 497 Comités de Contraloría Social distribuidos en 21 entidades federativas, cuyas acciones se desarrollarán principalmente durante el segundo semestre del año.

Durante el periodo 2014-2018 se realizaron actividades relacionadas con Contraloría Social, como se muestra en los siguientes cuadros:

**COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL E INTEGRANTES.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio Fiscal** | **Comités** | **Integrantes** | |
| **Hombres** | **Mujeres** |
| 2014 | 197 | 347 | 250 |
| 2015 | 214 | 348 | 316 |
| 2016 | 239 | 355 | 402 |
| 2017 | 444 | 550 | 818 |
| 2018\* | 497 | 570 | 850 |
| Para el ejercicio fiscal 2018, las cifras corresponden a lo Programado. | | | |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

**CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE CONTRALORÍA SOCIAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio Fiscal** | **Talleres de Capacitación** | **Integrantes de CS** | **Servidores Públicos** | **Beneficiarios** |
| 2014 | 23 | 387 | 30 | 0 |
| 2015 | 53 | 501 | 27 | 22 |
| 2016 | 114 | 1,042 | 60 | 0 |
| 2017 | 135 | 1,761 | 34 | 245 |
| 2018\* | 21 | 1,420 | 21 | 0 |
| Notas.-   1. La diferencia entre integrantes de los comités de contraloría social, contra los integrantes de Contraloría Social, capacitados, obedece a personas que pertenecen a los Comités de CS o bien a los Comités de Apoyo y que acuden a la capacitación 2. Para el ejercicio fiscal 2018, las cifras corresponden a lo Programado. | | | | |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

Adicionalmente, las radiodifusoras culturales indigenistas de la CDI produjeron y difundieron spots y programas en torno a Contraloría Social de sus programas, como el programa de infraestructura básica, el cual se viene difundiendo desde 2012 y el que ahora se presenta es una actualización, donde se invita a los beneficiarios a transparentar la realización de obras de infraestructura en sus comunidades. **Carpeta 3 Anexo 11.**

**Artículo 8-12**

**México 2018**

**Solicitud directa 2013**

*Artículos 8 a 12. Administración de justicia. La Comisión toma nota de las indicaciones proporcionadas por el Gobierno en lo que respecta a la puesta en ejecución de la Estrategia de formación, acreditación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas, en el ámbito de administración y procuración de justicia, por la CDI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Al mes de agosto de 2013, se había formado a 513 personas y acreditado a 442, intérpretes de 102 variantes lingüísticas e integrantes del Padrón Nacional de Intérpretes en Lenguas Indígenas del INALI. Por otro lado, en el marco de la ejecución del programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PCMJ), durante el período 2011 2013, se apoyaron 1,700 proyectos de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, mejorándose las condiciones de acceso a la justicia de aproximadamente 527,000 personas; durante el mismo período, el proyecto Excarcelación de Presos Indígenas logró poner en libertad a 2,506, indígenas.* **La Comisión invita al Gobierno a que continúe informando sobre los programas y medidas adoptados en aplicación de los artículos 8 a 12 del Convenio. Además, la Comisión invita al Gobierno a incluir ejemplos de sentencias de los juzgados especializados en materia indígena y de los tribunales ordinarios en los que se hayan aplicado usos y costumbres indígenas.**

En relación con el respeto de los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, apartado A, fracción II reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para la aplicación de los sistemas normativos en la solución de sus conflictos internos.

Asimismo, la Ley Agraria establece que en los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que pertenezcan mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución y la propia Ley.

El nuevo Sistema de Justicia Penal, que entró en vigor el 18 de junio de 2016, reconoce la jurisdicción indígena; es decir, que los indígenas puedan acudir ante las autoridades tradicionales para la resolución de conflictos no graves y que la decisión correspondiente sea, al igual que la del Estado, producto de un juicio justo, adecuado a la perspectiva cultural y normativa local.

En el ámbito de la impartición de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió que: “Toda persona sujeta a un proceso penal quien se ha auto-declarado indígena, debe procurársele los derechos que otorga el artículo 2° constitucional”[[10]](#footnote-10). También elaboró el *Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas*, que ofrece una aportación práctica que abone a una aproximación renovada sobre ciertos fenómenos jurídicos derivados del reconocimiento de derechos específicos de los pueblos y comunidades indígenas.[[11]](#footnote-11)

El Estado mexicano busca garantizar el pleno acceso de las personas indígenas a servicios de interpretación culturalmente apropiados durante los procedimientos judiciales, muestra de ello es el criterio adoptado por la SCJN en el sentido de que contar con un intérprete y un defensor es un derecho no solo de los procesos penales sino de todo indígena que participe en un juicio ante la jurisdicción del Estado, lo cual no es derecho exclusivo de indígenas monolingües. El derecho a traductor o intérprete no puede estar condicionado por el bajo nivel de castellanización del indígena, sino que es un derecho pleno que le asiste.[[12]](#footnote-12)

Uno de los principales retos en la materia es la certificación de un mayor número de abogados públicos federales para defender a las personas indígenas involucradas en un conflicto con la ley. A la fecha se cuenta con únicamente 24 abogados certificados. Las lenguas en las que están certificados los defensores públicos federales son: maya, purépecha, náhuatl, rarámuri, huichol, chinanteco, mazateco, mixteco, mixe, tzeltal, tzotsil, triqui, otomí, yaqui, amuzgo, chol, zapoteco y zoque.[[13]](#footnote-13) Asimismo, existen 664 intérpretes y traductores registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI).

Para solventar dicha problemática se instrumentan a través del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) procedimientos para que los defensores públicos federales vigilen con especial cuidado la eficacia de los derechos de las personas que se auto reconozcan como indígenas, a través de un Cuerpo de Atención a Indígenas integrado por: 25 defensores públicos federales, 21 oficiales administrativos, un perito en etnopsicología y un perito práctico en antropología. En su conjunto hablan 34 lenguas y variantes lingüísticas indígenas.

Para garantizar el acceso a la justicia, los integrantes de ese Cuerpo se trasladan a cualquier parte del país en que sea necesaria la defensa, y adicionalmente participa el defensor público propio de la adscripción en donde se sigue el juicio o procedimiento. En 2016 se otorgó servicio de defensa pública en materia penal, a 677 indígenas de los cuales 74 son mujeres y 603 hombres. También, el Consejo de la Judicatura Federal proporciona peritos intérpretes al juez de distrito o magistrados de circuito para apoyar en las notificaciones o diligencias o emisión de dictámenes, sobre todo tratándose de causas penales.

Ante la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal la CDI capacitó a 198 abogados indígenas en la materia, dando cobertura a 25 lenguas y a algunas de sus variantes[[14]](#footnote-14). El 29 de octubre de 2015, se firmó el Convenio Marco de Colaboración para la Implementación del Sistema de Justicia Penal con una Visión Intercultural y Multilingüe[[15]](#footnote-15), como parte del proceso de actualización y capacitación de las comunidades indígenas sobre el conocimiento y acceso a la justicia.

Este Convenio tiene como objetivo garantizar un acceso pleno a la justicia a este sector de la población, quienes por primera vez contarán con abogados bilingües gratuitos e intérpretes, que además de su idioma, también conocerán sus usos y costumbres.

En materia de capacitación a jueces y auxiliares de justicia en materia indígena, la CDI ha firmado diversos Convenios Marco y Específicos con instituciones del Poder Judicial.

En 2014, debido a una reestructuración programática de la CDI, las acciones del Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PCMJ) se integraron en el PEI, a través del cual, durante el periodo de 2013 a mayo de 2018, en materia de excarcelación de indígenas[[16]](#footnote-16) e intérpretes-traductores[[17]](#footnote-17) se tienen los siguientes resultados:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Excarcelación de indígenas 2013 - 2018 | | | |
| Año | | Hombres | Mujeres | Total |
| 2013 | | 1,000 | 82 | 1,082 |
| 2014 | | 1,557 | 136 | 1,693 |
| 2015 | | 1,015 | 121 | 1,136 |
| 2016 | | 586 | 88 | 674 |
| 2017 | | 404 | 48 | 452 |
| 2018/mayo | | 104 | 16 | 120 |
| Total | | 4,666 | 491 | 5,157 |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intérpretes – Traductores en Lenguas Indígenas 2013 - 2018 | | | |
| Año | | Hombres | Mujeres | Total |
| 2013 | | 461 | 117 | 578 |
| 2014 | | 859 | 394 | 1253 |
| 2015 | | 965 | 482 | 1447 |
| 2016 | | 900 | 370 | 1270 |
| 2017 | | 1,092 | 483 | 1575 |
| 2018/mayo | | 482 | 236 | 718 |
| Total | | 4759 | 2082 | 6841 |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

Asimismo, es importante destacar que los Estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Quintana Roo y Yucatán, cuentan con una Ley de Justicia Indígena, la cual permite reconocer y regular los procedimientos jurisdiccionales de los sistemas normativos indígenas.

Por otra parte, y en atención a la indicación número 2 contenida en el formulario de Memoria, relacionada con dicho artículo, tendente a proporcionar la información que deberá ser incluida en las Memorias y Acciones, respecto a: “… qué métodos se utilizan para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender los procedimientos legales y hacerse comprender en ellos”, se informa que el 1° de junio de 2015, se renovó la suscripción del Convenio de Colaboración para el Acceso y Uso del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, entre el INALI y la Procuraduría General de la República (PGR), cuya vigencia concluye el 30 de noviembre de 2018.

El objeto de dicho Convenio es proporcionar información vía internet al personal ministerial de la PGR, sobre los intérpretes y traductores de lenguas indígenas, registrados en él, con el fin de que las personas indígenas involucradas en la comisión de un delito federal, cuentan con una adecuada representación que les permita acceder a la justicia en condiciones de igualdad.

**Parte II Tierras**

**Artículo 14**

**México 2018**

**Solicitud Directa 2013**

*Parte II. Artículo 14. Tierras. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre los asuntos identificados como «focos rojos»; 11 conflictos han sido resueltos en su totalidad, cuatro conflictos han sido parcialmente resueltos y tres son objeto de atención y en proceso de conciliación. La Comisión también toma nota de la información proporcionada sobre la situación de las tierras: de la comunidad Huave de San Francisco del Mar, objeto de conflicto con el poblado de San Francisco Ixhuatán (estado de Oaxaca), y de la comunidad Zoque de los Chimalapas, objeto de conflicto con las comunidades de Santa María de Chimalapa, San Miguel Chimalapa y 27 núcleos de la zona noroeste del municipio de Cintalapa (estado de Chiapas). El Gobierno indica que ambos asuntos fueron atendidos a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural. La Comisión observa que se acordó solicitar autorización por parte de la Asamblea General de Comuneros para iniciar el diálogo con la comunidad de San Francisco Ixhuatán, en julio de 2011; mientras que la comunidad de San Miguel Chimalapa ratificó su solicitud de que se continuara con los trabajos de medición, en agosto de 2010. Además, la Comisión toma nota de las indicaciones proporcionadas por el Gobierno sobre la tramitación de las solicitudes de expropiación, la ejecución de resoluciones presidenciales, el reconocimiento de la personalidad jurídica de los ejidos y de las comunidades, y la labor del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE). Asimismo, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre los títulos de propiedad emitidos en 2012, mediante el procedimiento de enajenación. De este modo, 157 títulos de propiedad fueron emitidos en el estado de Chiapas. En el marco del procedimiento de enajenación de terrenos nacionales, se emitieron 22 declaratorias de propiedad nacional, a razón de dos predios en el estado de Campeche, 14 en el estado de Chiapas, uno en el estado de Sonora y cinco predios en el estado de Tabasco.* **La Comisión invita al Gobierno a seguir proporcionando informaciones sobre la manera en que se garantiza la protección efectiva de los derechos de las comunidades indígenas sobre las tierras que ocuparon tradicionalmente. Sírvase agregar en la próxima memoria ejemplos de decisiones administrativas y/o judiciales que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas a las tierras que tradicionalmente ocupan y que solucionen las reivindicaciones de tierra sobre la base de la ocupación tradicional. Además, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la situación de las tierras de la comunidad Ñahñú de San Pedro de Atlapulco (estado de México) y la comunidad Mazahua de San Antonio de la Laguna (estado de Durango).**

Tal y como se ha señalado en Memorias anteriores, existen dos modalidades de tenencia de la tierra en México: las ejidales, descritas en el artículo 9 de la Ley Agraria, y las tierras comunales descritas en el Capítulo V, Art. 98 de la misma ley. Dentro de este mismo Capítulo, en el Artículo 106, la Ley Agraria enfatiza que las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, en los términos de la Ley que reglamente el artículo 4º y el Segundo párrafo de la fracción VII del artículo 27 Constitucional.

Para dar efectividad a ese derecho, se cuenta con 55 Tribunales Agrarios, órganos con autonomía para dictar resoluciones sobre las reclamaciones que presentan los pueblos indígenas relativas al reconocimiento de tierras. Asimismo se defienden los derechos de los ejidos, comunidades y sus integrantes, mientras que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal vigila el pago de indemnizaciones y el cumplimiento de la causa de utilidad pública en expropiaciones de bienes ejidales y comunales, y en su caso, propone la reversión de tierras con apego a derecho.

* La manera en que se garantiza la protección efectiva de los derechos de las comunidades indígenas sobre las tierras que ocuparon tradicionalmente.

Las reformas del 6 de enero de 1992, al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XIX, establece en su primer párrafo, que el Estado dispondrá lo necesario para la expedita y honesta impartición de justicia agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, a través de la asesoría legal de los campesinos, naciendo así la Procuraduría Agraria, como un Órgano encargado de la procuración de justicia y los Tribunales Agrarios, como órganos dotados de plena autonomía y jurisdicción en la emisión de sus fallos para la administración de la justicia agraria en todo el territorio nacional, los que se dividen en un Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México y Tribunales Unitarios Agrarios ubicados en las entidades federativas.

En ese contexto, la Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado en la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encargado de la procuración de justicia a los sujetos agrarios, a través de la asesoría y representación legal en defensa de sus derechos, quien actuara siempre a petición de parte, esto es cuando así se lo soliciten y de oficio cuando se haga de su conocimiento la trasgresión de la Ley Agraria por parte de las autoridades en el ámbito administrativo, pues como ya se dijo la Procuraduría Agraria tiene funciones de Servicio Social y está encargada de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios de conformidad con los artículos 134 y 135 de la Ley Agraria, por lo que es el ombusdman agrario, privilegiando en todo momento los derechos de la clase campesina e indígena, es decir los pueblos originarios.

La Procuraduría Agraria, tiene la atribución plena de defensa de los derechos de éstos, cuando se les pretenda despojar de sus tierras, debiendo para ello, mediar el consentimiento del núcleo de población de que se trate; por lo que este organismo del Estado garantiza la defensa ante los tribunales agrarios de sus derechos; así también, el Estado considerado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, debe garantizar el cumplimiento de la Carta Magna a favor de los gobernados y como uno de sus fines, se encuentra la creación y prestación de servicios públicos, que constituyen la actividad de la administración pública, así como el garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la Constitución en favor de los pueblos indígenas.

El artículo 2º de la Constitución Federal se divide en apartado A el cual contiene la protección de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación a decidir sus formas internas y organización social, económica, política y cultural; aplicar sus propios sistemas normativos de regulación y solución internos sujetándose a los principio de nuestra Carta Magna, respetando garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad de las mujeres; elegir sus autoridades y representantes para el ejercicio de su formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones en respeto a la soberanía del pacto Federal y de los Estados entre otros y el Apartado B en síntesis se refiere a que la Federación, los Estados y Municipios deben promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar prácticas discriminatorias para garantizar los derechos de las comunidades indígenas.

La superficie nacional comprende 196.4 millones de hectáreas, de estas el 51% (100.9 millones de hectáreas) comprenden la propiedad social, la cual está compuesta por los regímenes de propiedad ejidal y **comunal**, que, en su conjunto, tiene poco más de 5.2 millones de titulares de derechos agrarios, que conforman 32,121, núcleos agrarios de los cuales 29,728 son ejidos y **2,393 son comunidades agrarias**.

Cada ejido o comunidad cuenta con su carpeta agraria básica compuesta por el conjunto de documentos en los que se establece la creación o constitución o ampliación de ejidos o **el reconocimiento de comunidades o la restitución de tierras a una comunidad**, ya sean por resolución presidencial o por sentencia de los tribunales agrarios (Resolución Presidencial o sentencia que da origen a la comunidad o ejido; Actas de ejecución y deslinde y Plano definitivo del núcleo agrario).

Los ejidos y comunidades tienen la facultad para delimitar, destinar y asignar los derechos sobre las tierras parceladas, de uso común o de asentamiento humano, esto les permite generar certificados parcelarios, de derechos de uso común o títulos de solares urbanos, como forma de garantizar la posesión de las tierras.

1994 procede De conformidad con las atribuciones con las que cuenta la Procuraduría Agraria, específicamente la de “Promover, apoyar y dar seguimiento hasta su culminación, al desarrollo de los programas de certificación y titulación de derechos sobre la propiedad rural”, actividad que se lleva a cabo a través de los Programas “Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales” (PROCEDE), el cual tuvo vigencia de 1994 a 2012 y actualmente el denominado “Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios” (RRAJA-FANAR).

Dichos programas tienen como objetivo otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra mediante el ordenamiento, regularización, certificación y titulación de los derechos sobre la propiedad social, contribuyendo con ello al ordenamiento territorial, entre la población objetivo de atención se encuentran aquellos ejidos y comunidades constituidos conforme a lo establecido en los artículos 9, 90, y 98 de la Ley Agraria, en relación al artículo 2 fracción IX, del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

Ahora bien, el **artículo 106 de la Ley Agraria señala que “Las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, en los términos de la ley que reglamente el artículo 4o. y el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 27 constitucional**”.

Es de esta forma como la institución contribuye a garantizar la protección efectiva de los derechos de las comunidades indígenas sobre las tierras que ocupan.

* Ejemplos de decisiones administrativas y/o judiciales que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas a las tierras que tradicionalmente ocupan y que solucionen las reivindicaciones de tierra sobre la base de la ocupación tradicional.
* En relación al conflicto de las comunidades zoques, de Santa Maria Chimalapa y San Miguel Chimalapa, con 27 ejidos del municipio de Cintalapa, Chiapas. A petición de la comunidad de Santa Maria Chimalapa, la Procuraduría Agraria, presento demanda de nulidad de Resolución Presidencial, y restitución de 7, 400 hectáreas, contra el ejido, Rafael Cal y Mayor, el día 1 de diciembre de 2017, juicio agrario, 30335/2017, y contra el ejido Canaal por una superficie de 2,651 hectáreas, el día 14 de febrero de 2018 en el juicio agraria 3021/2018, en Tribunal Unitario Agrario 22 de Tuxtepec Oaxaca. Con estos juicios se defiende el derecho de la comunidad agraria.
* Firma de Convenio Conciliatorio por determinación de Límites entre dos comunidades, Santos Reyes Tepejillo y San Juan Mixtepec, Oaxaca 15/09/2015. Por la determinación de Límites ambas comunidades estaban en disputa e infinidad de enfrentamientos desde hace más de 150 años, ante la voluntad de las partes la Procuraduría Agraria interviene conciliando las pretensiones de las partes y se logra avenir los intereses de cada una, firmando de conformidad el convenio conciliatorio, estipulándose el caminamiento y brecheo de la línea longitudinal que determina el límite de las mismas, terminando la conflictiva presentada, realizado ante la presencia de los comuneros de ambos núcleos agrarios y autoridades municipales y Procuraduría Agraria, Con esto se otorga certeza jurídica en el patrimonio de ambas comunidades, al concluir la disputa por límites y los enfrentamientos.
* Conflicto por la determinación de límites entre Comunidad de San Mateo Nejapan, municipio de San Mateo Nejapam, Estado de Oaxaca., y la Comunidad de Alpoyeca, municipio de su mismo nombre, Estado de Guerrero; en una superficie de 205 hectáreas, problemática que tenía 102 años. La comunidad de Alpoyeca, Guerrero; pretendía recuperar una superficie de 205 hectáreas en base a sus documentos originarios. Si bien es cierto, se realiza la regularización de ambas comunidades agrarias por el programa denominado PROCEDE, también lo es que no resolvieron la problemática social y de límites que imperaba, y no reconocían los trabajos de certificación en cuanto a la colindancia específica entre las mojoneras “PALMA CUATA”, “CUEVA DE TIGRE” y “PALO HERRERO”; actos que ocasionaban incertidumbre y enfrentamientos entre los integrantes por la defensa de sus derechos.

Con la sensibilización a los órganos de representación y asamblea general de comuneros de ambas comunidades por parte de la Residencia de la Procuraduría Agraria con sede en la Ciudad de Huajuapan de León del Estado de Oaxaca; se logra avenir a las partes, una vez realizados los trabajos técnicos topográficos por personal de la Delegación Federal de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca.

Con la firma de convenio entre las partes de fecha 15 de noviembre del año dos mil 2017, ante la presencia del Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Huajuapan de León, se da por concluida la problemática por la determinación de límites y en fecha 17 de noviembre del mismo año, se ratifica convenio en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 12 con sede en Chilpancingo, Guerrero.

En fecha 21 de agosto del año 2018, se recibe la resolución que califica de legal el convenio celebrado entre ambas comunidades.

* Situación de las tierras de la comunidad Ñahñu de San Pedro de Atlapulco (Estado de México) y la comunidad Mazahua de San Antonio de la Laguna (Estado de Durango).
* San Pedro de Atlapulco (Estado de México).

El 29 de agosto de 2014, los representantes de B. C. de San Pedro Atlapulco informaron a la Procuraduría Agraria que los representantes de ambos núcleos se reunieron y acordaron que con apoyo de un topógrafo realizarán la delimitación de las superficies de ambos núcleos sin intervención de ninguna dependencia.

Se está en pláticas el comisariado de San Pedro Atlapulco y sus anexos para la separación de los anexos.

A la fecha, se tiene conocimiento que no se han llevado a cabo las reuniones.

* San Antonio de la Laguna (Estado de México).

El documento señala que el poblado pertenece al estado de Durango, siendo lo correcto su pertenencia al Estado de México.

Los Bienes Comunales de referencia se oponen a la regularización de la comunidad y los comuneros no tienen interés en que se lleve a cabo ningún programa de certificación que les otorgue certeza jurídica en la posesión que ostentan.

Aunado a esto la institución le ha sido limitada su participación en los asuntos del núcleo dando prioridad a la intervención de asesores y abogados externos.

Si bien es cierto que, se ha limitado el actuar institucional dentro de la comunidad de referencia esto es únicamente por cuanto hace a la regularización de la tenencia de la tierra, también lo es que la Residencia en Valle de Bravo de la Procuraduría Agraria ha tenido intervención en el marco de sus atribuciones en la actualización de los órganos de representación y vigilancia, así mismo se les ha venido otorgado a los comuneros o sujetos agrarios de la comunidad los servicios de representación legal ante el Tribunal Unitario Agrario correspondiente en cuanto a la regularización de derechos agrarios, también se han realizado capacitaciones a través de asambleas generales de comuneros, en temas diversos solicitados por los integrantes del comisariado, y se les han otorgado los servicios institucionales a fin de garantizar un óptimo desarrollo en cuanto a la organización interna de la comunidad.

**Artículo 15**

**México 2018**

**Solicitud Directa 2013**

*Recursos naturales. Participación en los beneficios.* **La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria presente informaciones sobre el funcionamiento de los procedimientos existentes para que los pueblos interesados puedan participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten las actividades cubiertas por el artículo 15 del Convenio, y perciban una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de las mismas.**

Los derechos de los pueblos a los recursos naturales y su ejercicio se consagran en el precepto 4º, párrafo cuarto de la Constitución y el numeral 27, párrafo tercero de la Constitución.

El Gobierno de México se permite informar que está realizando las consultas correspondientes y en su oportunidad se proporcionará la información respectiva.

**Solicitud Directa 2013**

*Proyectos hidroeléctricos. La Comisión toma nota de la información proporcionada sobre los proyectos hidroeléctricos gestionados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el caso del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, que se encuentra fuera del área del Istmo de Tehuantepec (estado de Oaxaca), se realizaron diversas actividades encaminadas a su difusión y a la consulta de los pueblos indígenas para posibilitar el inicio de la etapa de factibilidad. Según el Gobierno, en el marco del proyecto hidroeléctrico Las Cruces (estado de Nayarit), la CFE está llevando a cabo los trabajos de factibilidad; y se realizó la consulta previa de las comunidades coras, por medio de un procedimiento que incluye la comunicación directa con los miembros de la comunidades, de sus representantes y de sus autoridades tradicionales para otorgar su consentimiento para la ejecución de los estudios ambientales, topográficos y las actividades de exploración geológicas.* **La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionando información sobre los procedimientos de consulta y de participación establecidos al ejecutar los proyectos hidroeléctricos que puedan afectar el hábitat de los pueblos indígenas. La Comisión se remite a la solicitud directa de 2011, e invita al Gobierno a agregar en próxima memoria informaciones sobre la ejecución del proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec y la manera en que se asegura que las distintas entidades involucradas se han asegurado del cumplimiento de las disposiciones del Convenio.**

El Gobierno de México toma nota de las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y se permite hacer las siguientes observaciones:

La reforma constitucional en materia energética de 2014 contempló el derecho a la consulta previa de comunidades y pueblos indígenas. En la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, se estableció la obligación de llevar a cabo la consulta previa en proyectos de hidrocarburos y de la industria eléctrica que pudieran afectar los derechos e intereses de las comunidades indígenas. Los reglamentos de ambas leyes incluyen disposiciones para normar el procedimiento de consulta previa.

El sector eléctrico en México, actualmente se encuentra en un proceso de modernización que, entre otras cosas, busca desarrollar la apertura del sector a la participación de particulares en ciertas actividades, con el objeto de fortalecer las inversiones.

Entre las transformaciones más relevantes se encuentran: La constitución de la CFE como una empresa productiva del Estado y que la industria eléctrica operará mediante un mercado de energía en el que participan empresas públicas y privadas en igualdad de condiciones, para ofertar electricidad a precios competitivos para la industria, los servicios y el campo, y más asequibles para las familias.

Con ello se suscitaron cambios esenciales en los esquemas financieros, administrativos y de inversiones anteriores, con base en los que se ejecutaban los proyectos hidroeléctricos a nivel nacional. A causa de ello, la CFE decidió poner en estatus de pendiente a los proyectos Paso de la Reina, ubicado en el Estado de Oaxaca y Las Cruces, en el Estado de Nayarit.

La CFE en los últimos años ha reconocido la importancia de la participación y consulta de la población involucrada en este tipo de proyectos y de conformidad con estándares internacionales, como es el caso del Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, estableció que como parte integral del desarrollo de proyectos, resultaba necesario que se iniciara con la realización de una serie de actuaciones, dirigidas a obtener la licencia social de los proyectos en mención.

Es necesario recalcar que, como parte de este reconocimiento, entre los años 2013 y 2014, la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE, en colaboración con la SENER y la CDI; elaboró el Protocolo para el diseño e implementación de la Consulta a Comunidades Indígenas involucradas en los proyectos hidroeléctricos de la CFE, de conformidad con los estándares del Convenio No. 169 (**ANEXO 12**), mismo que fue enviado a la Dirección de Participación y Consulta Indígena de la CDI para su revisión y formalización, instancia que observó que dicho Protocolo cumplía con los estándares para la consulta (**ANEXO 13**).

Los procedimientos de información y consulta realizados por la CFE para los proyectos hidroeléctricos Paso de la Reina y Las Cruces fueron iniciados en etapas tempranas –antes de determinar su factibilidad y antes de obtener autorizaciones y permisos-, su objetivo fue promover la participación efectiva y directa de las poblaciones en la planeación y desarrollo de los proyectos, para determinar la posible afectación de los derechos de las comunidades involucradas en los proyectos, mismos que se describen a continuación:

Procedimiento de información y consulta del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.

Las características técnicas del proyecto permitían que éste tuviera distintas ventajas, entre las principales se evitaba el desplazamiento de población, ya que la cortina se proyectó en una zona encañonada en la que no se localizaban viviendas y/o asentamientos humanos, de igual manera, por la formación del lago artificial producto del llenado del embalse, no se identificó la relocalización de vivienda alguna.

En el área de estudio del proyecto, el mecanismo de información y consulta dio inicio en el año 2007, a través del acercamiento y vinculación con la población y partes interesadas, cuyo principal objetivo fue socializar el proyecto denominado “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina.

Lo anterior, se llevó a cabo mediante la conformación de una brigada de personal con perfil socio ambiental instalada en Santiago Jamiltepec, en la Costa de Oaxaca, cuya labor principal fue otorgar información suficiente sobre el proyecto, obtener anuencias e identificar las inquietudes y percepciones de las poblaciones involucradas, con la finalidad de tomar decisiones incluyentes durante las siguientes etapas de desarrollo del proyecto.

Como resultado de este proceso se obtuvieron los permisos para desarrollar los estudios sociales y ambientales requeridos para la determinación de la factibilidad del proyecto, así como anuencias para la ejecución del proyecto, y cinco de ocho anuencias para que la CFE tramitará el Cambio de Uso de Suelo en Terreno Forestal (CUSTF) requerido como parte de las autorizaciones ambientales, en México.

Conviene subrayar que el proceso de información y consulta realizado fue continúo y sistematizado mediante memorias fílmicas, fotográficas y documentales de todas las pláticas, reuniones, asambleas y talleres que evidencian el quehacer social de la CFE.

En el año 2016, se suspendieron las labores informativas en la región con el cierre de la Oficina de información y comunicación de la CFE, y a esa fecha se contabilizaron más de 2,000 acciones realizadas por la CFE con la población involucrada en el probable desarrollo del proyecto.

El procedimiento implementado, antes de la nueva legislación en materia energética, fue realizado por la CFE a través de la Coordinación de proyectos Hidroeléctricos, que fue diseñado para informar y consensuar el desarrollo de un proyecto con todos los sectores de la población, es decir, involucrando a jóvenes, mujeres, hombres, personas mayores, indígenas, mestizos, población afrodescendiente, autoridades morales, ayuntamientos, autoridades locales, representantes agrarios, asociaciones productivas, entre otros grupos de interés.

Por ello, el proceso de comunicación implementado mostró las características del probable proyecto, solicitando el permiso a las comunidades para que los especialistas de diversas universidades y centros de investigación, pudieran realizar los estudios sociales y ambientales, conociendo y entendiendo el entorno en el que probablemente se realizaría el proyecto.

Simultáneamente, se llevaron a cabo varias actuaciones de la CFE con objeto de apoyar el desarrollo de la región mediante la ejecución de obras sociales, tales como la construcción de canchas deportivas, rehabilitación de centros educativos, ampliación de oficinas de la representación agraria en las localidades y donación de computadoras, entre diversas acciones de involucramiento, con el fin de que la población participe directamente en el proyecto de desarrollo, desde la etapa de planeación del mismo.

**Gestión Social de 2013 – 2016.**

El periodo de información concluyó en 2016, ya que es en este año en el que se suspendieron las actividades en campo y se cerró la oficina establecida en la región de la costa de Oaxaca.

Durante ese periodo, el proceso de información y consulta sobre el probable proyecto ya se encontraba implementado en la región de estudio y mediante cuadernillos, folletos, visitas a centrales hidroeléctricas en operación, asambleas, actas de acuerdos y pláticas ciudadanas. Las comunidades involucradas fueron informadas sobre los avances de los estudios, así como el contexto sociopolítico existente a partir de la posibilidad del desarrollo del proyecto y la coordinación establecida entre instancias de los tres niveles de gobierno.

Se estableció como estrategia de atención a los distintos grupos de interés, la implementación de mesas de diálogo en las que se presentaban propuestas, recomendaciones e inquietudes, con una importante participación de las comunidades involucradas directamente con el proyecto.

Por lo anterior, de 2013 a 2016, como parte de las actividades se llevó a cabo una encuesta en todas las comunidades, sobre si el proceso de comunicación era asequible, suficiente y adecuado desde la perspectiva de los propios implicados.

En este mismo periodo, se continuaron realizando obras sociales como la ampliación de la comisaría ejidal de El Ocote y Santa Cruz Tututepec, y la rehabilitación de la cancha de usos múltiples de La Cumbre y su escuela primaria, así como la implementación de un sistema fotovoltaico a su comisaria.

A principios del año de 2014, en colaboración con la Universidad de Guadalajara, mediante metodologías participativas se elaboró un Estudio de Impacto Social, en el que la población analizó y discutió los probables impactos negativos y positivos sociales del proyecto, así como la identificación de propuestas de medidas de mitigación por parte de las poblaciones involucradas.

Como evidencias de este proceso, se anexan dos carpetas digitales que muestran los avances **(ANEXO 14).**

**Lista de estudios sociales y ambientales llevados a cabo para el desarrollo del proyecto.**

Los estudios desarrollados por la CFE como parte de la determinación de la factibilidad del proyecto fueron realizados mediante convenios de colaboración con centros de investigación e instituciones educativas, con los cuales se generó información científica para atender la normativa ambiental, lineamientos nacionales e internacionales en materia social, así como la eficaz toma de decisiones. Los estudios realizados fueron los siguientes:

Hidrología superficial y subterránea

Hidráulica fluvial

Hidrodinámica lagunar costera

Climatología

Uso de suelo

Calidad del agua

Contaminación difusa

Caudal ambiental

Distrito de riego

**Estudios**

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Morelos)

Universidad Autónoma de Campeche

Diagnóstico del sistema lagunar

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Baja California)

Diagnóstico de la actividad pesquera

* Avifauna

Mastofauna

Herpetofauna

Ictiofauna

Tortugas marinas

Calidad del agua

Universidad del Mar (Oaxaca)

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (Oaxaca)

* Fauna terrestre
* Vegetación terrestre y riparia
* Vegetación acuática

Para la caracterización del entorno social, se solicitó el apoyo del Centro de Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Pacífico Sur, así como de la Organización Civil Yo Quiero, Yo Puedo. El estudio de impacto social estuvo a cargo de la Universidad de Guadalajara, a través de su Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

* **Fecha de suspensión y de finalización de actividades de Gestión Social.**

La fecha de suspensión de las labores en el área de estudio del proyecto fue en abril de 2016, enviando un comunicado a cada comunidad y municipio de los motivos de cierre de las instalaciones desde donde se llevaban a cabo las actividades de gestión social del proyecto.

**B.2 Procedimiento de información y consulta del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces.**

Antecedentes generales.

Para el Desarrollo de la factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, la CFE efectuó una serie de actuaciones dirigidas a lograr que todas aquellas actividades que están vinculadas con las comunidades que forman parte del área de influencia del proyecto, se realizaran en un ámbito de respeto de sus derechos, los cuales se contemplan en algunos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Para desarrollar la factibilidad de este proyecto hidroeléctrico, la CFE inicio en 2008 con las gestiones sociales necesarias para efectuar los estudios geológicos, ambientales y sociales, identificándose al mismo tiempo, aspectos socioculturales distintivos de las comunidades indígenas habitantes de esta región:

* Son descendientes de los pueblos originarios Na’ayari, Wixárica, y Mexican; y descendientes no indígenas.
* Pertenecen a 5 comunidades indígenas y sus 29 anexos/localidades.
* Se ubican en los Municipios de Acaponeta, Rosamorada, Ruíz y del Nayar.
* 2,593 son comuneras/comuneros con derechos agrarios.
* 4,293 son avecindados y/o familiares de comunera/comunero.
* Regionalmente suman 174,689.59 has. de dotación agraria.
* Sus autoridades representativas son:
* 6 Gobiernos tradicionales Presidio de los Reyes, San Juan Corapan, Rosarito, San Blasito, Saycota (Santa Cruz) y El Naranjo.
* 5 comisariados de bienes comunales; 34 jueces auxiliares.
* Representantes de más de 195 Comités Locales/comunitarios.

Paralelamente al inicio de los estudios antes descritos, se reforzaron las formas y medios de comunicación con la población y autoridades representativas de las comunidades vinculadas al proyecto, de acuerdo al alcance de cada actividad y zonas de estudio.

Durante esa etapa, además de que se proporcionó información sobre el proyecto que se estaba estudiando, se celebraron los primeros acuerdos entre las partes para poder llevarlos a cabo.

Una vez que los estudios de factibilidad arrojaron resultados en el sentido de que sí había condiciones técnicas para su construcción, se intensificó la comunicación y se siguió con el proceso de consulta señalado en el Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas.

Participaron todas las comunidades que pudieron tener alguna relación con el desarrollo del proyecto. Esto fue a partir de abril de 2013. Fungiendo como órganos garantes la CDI y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nayarit, así como la Secretaría General de Gobierno del Estado que intervino como Coordinadora del Grupo Interinstitucional formado para seguimiento de los acuerdos de la consulta.

En el segundo semestre del año 2013, se realizó la etapa más intensa de información, consulta y acuerdos con la población indígena vinculada con el proyecto, una vez que se tenía la información suficiente para contestar a la población cualquier duda, tanto de carácter social, como ambiental, agrario, de afectaciones, etc.

Esta etapa de consulta se llevó a cabo antes de la obtención de los permisos para la construcción del proyecto y de la obtención de la autorización de las partidas presupuestales para el mismo.

Posterior a las acciones de consulta realizadas en el año 2013, la comunicación y seguimiento de la consulta indígena del Proyecto Las Cruces se ha mantenido de manera continua, de acuerdo a la etapa en que se encuentra el proyecto, en estatus de pendiente, a partir de las modificaciones al sector energético antes descritas.

En el **ANEXO 15** se mencionan detalladamente los resultados del proceso de Consulta a pueblos indígenas.

**Proceso de validación de la consulta a pueblos indígenas.**

Como parte de las acciones para asegurar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas involucrados en el proyecto hidrológico Las Cruces, se llevaron a cabo las siguientes acciones por distintas dependencias:

* La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el resolutivo de impacto ambiental, señaló que la SENER debería determinar si el proceso de consulta a pueblos indígenas llevado a cabo por la CFE, fue conforme a los estándares internacionales y la normatividad aplicable.
* La CFE, el día 16 de octubre de 2014 presentó a la SENER la primera documentación relacionada con la consulta indígena, con objeto de lograr su validación.
* El 30 de octubre de 2014, la SENER requirió información adicional, así como realizar reuniones de reforzamiento en las cinco localidades que mayor relación tienen con el proyecto, a saber: poblaciones de Rosarito, San Blasito, San Juan Corapan, San Pedro Ixcatán y Presidio de los Reyes.
* En los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015, se realizaron las reuniones de reforzamiento, dando por cumplidos todos los requerimientos de la SENER, hasta el 4 de febrero de 2015.
* El 11 de febrero de 2015, la SENER requirió la Evaluación de Impacto Social (EIS) de conformidad con la Ley de la Industria Eléctrica, sin que existiera obligatoriedad alguna para la CFE, en virtud de la no aplicabilidad del efecto retroactivo de la Ley. Aun así, la CFE presentó el 2 de marzo de 2015 la Evaluación de Impacto Ambiental, que puede ser consultada en la dirección electrónica: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/155900/Evaluaci_n_o_Manifestaci_n_de_Impacto_Social_del_Proyecto_Hidroel_ctrico_Las_Cruces.pdf>.
* El 27 de mayo de 2015, la CFE presentó a la SENER los documentos que dan atención a las observaciones a la EIS y la Consulta Indígena.
* Para atender la última observación de la SENER, el 11 de junio se realizó una sesión informativa con la autoridad municipal de Ruíz, Nayarit. Los resultados de la misma se entregaron a la SENER el día 16 de junio de 2015.
* Con fecha 17 de julio de 2015, la SENER validó que el proceso de la Consulta fue llevado de conformidad con los estándares internacionales y la normatividad aplicable, así como la EIS del proyecto (**ANEXO 16**).

**Seguimiento de los Acuerdos.**

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, durante el año 2013 la CFE llevó a cabo un proceso de consulta a la población indígena vinculada con el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, en donde se hicieron visibles demandas, denuncias y aspiraciones en el corto, mediano y largo plazo, cuyo cumplimiento es condición imprescindible para el desarrollo de esta región.

Resultado de esta consulta, se acordó la elaboración de un Plan de Desarrollo Regional 2015 – 2025 de las comunidades indígenas de San Pedro Ixcatán, San Juan Corapan, Rosarito, San Blasito y Saycota y sus anexos vinculados con el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, Nayarit (Plan de Desarrollo Regional), como documento de consulta para facilitar la gestión y concertación con las representaciones institucionales federales, estatales y municipales con la finalidad de implementar las acciones y obras prioritarias para el desarrollo regional sustentable.

Las comunidades indígenas, a través de sus autoridades representativas, plantearon la propuesta a la CFE de que dicho Plan fuera realizado por el Lic. Teodoro Torres Vázquez, a través de “Kinto Sol, A.C.”

Con el propósito de diseñar, definir y elaborar 34 perfiles locales, el diagnóstico regional 2015 y el Plan de Desarrollo Regional de las Comunidades indígenas de San Pedro Ixcatán, San Juan Corapan, Rosarito, San Blasito y Saycota y sus anexos del Estado de Nayarit, se implementó un proceso de planeación participativa corresponsable entre las y los habitantes de la región, sus autoridades representativas, el facilitador del proceso Kinto Sol A.C. y el monitoreo del Grupo Interinstitucional de Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, durante el periodo junio de 2015 a febrero de 2016.

Los ejes del Plan de Desarrollo Regional que se definieron son los siguientes:

Ejes Rectores

Bienestar social

Ejes transversales

Equidad de género

Desarrollo Económico

Cultura Indígena

Medio ambiente

Seguridad Integral

En el año 2017 este Plan de Desarrollo Regional se difundió entre diversas dependencias e instituciones del Gobierno Federal y Estatal, así como en los ayuntamientos de los Municipios de Acaponeta, Ruíz, Rosamorada y del Nayar.

Lo anterior con la finalidad de presentar las acciones de desarrollo que son competencia de cada uno de la dependencia e instituciones que tienen alguna injerencia en la región donde se localiza el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, para que de ser viable se incluyan en sus respectivos presupuestos de egresos del 2018 y años subsecuentes.

En el caso del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, los estándares definidos en el Convenio 169 de la OIT, se aplicaron de la siguiente manera:

Previa e informada.

Durante los estudios se mantuvo informada de manera suficiente y continuamente a la población relacionada con el proyecto y se han mantenido vigentes los acuerdos necesarios para la ejecución de éstos.

Una vez que los estudios técnicos confirmaron la factibilidad del desarrollo del proyecto, se realizó la consulta antes de solicitar cualquier autorización para su construcción.

Libre.

Se acordó con los representantes de las comunidades emitir convocatorias para toda la población de las localidades /anexos donde se realizaron las reuniones. La difusión se hizo a través de sus medios, formas y autoridades locales y la participación de la población fue sin ningún tipo de coerción, intimidación o manipulación, ni tampoco hubo restricción alguna para cualquier asistente que deseara estar presente.

Buena fe.

Las reuniones de consulta se celebraron en las condiciones que la población y la CFE acordaron previamente, los acuerdos que se tuvieron quedaron asentados en las actas notariales y los habitantes de una comunidad posiblemente desplazable, otorgaron su consentimiento para su reubicación.

Esto se manifiesta en la Recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida el 27 de febrero de 2018 (pág. 102)[[18]](#footnote-18), que a la letra dice:

“178 No pasa inadvertido que tanto la CFE como la SEMARNAT han impulsado en otros proyectos, como es el caso de la hidroeléctrica “Las Cruces” en el Estado de Nayarit, un proceso de consulta conforme a los estándares internacionales en la materia y con la participación de las comunidades mestizas e indígenas que pudiesen resultar afectadas y sus autoridades tradicionales, contando con el apoyo de la CDI y la SENER, por lo que, este organismo autónomo les exhorta a que en lo sucesivo se repliquen esos procesos y, en el caso particular, a informar de manera oportuna, accesible y culturalmente adecuada a la población sobre las medidas de prevención y mantenimiento implementadas para reducir riesgos ante cualquier eventualidad”.

**Parte III Contratación y condiciones de empleo**

**Artículo 20**

**México 2018**

**Solicitud Directa 2013**

*Parte III. Artículo 20. Contratación y condiciones de empleo. La Comisión toma nota de la reforma de 2012 de varias disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, inclusive aquellas que regulan el trabajo en el campo (artículos 279 a 284). La Comisión toma nota con* interés *de la adición de una obligación especial para los patronos consistente en la utilización de los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español (artículo 283, fracción XII). La Comisión también toma nota de los programas destinados a beneficiar a los trabajadores agrícolas, del proyecto piloto Formación de Gestores Comunitarios y del proyecto Impulso al trabajo decente de las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad. El objetivo del primer proyecto es promover y dar a conocer los derechos laborales y agrarios de los jornaleros agrícolas por intermedio de los líderes y autoridades comunitarias (indígenas y no indígenas); mientras que, en el caso del segundo, es impulsar el desarrollo productivo de las y los jóvenes en circunstancias de vulnerabilidad laboral. Además, la Comisión toma nota de la ejecución de operativos especiales de inspección a campos agrícolas. El Gobierno considera que durante el período 2008-2012 las inspecciones realizadas beneficiaron a un total de 25,969 trabajadores. Por otra parte, en lo concerniente a la situación de los trabajadores indígenas de la comunidad Zolontla, ubicada en el municipio de Ixhuatlán de Madero (estado de Veracruz), la Comisión toma nota de que el gobierno del estado coopera con la Delegación Federal del Trabajo para prevenir cualquier forma de explotación laboral. El Gobierno añade que el sistema de quejas y denuncias anónimas de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del gobierno de Veracruz no ha tenido conocimiento de casos de trabajo forzoso o de cualquier otra forma de explotación laboral, en dicha comunidad o en ninguna otra, que involucre a jornaleros o niños indígenas.* **La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionando información actualizada sobre las medidas adoptadas para aplicar el artículo 20 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que continúe brindando informaciones sobre las medidas concretas tomadas para garantizar una inspección del trabajo adecuada en las zonas donde ejerzan sus actividades los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas.**

El gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoce en los jornaleros agrícolas un grupo en situación de vulnerabilidad que requiere atención específica, dentro de este grupo, se incluyen los trabajadores indígenas. Es por ello que para proteger sus derechos e impulsar el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, se realizan diversas acciones. En este sentido, se destacan las siguientes:

* *Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil*. Este Distintivo se otorga a empresas que demuestran que no emplean a menores de edad y promueven el cuidado y protección de los hijos de sus trabajadores.

Este Distintivo promueve la adopción de buenas prácticas laborales en las empresas agrícolas del país y evita de manera sistemática y permanente la utilización de mano de obra infantil en las áreas y/o procesos internos, tanto productivos como de distribución, comercialización y de servicios.

Es un modelo de gestión y organización que permite a las empresas agrícolas que contratan a trabajadores del campo:

* Incorporar medidas para la no contratación de mano de obra infantil en sus áreas y procesos.
* Contar con reglas, guías y criterios para la realización de acciones en favor de los jornaleros y sus familias.
* Demostrar el cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos, convenios nacionales e internacionales, estándares de calidad y de responsabilidad social vigentes

De 2010 a 2017 se han otorgado 490 distintivos en 23 entidades federativas con un impacto en más de 265 mil personas y sus familias.

* *Acciones de la Conferencia Nacional para Secretarios del Trabajo de las entidades federativas (CONASETRA)*. Como parte de las acciones de coordinación al interior de los Estados de la República, en el marco de la 1ª Sesión Ordinaria de la CONASETRA celebrada del 21 al 23 de febrero de 2018, se abordó como eje central la problemática de los jornaleros de trabajo, para lo cual se acordó:
* Gestionar, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Federal, el apoyo de las Procuradurías de Justicia y la Procuraduría General de la República, para proteger a los Jornaleros Agrícolas en el marco de sus competencias y fomentar la correcta aplicación de la ley en los estados.
* Impulsar acciones específicas para identificar e inhibir el trabajo de los “enganchadores”, que perjudican a los Jornaleros Agrícolas, promover la regulación de la figura, así como determinar sanciones administrativas y penales para erradicar estas prácticas.
* Generar con la STPS mecanismos de coordinación interinstitucional, con la finalidad de que, en el marco de su competencia, se lleven a cabo inspecciones conjuntas a campos agrícolas, con la participación de autoridades locales y federales, a efecto de atender de manera integral, los derechos humanos laborales de los Jornaleros Agrícolas.
* Integrar, en coordinación con otras instancias federales y locales, un padrón de Jornaleros Agrícolas para que los distintos órdenes de gobierno, implementen acciones y programas conjuntos que beneficien a los Jornaleros Agrícolas.
* Integrar un Grupo de Trabajo para mejorar jurídicamente el procedimiento de inspecciones, con la finalidad de que las impugnaciones que se interpongan en contra de ellas, se declaren improcedentes, como resultado de la solidez en su determinación, en beneficio de los derechos de los trabajadores agrícolas.
* *Protocolo de Inspección en materia de Seguridad e Higiene, Capacitación y Adiestramiento para Centros de Trabajo con Actividades Agrícolas*. La STPS, a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, implementa a nivel nacional desde 2013, este Protocolo, cuyo objetivo es vigilar la normatividad aplicable bajo el principio de trabajo digno o decente, protegiendo de manera integral los derechos humanos laborales de los trabajadores agrícolas y sus familias.

Mediante este Protocolo se verifican dentro de las Condiciones Generales de Trabajo, aspectos relevantes como la formalización del empleo, mediante el cual se verifica la inscripción de los trabajadores al seguro social, y que el salario que perciben sea acorde con las horas y el tipo de labor desempeñada. Asimismo, se verifica el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de seguridad, de salud, de organización y fundamentalmente las normas específicas NOM-003-STPS-1999, NOM-007-STPS-2000, que refieren uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes; y actividades agrícolas en instalaciones, maquinaria y equipo, herramientas; respectivamente. Dentro de los aspectos primordiales vigilados en el protocolo se encuentra:

* Trabajo de mujeres en estado de gestación y lactancia.
* Verificar la inexistencia de trabajo de menores en estos centros de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la LFT que expresamente lo prohíbe.
* Equipo de protección personal.
* Prevención, protección y combate contra incendios.
* Servicios preventivos de medicina del trabajo.
* Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas en las actividades agrícolas.
* Capacitación.

En el marco de este Protocolo, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, con apoyo de las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo, ha realizado de diciembre de 2012 a 30 de junio de 2017, 1,227 inspecciones a nivel nacional en las que se dictaron 33,851 medidas técnicas.

* *Operativo en materia de formalización del empleo*. En el año 2017 implementó un operativo en materia de formalización del empleo, realizándose 48 visitas de inspección en coordinación con servidores públicos de la STPS y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de defensa de los derechos en materia de trabajo y de seguridad social.
* *Otras acciones de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo*. Elaboración y difusión de material de apoyo (díptico, tríptico, carteles, infografías) referente a los protocolos en materia de inspección como es el caso de “Condiciones laborales a campos agrícolas” el cual es difundido en centros de trabajos con esta actividad económica a nivel nacional.
* *Formación de Gestores Comunitarios en Derechos Humanos, Laborales y Agrarios con Perspectiva de Género (Formación de Gestores Comunitarios)*.

En 2010, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores, puso en operación la acción institucional Formación de Gestores Comunitarios.

EI propósito de esta acción consiste en promover y dar a conocer los derechos humanos, laborales y agrarios de la población jornalera agrícola, para que los trabajadores del campo puedan ejercerlos desde sus comunidades de origen, durante el transite a las entidades de destino y en los centros de trabajo y fortalecer las capacidades de defensoría social de los propios jornaleros.

Esta acción se realiza en coordinación interinstitucional con la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ·(CDI).

Para formalizar dicha acción, el 11 de septiembre de 2013, las instancias participantes suscribieron un Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018.

La acción consiste en el desarrollo de talleres presenciales para difundir y sensibilizar a las personas en la gestión y pleno ejercicio de sus derechos. Los talleres se llevan a cabo en comunidades de origen con grupos de 30 personas cada uno.

De 2010 a diciembre de 2017, se han realizado 997 talleres en 24 entidades federativas (Baja California, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) beneficiando a un total de 38,613; de las cuales 22,286 (57.7%) son mujeres y 16,327 (42.3%) son hombres.

* *Impulso al trabajo decente de los jóvenes indígenas universitarios.*

En el año 2012, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores, puso en operación la acción "Impulso al trabajo decente de los jóvenes indígenas universitarios" para fortalecer la empleabilidad de las y los estudiantes de entidades federativas con importante presencia indígena.

EI objetivo de esta acción es impulsar el desarrollo productivo de los jóvenes indígenas universitarios, mediante la vinculación institucional con instancias que promueven la defensa de los derechos laborales, la educación, la capacitación para el trabajo y el apoyo al financiamiento de proyectos productivos, a fin de lograr su articulación al desarrollo del país en mejores condiciones, y potenciando su capacidad creativa.

Asimismo, se desarrollan jornadas interinstitucionales de fortalecimiento a la empleabilidad, con la participación de dependencias e instancias de los' gobiernos federal y estatales, en las que se difunde la oferta institucional; se brinda asesoría a los estudiantes acerca de cómo acceder a programas de apoyo y se apoya en su formación mediante la vinculación con programas de apoyo que ofrecen instancias públicas y privadas.

De 2012 a 2017, se han celebrado 89 jornadas de fortalecimiento en instituciones de educación superior de 16 entidades federativas (Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán. Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán) beneficiando a 9,205 estudiantes universitarios indígenas: 4,702 hombres (51%) y 4,503 (49%) mujeres.

**Parte IV. Formación profesional, artesanía e industrias rurales**

**Artículo 23**

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.

A fin de fortalecer y fomentar las actividades tradicionales de los pueblos indígenas, la CDI, a través del PROIN, apoyó la comercialización de productos y servicios ofertados por la población beneficiaria y buscó estrategias comerciales que contribuyan a la identificación de los nichos de mercado de productos y servicios, así como a la consolidación de los proyectos productivos al enlazarla en cadenas de valor locales y regionales.

En consecuencia, en 2015 se registraron los Sellos Distintivos “Manos Indígenas, Calidad Mexicana” y “Paraísos Indígenas” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

“Manos Indígenas, Calidad Mexicana” es una estrategia para fortalecer la difusión e identificación de los productos elaborados por la población indígena, garantizando al consumidor que los productores realizan acciones para mantener la calidad de los bienes que ofertan, así como la certeza de que han sido elaborados a través de procesos artesanales, con un enfoque de sustentabilidad ambiental y robusteciendo la organización comunitaria.

En 2018, la CDI cuenta con ocho registros de clase ante el IMPI y ha otorgado el permiso de uso del sello distintivo a 320 grupos de trabajo y/o sociedades legalmente constituidas, conformadas por 4,764 beneficiarios, 2334 mujeres y 2,430 hombres, de 26 entidades.

“Paraísos Indígenas” es una marca que agrupa a los sitios turísticos con alto valor natural, cultural e histórico bajo el resguardo de comunidades indígenas, cuyo esquema de organización, basado en usos y costumbres, les ha permitido conservar, transmitir y compartir su herencia y conocimiento ancestral; consideradas también como un espacio de intercambio cultural que permite a los visitantes conocer y valorar la sabiduría de los pueblos originarios. Asimismo, esta marca surge como una estrategia de fortalecimiento de los sitios turísticos consolidados, manejados y administrados por organizaciones y comunidades indígenas, en el rubro de promoción y difusión de forma tal que se genere una marca que los posicione a nivel nacional e internacional, como sitios que trabajan en redes, ofertando productos turísticos diferenciados de alta calidad.

Los Paraísos Indígenas comprenden actividades de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, así como aquellas vinculadas al turismo de salud y bienestar que se desarrollen en aquellas localidades que conforman la población objetivo del programa.

En 2018, la CDI otorgó el permiso para el uso del sello Paraísos Indígenas a 105 sociedades legalmente constituidas, conformadas por 7,547 beneficiarios, 1,885 mujeres y 2,430 hombres, de 26 entidades federativas.

En el marco de las acciones de la Estrategia de Comercialización de la CDI y del posicionamiento de las Marcas “Manos Indígenas, Calidad Mexicana” y “Paraísos Indígenas” se realizan la Expo Pueblos Indígenas, con el objetivo de que los expositores presenten sus artesanías y productos de temporada, con el objetivo de promover su desarrollo económico.

Además de la venta, la Expo se acompaña de eventos artísticos, culturales, degustaciones, conferencias, muestras de video indígenas, danzas y cápsulas radiofónicas.

Hasta el momento, se han realizado 7 ediciones de la Expo, en las que se han incrementado gradualmente el número de visitantes, expositores y familias beneficiadas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha de realización | Visitantes | Expositores | Familias beneficiadas (Estimación aproximada) |
| 1ª Expo | 15 – 18 octubre, 2015 | 18,000 | 153 | 918 |
| 2ª Expo | 13 – 16 noviembre, 2015 | 26,000 | 157 | 942 |
| 3ª Expo | 16 – 19 junio, 2016 | 40,000 | 181 | 1,086 |
| 4ª Expo | 18 – 21 noviembre, 2016 | 65,000 | 226 | 1,356 |
| 5ª Expo | 4 – 7 mayo, 2017 | 68,000 | 257 | 1,542 |
| 6ª Expo | 16 – 19 noviembre, 2017 | 70,800 | 273 | 1,638 |
| 7ª Expo | 10 – 13 mayo, 2018 | 73,630 | 309 | 1,554 |

Fuente: Información proporcionada por la CDI.

**Parte V. Seguridad social y salud**

**Artículo 24**

Sírvase indicar en qué medida los regímenes de seguridad social amparan a los pueblos interesados, tanto a los trabajadores por cuenta ajena como al resto de sus miembros, y tenga a bien indicar qué medidas se han tomado en cuenta para ampliar dicha cobertura en caso necesario.

De acuerdo con recomendaciones de organismos internacionales con los que México ha suscrito convenios y con el Artículo 2° de nuestra Constitución Política, que establece que “*La conciencia de su identidad indígena deberá ser el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”,* para estimar a la población indígena que nos ofrece el Censo de Población y Vivienda 2010 se tiene la variable: *Población en hogares censales indígenas*, que toma en cuenta al *total de personas que forman hogares censales donde el jefe del hogar o su cónyuge hablan alguna lengua indígena*. Tomando en cuenta este criterio, con las proyecciones de población de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), y aplicando el porcentaje de población en hogares censales indígenas al total de población afiliada en cada municipio, se obtienen los siguientes resultados:

El estimado de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que vive en hogares indígenas representó, al cierre de noviembre de 2013, el 66.3% de la población total en hogares indígenas estimada para 2013 y el 13.7% del total de beneficiarios del Sistema.

Para el cierre de 2014, el número de beneficiarios del SPSS que vive en hogares indígenas representó, el 67.75% de la población total estimada en hogares indígenas y el 13.60% del total de beneficiarios del Sistema.

Mientras que al cierre de noviembre de 2015, el estimado de beneficiarios del SPSS que vive en hogares indígenas representó el 67.8% de la población total estimada en hogares indígenas para 2015 y el 13.7% del total de beneficiarios del Sistema.

En 2015 para cuantificar a la población indígena la Encuesta Intercensal consideró las variables población de tres años y más que hablaba lengua indígena, y la autoadscripción indígena, mismas que estuvieron presentes en el Censo de Población y Vivienda de 2010; la variable Población en hogares censales indígenas ya no fue considerada, por ello, a partir de 2016 la autoadscripción se convirtió en el criterio que se emplea para estimar a la población indígena afiliada, dando los siguientes resultados:

En 2016, de las 54,923,952 personas afiliadas al Seguro Popular, 13,300,322 corresponden a población indígena, lo que equivale al 24.22 % de la población total afiliada. Del total de la población que se estima indígena (25,694,928), el 51.76% se encuentra afiliada al Seguro Popular.

Durante 2017, de las más de 54 millones de personas afiliadas al Seguro Popular al mes de diciembre, sólo 12,944,583 personas corresponderían a la población indígena, es decir, el equivalente al 24.26% de la población total afiliada. Del total de la población que se estima indígena (26,131,065), el 49.54% se encontraría afiliada al Seguro Popular. En la **Tabla 1.1 (ANEXO 17)**, se puede observar la población indígena afiliada al Seguro Popular estimada de 2013 a 2018.

La inclusión de comunidades indígenas, representa un objetivo prioritario para el SPSS, tal como lo establece el Octavo transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud (LGS), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, que señala que se dará preferencia a la población de los dos primeros deciles de ingreso en las áreas de mayor marginación, zonas rurales e indígenas.

Entre los resultados obtenidos al cierre de diciembre 2013, la afiliación al seguro popular en municipios con más de 40% de población que habla alguna lengua indígena, ascendió a 6,880,091 personas, lo que representa un crecimiento de 382,522 personas y 5.9% respecto al cierre de 2012. Con respecto al cierre a diciembre de 2014, la afiliación en dichos municipios ascendió a 7.0 millones de personas, lo que representa un crecimiento de 180.7 miles de personas con 2.6% respecto al cierre de 2013.

Para el cierre 2015, las personas afiliadas de este sector ascendieron a 7.2 millones de personas, lo que representa un crecimiento de 89,887 personas y 1.3% con respecto al cierre de 2014. Mientras tanto, los resultados obtenidos a diciembre de 2016, la afiliación en municipios con más de 40% de población que habla alguna lengua indígena, descendió a 7.1 millones de personas, lo que representa un decremento de 73,958 personas y 1% con respecto al cierre de 2015.

Entre los resultados obtenidos a diciembre de 2017, la afiliación en municipios con más de 40% de población que habla alguna lengua indígena, ascendió a 7.1 millones de personas, lo que representa un incremento de 113,068 personas y el 1.6%, con respecto al cierre de 2016. Con corte al 30 de abril de 2018, se cuenta con información preliminar sobre el número de afiliados en estos municipios, alcanzando los 5,877,576 de beneficiarios. Toda esta información, se encuentra en la **tabla 1.2** afiliados en municipios con 40% o más de población de habla indígena para el periodo 2013 - abril 2018 **(ANEXO 18).**

Además, en un marco de respeto de los derechos individuales, el SPSS impulsa en sus mecanismos de afiliación la identificación de las lenguas indígenas en que se comunican los beneficiarios a partir de lo que ellos mismos manifiestan de manera voluntaria. Dichos esfuerzos permiten presentar algunos resultados bajo un enfoque intercultural, resultando de interés observar la presencia de algunas lenguas a lo largo de todo el territorio nacional.

De las 78 variantes de 30 lenguas indígenas que incluye el catálogo del INEGI utilizado en el Censo de Población y Vivienda 2010, el Náhuatl, Maya, Tzeltal (Tseltal), Mixteco, Tzotzil (Tsotsil), Zapoteco, Chol (Ch’ol) y Mazateco, resultaron ser las lenguas indígenas más representativas al ser mencionadas por el 73.1% de los beneficiarios afiliados que declararon hablar alguna lengua indígena, esto durante 2013. La cifra ha descendido, cerrando de manera preliminar con el corte de abril de 2018, al alcanzar el 71% de beneficiarios que declararon hablar alguna lengua indígena dentro de estas 8 lenguas indígenas representativas. Esto se puede observar en la Tabla 1.3 Beneficiarios por lengua indígena **(ANEXO 19).**

El SPSS cuenta con el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), el cual es una de las carteras de servicios en la que se describen los servicios de salud cubiertos, los cuales se otorgan fundamentalmente en los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención médica.

El CAUSES contempla 294 intervenciones agrupadas por conglomerados, en cada intervención están contempladas las enfermedades de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición (CIE-10), así como aquellos procedimientos médicos relacionados contenidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades Novena Revisión Modificación Clínica (CIE-9MC).

El incremento de las intervenciones del CAUSES, se ha realizado de manera progresiva desde el año 2004, pasando de 90 hasta llegar a 266 intervenciones en el año 2009. En el año 2010, como compromiso de México con la OMS para disminuir la mortalidad Materna Infantil, se incrementaron 6 intervenciones para la atención de la emergencia obstétrica.

Asimismo, se reforzaron las intervenciones de salud mental, con lo cual el CAUSES se incrementó en ese año a 275 intervenciones, permaneciendo en 2011 sin modificaciones. Para el año 2012, se incrementan 9 intervenciones llegando hasta 284 y que incluyen: nuevos esquemas de vacunación, acciones dirigidas a la prevención de trastornos de la alimentación y fortalecimiento de la atención de personas mayores, diabetes y salud del hombre y la mujer en edad adulta.

En algunos casos se unificaron dos o más intervenciones relacionadas, con la finalidad de mejorar su administración. Para 2013, se incorporó el diagnóstico y tratamiento de cataratas como una nueva intervención del CAUSES, alcanzando las 285 intervenciones de salud y; para 2016, con base en los trabajos de actualización se incorporan dos intervenciones más: “Estabilización en Urgencias” y “Manejo ambulatorio de cuidados paliativos y dolor crónico”; cubriendo así 287 intervenciones en 2017; para el año 2018 se incluyen 11 intervenciones y se realiza la unificación de 8 a 4 intervenciones cubiertas en 2017, obteniendo 294 intervenciones en total.

Paralelamente, el número de medicamentos y otros insumos asociados al CAUSES, ha sido incrementado progresivamente, de 142 en 2004 a 634 en 2014. En el año 2015, se agregaron 8 nuevas claves de medicamentos llegando a 642. En 2016, se incluyeron 8 claves y se excluyeron 3, sumando 647 claves; destacando que con estas nuevas incorporaciones, se cubre al 100% la escala analgésica de la OMS.

En el año 2017, se incluyeron 12 claves de medicamentos y 1 insumo, sumando 623 claves de medicamentos y 37 insumos en total, cubriendo el 100% la escalera analgésica de la OMS. En 2018, se incluyeron 21 nuevas claves de medicamentos y se eliminaron 13 claves que ya no se comercializan, alcanzando un total de 633 claves y se mantienen 37 insumos.

Por otro parte, la Ley General de Salud establece en el artículo 77 Bis 29, que “Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del SPSS que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud”.

Con este propósito, se creó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), constituido con el 8% de los recursos totales destinados a la Cuota Social y de las Aportaciones Solidarias (Federal y Estatal), que es administrado y operado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS).

Hasta el año 2010, el FPGC financiaba la atención médica de 49 intervenciones, clasificadas en los siguientes ocho grupos de enfermedades: cáncer Cérvico uterino, VIH/SIDA, cuidados intensivos neonatales, cataratas, cáncer de niños y adolescentes, trasplantes de médula ósea, cáncer de mama y trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos.

En enero de 2011, se incluyeron siete intervenciones más, cuyo objetivo era incrementar la cobertura de algunas de las patologías ya cubiertas y otras nuevas para grupos de edad mayores a 18 años, para llegar a cubrir 56 intervenciones, las cuales fueron: trasplante de médula ósea, cáncer de testículo y linfoma No Hodgkin, enfermedades Lisosomales y hemofilia para menores de 10 años, infarto agudo al miocardio para menores de 60 años y trasplante de córnea. En octubre de 2011 se incluyó cáncer de próstata y en 2012 el trasplante de riñón en menores de 18 años, hepatitis C, tumor maligno de ovario germinal y cáncer colono-rectal; con ello, al cierre del 2012 se contaba con un total de 61 intervenciones cubiertas por dicho Fondo.

El 17 de abril de 2013, el Consejo de Salubridad General, a través de la Comisión para definir tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, acordó contemplar en otra clasificación la enfermedad cataratas, perteneciente a la categoría V. “Rehabilitación a largo Plazo”, del listado de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos. Derivado de esta determinación, el 22 de abril de 2013, el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, en su Segunda Sesión Extraordinaria, autorizó la modificación al Catálogo de Intervenciones cubiertas por el FPGC, para cambiar de fuente de financiamiento el tratamiento quirúrgico para la extirpación de catarata congénita, actualizando así el listado a 59 intervenciones cubiertas por dicho Fondo. Se destaca que la catarata congénita se financia con recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI y la catarata en adultos, con recursos del CAUSES.

El 14 de septiembre de 2015, el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud autorizó la inclusión de la intervención médica Síndrome de Turner y para el 13 de mayo de 2016 la inclusión de la intervención Tumor Maligno de Ovario – Epitelial. Con ello, a diciembre de 2016 el FPGC cubría 61 intervenciones ordenadas en nueve grupos de enfermedades.

En 2018 se incluyen cuatro nuevas intervenciones a la cobertura del FPGC: Cáncer de Esófago, Trasplante de Hígado, Trasplante de Pulmón y Trasplante de Corazón, sumando en total 65 intervenciones.

Asimismo, con el Programa Seguro Médico Siglo XXI se brinda protección a niñas y niños menores de cinco años de edad afiliados al SPSS, contra todas las enfermedades de este grupo de edad, complementarias a las cubiertas por el CAUSES y por el FPGC, permitiendo asegurar condiciones óptimas de desarrollo para la niñez mexicana, brindando un esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplia.

El Componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social, lleva a cabo acciones de promoción de la salud para la prevención de enfermedades, así como el impulso para el acceso a los servicios, mediante el otorgamiento gratuito del Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES; la promoción de una mejor nutrición de la población beneficiaria y la entrega de suplementos alimenticios a niñas y niños de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas y en período de lactancia; asimismo, fomenta el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias mediante la comunicación educativa.

**Artículo 25**

Sírvase indicar, en particular, cuántos servicios de salud existen en las regiones habitadas por esos pueblos, y de su naturaleza, número de personal médico, auxiliar y de enfermería, y cómo se encuentra distribuido este en las regiones donde dispensa sus servicios. Sírvase también facilitar una estimación de cuántos pueblos indígenas o tribales se benefician de tales servicios. Se ruega dar precisiones sobre las medidas tomadas con arreglo a los párrafos 2, 3 y 4.

De acuerdo con la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud, publicada en el primer trimestre de 2016, la población indígena representa el 29.5% de los usuarios de los servicios de primer nivel de atención , suponen el 21.8% en el segundo nivel y 15.0% en el tercer nivel. Este patrón no se repite en todas las entidades federativas, pues se incrementó en las que tienen más usuarios indígenas.

Como parte de las acciones que se realizan para otorgar servicios de calidad a los beneficiarios del SPSS, el proceso de acreditación incluye la evaluación de servicios de atención médica especializada que otorgan alguna de las intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos o del Seguro Médico Siglo XXI. A la fecha, hay 1,133 establecimientos para la atención médica acreditados en las 32 entidades federativas.

Lo anterior ha contribuido a la erradicación de la brecha de discriminación en razón de pertenencia indígena, al atender el rezago en el acceso a los servicios especializados de salud, para lo cual en el periodo de 2012-2016 se proporcionaron 21,773 apoyos económicos, de asesoría y gestión para el acceso y atención en los servicios médicos especializados del sector salud a 13,277 pacientes indígenas provenientes en su mayoría, de los municipios de alta y muy alta marginación del país.

A través de convenios interinstitucionales con la CDI se desarrollan proyectos transversales cuyo propósito es construir Unidades Médicas Rurales, adquirir y equipar Unidades Médicas Móviles destinadas a municipios y localidades indígenas; en el ámbito educativo, se ha apoyado con acciones de infraestructura y equipamiento de Universidades Interculturales; y en el tema de vivienda, se construyen viviendas en localidades indígenas de alta y muy alta marginación.

A fin de brindar una atención de salud de calidad a las comunidades indígenas, se incluyeron líneas de acción en el Programa Sectorial de Salud para difundir y fortalecer las acciones de sensibilización intercultural respetando las prácticas terapéuticas de la medicina tradicional.

Durante 2015-2016, las autoridades estatales de salud designaron a los “enlaces de interculturalidad” de 17 entidades federativas, quienes realizaron actividades de promoción e implementación, la capacitación y sensibilización intercultural a 10,630 personas, entre ellas, promotores de salud, psicólogos, médicos, enfermeras, personal administrativo y de trabajo social de hospitales y unidades de salud. Asimismo, se establecieron criterios de evaluación relativos al tema de interculturalidad en las cédulas de acreditación vigentes, que coadyuvan en el cumplimiento de lineamientos de interculturalidad y profesionales de salud capacitados en la materia.

Desde la creación del Seguro Popular, la población indígena fue considerada como un sector prioritario, formulando estrategias para su atención. A febrero de 2016, la afiliación al Seguro Popular en municipios con más de 40% de población que habla alguna lengua indígena ascendió a 7.1 millones de personas, de los cuales, 3’737,738 son mujeres y 635,021 son niñas y niños.

Desde 2009, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementa el *“Programa de Promoción y Fomento de la Salud para Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales”*, través de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, el cual se interrelaciona con el PND y el Programa Nacional de Derechos Humanos, los cuales promueven el respeto y la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades rurales.

Es un programa que trabaja con población abierta no derechohabiente, a través de los Centros de Extensión de Conocimientos, que son espacios en los que se imparten programas de promoción de la salud, educación higiénica y mejoramiento de la calidad de vida, enfocados a la población de pueblos indígenas y comunidades rurales.

Actualmente, el programa tiene cobertura en 26 Delegaciones del IMSS[[19]](#footnote-19), las cuales tienen mayor presencia indígena y rural.

En 2014, IMSS-PROSPERA firmó convenios de colaboración con la CDI, adquiriendo 139 Unidades Médicas Móviles (UMM), destinadas a llevar servicios de salud a comunidades indígenas. De esta manera, se amplió el número de población atendida por las UMM a 508,209 personas, de las que 443,825 (87%) corresponde a población indígena de 20 etnias diferentes distribuidas en 1,286 localidades de 294 municipios en 17 Delegaciones.

En 2017, se registraron poco más de 35,000 inscripciones a talleres y cerca de 89,000 asistencias a eventos, campañas y pláticas relacionadas con ferias de salud, exhibiciones, muestras gastronómicas, así como conmemoraciones de diversos temas como la Eliminación de la Discriminación Racial y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, mediante los cuales se abordan conceptos como inclusión y equidad.

A mayo de 2018, se tiene registro de alrededor de 18,000 inscritos a talleres y casi 20,000 asistencias a eventos. En este año, se incorporó al Programa de Promoción y Fomento de la Salud para Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales, la plática de Sensibilización para Personas con Discapacidad en Pueblos Indígenas y Rurales.

Actualmente se cuenta con 38 Unidades Móviles Médico Dentales, 7 quirúrgicas y 7 diagnósticas, las cuales se ubican en 14 delegaciones: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz Norte, Veracruz Sur y Zacatecas.

Las Unidades Médicas Móviles Dentales están conformadas por las áreas de Consulta Médica y Consulta Dental. Cuentan con equipamiento suficiente para resolver patologías de baja complejidad. Los bienes de consumo son dotados a través de la Unidad de Medicina Familiar de Apoyo que consisten básicamente en medicamentos, material de curación e insumos para programas médico preventivos. La operación de las unidades se realiza a través de itinerarios, que son elaborados por la Unidades de Medicina Familiar de Apoyo.

La Unidad Médica Móvil Quirúrgica cuenta con equipamiento suficiente para resolver patologías quirúrgicas de baja complejidad. Los bienes de consumo son dotados a través del hospital de apoyo los cuales consisten, básicamente en medicamentos y material de curación.

La Unidad Médica Móvil de Diagnóstico cuenta con equipamiento para realizar estudios de laboratorio clínico básicos, radiología, ultrasonografía y mastografía. Los bienes de consumo son dotados a través del hospital de apoyo, los cuales consisten básicamente en reactivos e insumos para laboratório clínico y artículos para rayos X.

**Distribución de Unidades Médicas Móviles por tipo y entidad federativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Delegación** | **Distribución de Unidades Médicas Móviles** | | |
| **Médicas** | **Quirúrgicas** | **Diagnósticas** |
| Baja California | 4 | 1 | 1 |
| Baja California Sur | 3 | 1 | 1 |
| Chiapas | 4 | 1 | 1 |
| Chihuahua | 3 | 1 | 1 |
| Guanajuato | 1 | -- | -- |
| Michoacán | 1 | -- | -- |
| Nayarit | 1 | -- | -- |
| Oaxaca | 2 | -- | -- |
| San Luis Potosí | 1 | -- | -- |
| Sinaloa | 7 | 1 | 1 |
| Sonora | 6 | 1 | 1 |
| Veracruz Norte | 1 | -- | -- |
| Veracruz Sur | 1 | 1 | 1 |
| Zacatecas | 2 | -- | -- |
| Total | 38 | 7 | 7 |

Fuente: Información proporcionada por el IMSS

Las UMM cuentan con un recurso humano total de 260 plazas distribuidas de la siguiente manera:

El personal que labora en las Unidades Médicas Móviles Dentales es:

* + 1 Médico General.
  + 1 Estomatólogo.
  + 2 Auxiliares de Enfermería General.
  + 1 Chofer / Promotor de Salud Comunitaria.

Total de Personal: 190

El personal que labora en las Unidades Médicas Móviles Quirúrgicas es:

* + 1 Cirujano general.
  + 1 Anestesiólogo.
  + 1 Médico general.
  + 1 Enfermera especialista quirúrgica.
  + 2 Auxiliares de enfermería general.
  + 1 Auxiliar de servicios de intendencia.

Total de Personal: 49

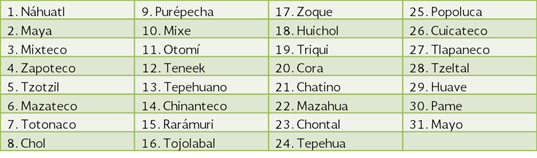
El personal que labora en las Unidades Médicas Móviles Diagnósticas es:

* + 1 Médico no familiar. Radiólogo.
  + 1 Laboratorista.
  + 1 Chofer / Promotor de Salud Comunitaria.

Total de Personal: 21

Con los recursos humanos y materiales señalados se otorga atención médica a una población aproximada de 530,802 trabajadores eventuales del campo, sin contar a sus beneficiarios, con lo cual se incrementa aún más la derechohabiencia atendida en aquellas Delegaciones que cuentan con estas Unidades.

Por su parte, el Programa IMSS-PROSPERA tiene presencia en 77% de los municipios de alta y muy alta marginación, en los cuales se atiende a un total de 4,000,000 de indígenas. El programa atiende a 31 pueblos indígenas, con igual cantidad de idiomas hablados, mismos que se detallan a continuación:



Con el objetivo de ampliar, modernizar y adecuar la infraestructura hospitalaria y promover la utilización de unidades médicas móviles, y mejorar las condiciones de salud y nutrición de la población indígena que habita en los lugares muy apartados donde no hay servicios de salud, la CDI ha signado convenios con IMSS-PROSPERA, para la construcción y equipamiento de Unidades Médicas Rurales (UMR), UMR Básicas, UMR con atención obstétrica (CARO) y Unidades Médicas Móviles.

**Parte VI Educación y Medios de Comunicación**

**México 2018**

**Solicitud Directa 2013**

Parte VI. Educación. El Gobierno proporciona información detallada sobre el marco normativo y programático vigente en materia de educación bilingüe intercultural. El Gobierno destaca que se han ubicado 25 líneas de acción en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018 relevantes para el accionar institucional. La Comisión toma nota de la estrategia 3.2.1 destinada a robustecer la educación indígena y a impulsar políticas públicas para reforzar la enseñanza en lenguas indígenas en todos los niveles educativos. El Gobierno atiende a más de 1,200,000 niñas y niños indígenas, en 24 entidades federativas. En 2012, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) proporcionó servicios educativos a 53,550 personas en 15 entidades federativas. La población indígena de 15 años y más en condición de alfabetización ascendió a 3,867,870 personas, equivalente al 72,1 por ciento de dicha población. Las estadísticas proporcionadas por el Gobierno evidencian un incremento constante de la matrícula de educación indígena, entre los años 2000 a 2011, tanto a nivel preescolar como de primaria; entre 2010 y 2011 se estimaba que 389,137 niños eran atendidos en el nivel preescolar y que 844,081 lo eran a nivel de primaria. La Comisión toma nota del proyecto de Becas a Estudiantes Indígenas de Nivel Superior (BEINS) que, al mes de junio 2013, había beneficiado a 2,600 estudiantes. **La Comisión invita al Gobierno a que continúe presentando informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas y la manera en que los pueblos indígenas han participado en la formulación y ejecución de los proyectos educativos.**

La Secretaría de Educación Pública (SEP) elabora contenidos y materiales que visibilizan a la población indígena, migrante y afrodescendiente, incluyendo como ejes transversales la no discriminación; atención a la diversidad social, étnica, cultural, lingüística y de capacidades; los derechos humanos, lingüísticos, culturales; de las niñas, niños y adolescentes; de migrantes y pueblos originarios, con el fin de sensibilizar a la población escolar y a la comunidad educativa en general.

El rezago educativo de la población indígena y hablante de lengua indígena se redujo de 2010 a 2015, tanto en educación básica como en educación media superior. Sin embargo, aún existen brechas con respecto al total de la población, en especial en los grupos de edad más avanzada.

La tasa de asistencia escolar de la población indígena es similar a la del conjunto de la población hasta la edad de 11 años. En los grupos de edad de 12 a 14 y, en especial, de 15 a 17 años, edades para cursar la secundaria y la educación media superior, la brecha se amplía.

A pesar de los avances obtenidos en acceso a la educación y en algunos aspectos del logro académico, aún existen inequidades en la atención educativa de la población indígena. Para superar esa situación se realizan acciones entre las que destacan el impulso al programa editorial que atiende la diversidad cultural y lingüística, dirigido a las escuelas indígenas y migrantes.

En el ciclo escolar 2014-2015 se distribuyeron 542 títulos monolingües, bilingües y plurilingües, con un tiraje de 8.6 millones de ejemplares, superando los casi 6,000,000 del ciclo 2013-2014. Los materiales beneficiaron a poco más de 1.2 millones de estudiantes indígenas en todo el país. El programa editorial atiende a 51 lenguas indígenas. Para el ciclo escolar 2015-2016 se distribuyeron 5.1 millones de ejemplares, beneficiando a 1.2 millones de estudiantes.

En el marco de las tecnologías de la información, los estudiantes de 5º y 6º grado de las entidades participantes, cuentan con los equipos del Programa Micompu.mx o @prendemx, los cuales incluyen inicialmente contenidos multiculturales y plurilingües que aportan a la comprensión de la diversidad lingüística y cultural del conjunto del sistema educativo nacional. La meta es desarrollar material digital plurilingüe, multicultural y multigrado que disminuya la brecha digital entre las lenguas indígenas del país y el español.

También se desarrolló el programa Alas y Raíces en el que se consultó aproximadamente a 2,000 niños de las 32 entidades federativas, sobre elementos de su identidad asociados a su patrimonio cultural. Este ejercicio es la base de la exposición Baúles con Alas y Raíces. Tesoros de los Niños y Niñas de México, 32 baúles, uno por cada entidad federativa, diseñados por niños e intervenidos por artistas y artesanos locales para representar su patrimonio cultural.

Por otro lado, si bien la CDI en su ámbito de competencia no es la instancia para asegurar el acceso de niños, niñas y jóvenes indígenas a la educación, a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, la CDI coadyuva a la permanencia de niñas, niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, brindando hospedaje y alimentación, promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y fomenta actividades de recreación y esparcimiento, esto a través de las siguientes modalidades del PAEI:

1. Casa del Niño Indígena. Brinda alimentación, hospedaje y actividades complementarias a la población beneficiaria, atendiendo preferentemente aquella que proviene de localidades que no cuentan con servicios de educación.
2. Comedor del Niño Indígena. Brinda alimentación y actividades complementarias a la población beneficiaria que vive en la localidad donde se ubica el centro educativo al que asisten.
3. Casa o Comedor Comunitario del Niño Indígena. El Programa otorga apoyo a través de instancias estatales, municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que operan espacios comunitarios para brindar servicio de alimentación y material de higiene a estudiantes indígenas.
4. Becas de Educación Superior y Apoyo a la Titulación, para estudiantes indígenas que cursen sus estudios de nivel superior

En la presente administración, se ha logrado que 1,256 niñas y niños concluyan su educación preescolar, 27,799 la primaria, 25,250 la secundaria y 12,131 el bachillerato, acumulando un total de 66,436 egresados de los diferentes niveles educativos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclo Escolar | Beneficiarios que concluyeron sus estudios | | | | |
| Preescolar | Primaria | Secundaria | Bachillerato | Total |
| 2013-2014 | 305 | 7,109 | 6,045 | 2,707 | 16,166 |
| 2014-2015 | 271 | 6,872 | 6,296 | 2,747 | 16,186 |
| 2015-2016 | 363 | 6,761 | 6,293 | 3,035 | 16,452 |
| 2016-2017 | 317 | 7,057 | 6,616 | 3,642 | 17,632 |
| Total | 1,256 | 27,799 | 25,250 | 12,131 | 66,436 |

Fuente: Información proporcionada por la CDI

El Programa durante la presente administración ha incrementado de manera sustancial el número de apoyos a través de una beca económica de estudios, tal como se muestra a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR** | **APOYOS A TITULACIÓN.** |
| Modalidad “Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación”  Periodo 2013-2018  Beneficiarios de una beca por ejercicio fiscal y por género.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **EJERCICIO FISCAL** | **BECAS AUTORIZADAS** | **HOMBRES** | **MUJERES** | **TOTAL** | | 2013 | 1,001 | 550 | 678 | **1,228** | | 2014 | 1,725 | 983 | 1,043 | **2,026** | | 2015 | 1,725 | 1,019 | 1,116 | **2,135** | | 2016 | 2,040 | 1,213 | 1,367 | **2,580** | | 2017 | 4,000 | 2,122 | 2,667 | **4,789** | | 2018\* | 4,000 | 1,681 | 2,274 | **3,955** | | **TOTALES** | **14,491** | **7,568** | **9,145** | **16,713** | | Notas.- Las becas son constantes, en tanto que los beneficiarios son variables esto obedece a que con una beca, se puede beneficiar a 1 o más estudiantes durante el mismo ejercicio fiscal.  Cifras con corte al primer trimestre 2018\* | | | | | | Periodo 2013-2018  Beneficiarios de apoyo a titulación por ejercicio fiscal y por género.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **EJERCICIO FISCAL** | **HOMBRES** | **MUJERES** | **TOTAL** | | 2013 | 12 | 25 | 37 | | 2014 | 23 | 26 | 49 | | 2015 | 16 | 16 | 32 | | 2016 | 27 | 26 | 53 | | 2017 | 54 | 72 | 126 | | 2018\* | 22 | 37 | 59 | | **TOTALES** | **154** | **202** | **356** |   Corte a mayo 2018\* |

Fuente: Información proporcionada por la CDI

Las becas de Educación Superior, otorgadas a la población estudiantil indígena, han sido fundamentales para lograr que cada vez más jóvenes puedan optar por mejorar su nivel educativo, formando profesionistas en distintas ramas y especialidades, provenientes de 50 pueblos indígenas, de más de 29 Estados de la República Mexicana. El lograr concluir con sus estudios profesionales, permite a los jóvenes incorporarse como agentes de cambio en sus comunidades de origen, siendo ellos los principales promotores e incentivadores de que la población indígena cada día aspire a acceder y concluir con sus estudios profesionales.

Como una fortaleza del Programa se incorpora la modalidad de “Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación”, en este rubro, se busca que los estudiantes logren no sólo concluir de manera satisfactoria una carrera universitaria, sino que además tengan la oportunidad de titularse, esto se realiza a través del otorgamiento de un apoyo económico por única ocasión que les permite cubrir los costos que implican el obtener el título universitario correspondiente. Este apoyo asciende a la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100) y cubre los gastos administrativos derivados para la expedición del título.

La CDI ha incrementado de manera sustancial el apoyo a través de las becas, tal como se puede observar en el cuadro “Becas de Educación Superior” que se incluyó en el apartado del artículo 26 de este informe. Es decir, ante la demanda de apoyos por parte de la población indígena y el incremento del interés de jóvenes indígenas por acceder a las universidades del país, muestra la coherencia del Estado mexicano para atender esta demanda. El camino sin duda aún es largo, sin embargo, la CDI no es ajena a las necesidades de la población indígena, y el coadyuvar a que la población indígena logre sus objetivos para permanecer en la educación, es una tarea que el Gobierno mexicano, a través de la CDI y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) continuará impulsando, a fin de lograr que cada día, más jóvenes logren sus sueños universitarios.

A través del PAEI se ha invertido un monto por el orden de los 5,277 millones de pesos, con cifras al corte del primer trimestre de 2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **EJERCICIO FISCAL** | **MONTO** |
| **2013** | 928,995,014.80 |
| **2014** | 949,288,351.00 |
| **2015** | 1,076,941,740.24 |
| **2016** | 982,453,789.16 |
| **2017** | 970,450,382.44 |
| **2018\*** | 368,938,484.79 |
| **TOTAL** | **5,277,067,762.43** |

\*Cifras al corte del primer trimestre de 2018

Fuente: Información proporcionada por la CDI

Por otra parte, para abatir el abandono escolar, la SEP propuso en el Objetivo 3 del Programa Sectorial de Educación 2012-2018 “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

En lo que se refiere a la educación indígena, el referido Programa Sectorial señala que “Habrá que priorizar los apoyos a las escuelas indígenas y a las ubicadas en localidades dispersas para impulsar la equidad en la educación. Asimismo habrá que asegurar la pertinencia de los apoyos en función de los destinatarios y su contexto”.

De 2012 a 2016, los supuestos pedagógicos en educación indígena se basaron en los Parámetros Curriculares de la Asignatura de Lengua Indígena de Educación Básica, incorporaron en el currículum la asignatura Lengua Indígena, en la que además de los aspectos gramaticales se enseña la lengua como una forma de expresión que remite a concepciones culturales particulares y que permiten apreciar la riqueza de la diversidad.

Cabe mencionar que el resto de las modalidades de educación no contaban con una propuesta dedicada a la educación indígena durante el periodo mencionado. Dentro del Nuevo Modelo Educativo, la asignatura de Lengua se transformó en la asignatura de Lengua Materna. Lengua indígena, que se incorporó al Campo de Formación Académica y Lenguaje y Comunicación, a la vez que se creó la asignatura de Segunda Lengua Materna.

La implementación del nuevo modelo Educativo se encuentra organizada por etapas, tal como lo estipula el documento *Ruta para la Implementación del Nuevo Modelo Educativo (***ANEXO 20***)*. En el documento en cuestión se precisa que durante el ciclo escolar 2017-2018 se llevó a cabo una prueba piloto de los planes y programas de estudios en 51 escuelas indígenas de preescolar y 27 escuelas primarias indígenas. Los resultados obtenidos se darán a conocer en el ciclo escolar 2018-2019.

Junto con la prueba piloto mencionada, también se aplicó otra prueba para el rubro de Autonomía Curricular, en la cual participaron escuelas de educación indígena de las siguientes entidades:

Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Nuevo León, con un total de 12,378 alumnos, de los cuales 8,311 son de preescolar y 4,067 de primaria (**ANEXO 21**). Además de la recopilación de estadísticas, la Dirección General de Desarrollo Curricular dio a conocer vídeos y demás material multimedia en que se recopilan las experiencias de los docentes que participaron en la prueba piloto referida y que puede ser consultada en el vínculo <http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/autonomia/son/index-autonomia-son.html>.

También se llevaron a cabo las acciones de “Desarrollar o actualizar materiales para la atención a la diversidad lingüística y cultural,” así como “Producción y actualización de contenidos para la Asignatura de Lengua materna y literatura Lenguas Originarias para la contextualización y aprendizaje y la pertinencia cultural y lingüística en las escuelas”, indicadas en el referido documento *Ruta de Implementación del Nuevo Modelo Educativo*, entre abril de 2017 a mayo de 2018.

En la parte curricular, las políticas de inclusión del Nuevo Modelo Educativo “Transformar la cultura, la organización y las prácticas educativas de las escuelas regulares para atender la diversidad de necesidades educativas del alumnado, que son resultado de su origen social y cultural y de sus características personales en cuanto a competencias, intereses y motivaciones”.

El nuevo modelo educativo ha planteado estrategias de inclusión y equidad, con el propósito de impartir una educación pertinente a todas las niñas, niños y adolescentes. Muchas de ellas forman parte de programas operativos, otros constituyen acciones transversales con el Programa PROSPERA.

* Intensificar la modalidad educativa intergeneracional.

1) Estrategia de Desarrollo Infantil Temprano y Educación Inicial a través de PROSPERA.

2) Fortalecimiento del Programa de Educación Inicial del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

* Acceso a las oportunidades educativas de los grupos en desventaja.

Consiste en una amplia oferta de servicios educativos a la distancia:

1.- La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM).

2.- Los Telebachilleratos comunitarios.

3.- La Preparatoria en Línea-SEP.

4.- La Preparatoria Abierta.

5.- Las Universidades Interculturales.

Por ejemplo, en cuanto a la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH), es importante referir que atiende la región de la Sierra Otomí-Tepehua que cubre 6 municipios (Agua Blanca, Acaxochitlán, Metepec, Tenango, San Bartolo y Huehuetla).

La matrícula de la UICEH actualmente es de 157 estudiantes (enero-junio, 2018) los cuales cursan 61 materias, impartidas por 10 profesores de tiempo completo, 3 coordinadores de carrera y 8 docentes por asignatura. El programa de estudios contempla una clase de lengua originaria para todos (as) los y las estudiantes durante los primeros 6 semestres de la licenciatura, la cual puede ser otomí en sus variantes, ñuñu y hñshñu, náhuatl de Acoxochitlán y Tepehua.

6.- Los Bachilleratos Interculturales.

7.- Ampliación de las oportunidades educativas.

* Permanencia en el Sistema Educativo y Lucha contra el Abandono.

Incluye el Sistema de alerta temprana de abandono escolar y bajo rendimiento escolar, con el que las autoridades escolares toman medidas compensatorias y de otro tipo, en cuanto los alumnos comienzan a faltar a clases o se rezaguen con el proceso de aprendizaje.

* Terminación de ciclos y transiciones entre niveles educativos.

Las alumnas y los alumnos que viven en condiciones precarias y que terminan el ciclo de educación básica (secundaria) se encuentran en riesgo de no continuar los estudios de educación media superior. Por ello debe realizarse un seguimiento de los docentes que incluya orientación vocacional y psicológica. Tal medida aumenta el trabajo de los docentes, quienes no sólo deben impartir clases y calificar a los alumnos, sino dedicarse a seguir la trayectoria extra-académica del alumno.

* Elevar la calidad de la oferta educativa.

Significa mejorar la infraestructura de los centros escolares. En varias escuelas indígenas, se dedica tiempo comunitario o tequio para remozar las instalaciones. También está disponible el programa presupuestal Escuelas al Cien, que destina recursos para la mejora de la infraestructura. De 2013 a 2015, a través del Programa Escuelas dignas, se atendió a poco más de 16,000 planteles educativos. Destaca la rehabilitación de 7,800 escuelas en localidades indígenas del país y la adecuación de cerca de 5,900 inmuebles para garantizar la movilidad de niños con discapacidad, mediante la adaptación de módulos sanitarios, rampas y a partir de 2016, Escuelas al CIEN da continuidad a la atención de estos planteles.

En el ciclo escolar 2016-2017, cinco escuelas de educación indígena inicial, 1,036 de educación preescolar indígena y 1,132 escuelas de educación primaria indígena fueron beneficiadas con Escuelas al CIEN.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, la tasa de asistencia entre hablantes y no hablantes de lengua indígena 2015 es de 64.4-63.7 entre hablantes de lengua indígena y no hablantes en el Grupo etario de 6 a 11 años; 96.-98.1 en niños, respectivamente, en niños de 12 a 14 años; 56.8 – 74.5 en niños de 15 a 17 años; y de 17.4 – 38.6 en el grupo de estudiantes entre 18 a 22 años. Como puede observarse, la tasa de asistencia entre hablantes de lenguas indígenas disminuye de manera drástica después de la educación básica.[[20]](#footnote-20)

Durante el ciclo escolar 2016-2017 hubo 1,968 centros de educación inicial indígena, 9,838 preescolar y 10,195 primarias. Se atendieron a 45,984 alumnos de educación inicial indígena y 423,344 alumnos de educación primaria indígena. La matrícula de alumnos en las 1,056 escuelas migrantes fue de 2,197 alumnos de inicial, 7,885 de preescolar, 27,585 de primaria y 2,806 de secundaria, con un total de 40,426 niños migrantes. En el caso de secundaria, 423,344 de los estudiantes eran indígenas de un total de 6,669,603 estudiantes.[[21]](#footnote-21)

En comparación, en el ciclo 2014-2015 hubo 2,102 centros de educación indígena, 9,673 de preescolar indígena y 10,133 de educación primaria indígena. Se atendieron a 49,328 alumnos de educación inicial indígena, 411,140 de preescolar indígena, 837,628 de primaria indígena y 47,176 migrantes.[[22]](#footnote-22)

En cuanto al número de docentes en educación indígena, en el ciclo escolar 2016-2017, se contabilizaron 2,377 docentes de educación indígena inicial, 19,031 de preescolar y 37,037 en primaria indígena. En cuanto a las escuelas migrantes, se registraron 2,039 docentes.

Los Estados en los que se imparte educación indígena básica son: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

**Artículo 27**

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales económicas y culturales.

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

En los últimos años ha aumentado el número de niños indígenas que abandonan sus comunidades con sus familias en busca de trabajo agrícola en los Estados del norte de México. Debido al carácter itinerante, precisan de una atención especializada que tome en cuenta la diversidad lingüística y cultural. El Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) proporciona asesoría y recursos materiales para las escuelas indígenas y de migrantes que lo requieran. En el ciclo escolar 2016-2017, el PIEE destinó $275, 296,646.39 a servicios educativos y demás acciones encaminadas a la educación de los indígenas y migrantes.

Con respecto a la participación de los pueblos indígenas en la educación de sus hijas e hijos, entre el 7 de febrero al 16 de junio de 2014, se llevaron a cabo 18 foros regionales y tres reuniones nacionales de consulta, con más de 28,000 participantes y casi 15,000 propuestas y planteamientos que orientaron la transformación del modelo educativo en su conjunto y, como parte de este esfuerzo, en julio de 2016 se dieron a conocer tres documentos para discutir y construir un nuevo paradigma de la Educación Básica y Media Superior en México:

1. La Carta sobre los Fines de la Educación en el Siglo XXI
2. El Modelo Educativo
3. La Nueva Propuesta Curricular.

La Carta expone de manera concisa qué tipo de mexicanas y mexicanos se busca formar: ciudadanos con valores, informados y responsables, que participen en la vida social, económica y política de México. Incluye una síntesis de los logros académicos esperados desde el nivel preescolar hasta concluir la Educación Media Superior. Por su parte, el Modelo Educativo representa un nuevo planteamiento pedagógico y consta de cinco grandes ejes: Escuela al Centro; Formación y Desarrollo Profesional Docente; Inclusión y Equidad; Gobernanza del Sistema Educativo, y Planteamiento Curricular.

Otra forma de participación a la que pueden acceder los miembros de la comunidad indígena es la colaboración de los padres de familia a través de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPSE), en los que se busca la creación de “un espacio clave para impulsar la corresponsabilidad de padres de familia y escuela en el aprendizaje y desarrollo integral de los niños y adolescentes”[[23]](#footnote-23).

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) propuso “Robustecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, como ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, y base de la pertenencia y la calidad de la educación que reciben, contenido en las Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas.

Como parte de la Construcción del Nuevo Modelo Educativo, la SEP, a través de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), trabaja al interior del país con comisiones de maestras y maestros hablantes de lenguas maternas, en la elaboración de los contenidos de 22 programas en lenguas indígenas (libros para el docente y libros para el Alumno de 1º y 2º grado) que renovarán los Libros de Texto Gratuitos de la década de los noventas de la niñez indígena y migrante de educación básica para el ciclo escolar 2018-2019.[[24]](#footnote-24)

En la parte dedicada a la enseñanza, en el Nuevo Modelo Educativo se retomó la noción de las prácticas sociales del lenguaje, mediante las cuales el docente puede destacar los saberes comunitarios, historia local y cosmovisión a partir del empleo del lenguaje; es decir, se pueden producir conocimientos metalingüísticos –en este caso relacionados con la forma de ser comunitaria- a partir del estudio crítico del lenguaje.[[25]](#footnote-25)

El Nuevo Modelo Educativo cuenta con una flexibilidad curricular que permite que los docentes puedan cambiar el 20% de los contenidos para adecuarlos a las necesidades de los educandos. En el caso de la educación indígena, se pueden introducir al plan de estudios temas relacionados con el contexto lingüístico y cultural.

En cuestiones normativas del lenguaje, la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes garantiza a las niñas y niños el derecho de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión, cultura y derecho al acceso a la información en cualquier lengua.

El enfoque intercultural propone modificar las formas de abordar y atender la diversidad en diferentes dimensiones, resaltando las diferencias de las culturas y aprovechándolas en un proceso de complementación de los conocimientos construidos y compartidos con otros sujetos y otras dimensiones de desarrollo (comunidad-región, entidad, nación, mundo). Así, la diferencia debe concebirse como una cualidad que implica comprensión y respeto recíproco entre distintas culturas; así como una relación de intercambio de conocimientos y valores en condiciones de igualdad.

Así, las Universidades Interculturales surgen con el objeto de extender las oportunidades educativas atendiendo a estudiantes de diversos orígenes, lenguas y culturas del país. Son espacios que brindan nuevas perspectivas de desarrollo profesional y científico que conjugarán saberes y conocimientos desde diferentes perspectivas culturales que serán de gran valor para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas y de la sociedad, en general, siendo sus objetivos los siguientes:

* Recuperar, valorar, revitalizar las lenguas, las culturas, los saberes y las experiencias de los pueblos originarios.
* Orientar la formación profesional de los estudiantes hacia experiencias de aprendizaje significativo en su contexto.
* Emprender acciones que ofrezcan un servicio a la comunidad de manera que se establezca un puente de comunicación e interacción que favorezca su desarrollo.

**Artículo 28**

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

El Nuevo Modelo Educativo contempla las asignaturas Lengua Indígena, Lengua Materna y Segunda Lengua, expuestos a partir de una propuesta que contempla fundamentos teóricos y prácticos con enfoques plurilingües, multiculturales y de atención a la diversidad. Además distingue los casos de bilingüismo y plurilingüismo[[26]](#footnote-26) (v.g las escuelas con alumnos migrantes) para proporcionar una atención focalizada. También enfatiza la manera en que debe darse la enseñanza de la asignatura de Segunda Lengua, ya que los alumnos pueden estancarse en el proceso de aprendizaje de esta lengua, cuando el dominio de la misma no es tan amplio.

Como se mencionó con anterioridad, en la actualidad existe un amplio catálogo de libros de texto y de apoyos educativos en lenguas indígenas para alumnos y maestros (**ANEXO 22**). Se han elaborado libros de Marco Curricular de Educación Indígena, Lengua Indígena y Literatura, Profesionalización docente, juegos didácticos, materiales educativos y biblioteca escolar.

Dicho Catálogo se está actualizando para que cumpla con lo exigido por los preceptos pedagógicos y de contenido del Nuevo Modelo Educativo. Por otra parte, los docentes que no cuentan con texto en lengua indígena elaboran libros cartoneros, los cuales permiten a los alumnos contar con material de lectura. Asimismo, los maestros efectúan propuestas curriculares a partir de su experiencia docente. Dicho material permite conocer lo que ocurre en contextos muy específicos y que no están contemplados en las políticas educativas.

La Dirección General de Educación Indígena ha realizado diversas acciones para preservar las lenguas indígenas, entre las que se destacan:

Armonización de las lenguas, con el fin de crear criterios comunes de escritura, gramática y sintaxis, lo cual facilita su enseñanza, en especial en el caso de los Programas Educativos de las Lenguas Náhuatl, Hñähñu, maya y totonakú. Además, se organizaron los Programas de Estudios de las Lenguas Yaqui, Náateri o Cora y Popoluca, los cuales todavía están en etapa de implementación.

Asimismo, la DGEI coordinó los trabajos de 22 comisiones de maestras y maestros hablantes de las lenguas originarias para la elaboración de libros de texto para primer y segundo grado de primaria en la asignatura Lengua Materna Indígena en tojolabal, tsotsil, tzeltal, chool, yaqui, tutunakú, popoluca, cora, hñähñu, náhuatl, me'phaa, ñondaa, mazahua, p’urhépecha, o’dam/au’dam, yokotán, hñöhño, ódami, pima, ralámuli, warijó y maya. Los libros de texto serán entregados a niñas y niños indígenas en el ciclo escolar 2018-2019.

Como material de apoyo, se crearon *Fichas de leer y escribir en lenguas indígenas* con el propósito ser utilizadas en los centros escolares de educación indígena que forman parte del Programa Escuelas de Tiempo Completo.[[27]](#footnote-27)

Debido a que no se pueden producir libros de texto y de apoyo a la enseñanza de lengua indígena para una gran parte de ellas, se puso en marcha la estrategia para la elaboración de libros artesanales o cartoneros en 45 lenguas indígenas, con el fin de promover prácticas de lectura y escritura en dichas lenguas.[[28]](#footnote-28)

Con el propósito de auxiliar a las niñas y niños en el aprendizaje de las lenguas se imprimieron varios juegos didácticos como la *Lotería de la Chinantla*, *la Oca Lingüística* y *Camino al Mictlán*,[[29]](#footnote-29) los cuales permiten que los estudiantes conozcan aspectos relevantes de las lenguas indígenas mediante el juego. Asimismo, se elaboraron juegos que apuestan por la enseñanza de los derechos y la presencia de múltiples identidades culturales, como *Abanico de mis derechos* e *Identimemo*.

Otra manera de preservar las lenguas indígenas son los concursos de *Narraciones de las Niñas y Niños* *Indígenas* *y Migrantes*,que se realizan cada año desde 1999. *Narraciones*… tiene como objetivo la recuperación y difusión de los saberes comunitarios de los pueblos originarios y las experiencias de los migrantes, desde la mirada de las alumnas y los alumnos, que se encuentran cursando el quinto y sexto grados de educación primaria indígena o de los servicios de atención a la niñez migrante del Sistema Educativo Nacional.[[30]](#footnote-30)

Para erradicar el rezago educativo y el abandono escolar de las niñas y los niños, se da seguimiento a las propuestas del Plan para los Pueblos Indígenas de Banco Mundial, mediante el Sistema de Alerta Temprana (SisAT) que permiten identificar y apoyar oportunamente a estudiantes que se encuentran en riesgo de rezago educativo o de abandono escolar y del Programa de Escuelas.[[31]](#footnote-31)

Tambien se han producido varios libros de apoyo, tanto para los docentes del primer ciclo de las lenguas Hñähñu, maya y totonakú, como para las niñas y niños, a partir de materiales didácticos que forman la colección *Semilla de Palabras*.[[32]](#footnote-32)

Por otra parte, se ha subido en el portal de la Dirección General de Educación Indígena[[33]](#footnote-33) diversos materiales relativos a la educación indígena, entre los que figuran un repositorio digital de libros de textos, guías para el maestro, infografías de la situación de la educación indígena desde 2014 a la fecha, así como de convocatorias relacionadas con los temas de inclusión, atención a la diversidad y grupos indígenas.[[34]](#footnote-34)

Además, la DGEI ha participado en numerosas actividades que promueven los derechos indígenas. Por ejemplo, en el año de 2016, participó en la elaboración y traducción de la Convocatoria al VI Concurso Nacional de fotografía, que tenía como tema el racismo, a 19 lenguas indígenas.

Desde 2016 a la fecha se han elaborado materiales gráficos con motivo de las efemérides orientados a visibilizar el contexto, las lenguas y a la población indígena, migrante y afrodescendiente, a partir del material <http://dgei.basica.sep.gob.mx/es/efemerides.html>.

En cuanto a la utilización de los medios de comunicación para la difusión de tradiciones y culturas de los pueblos indígenas se menciona el programa de radio *Ecos Indígenas. La Voz de la Diversidad*, el cual es transmitido en línea por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como una manera de difundir la diversidad cultural de México*. Ecos Indígenas* aglutina el trabajo de 21 emisoras que integran el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas ubicadas en las principales regiones indígenas de México. Cada una de las mencionadas radiodifusoras realiza programas en las lenguas mayoritarias de su área de cobertura y tiene como contenido expresiones culturales, musicales y artísticas de los pueblos indígenas de la región. El trabajo del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas ha generado un importante arraigo en cientos de comunidades indígenas de México por más de tres décadas.

*Ecos Indígenas* ha sido transmitido en variantes regionales de las lenguas maya, náhuatl, p’urehpecha, pame, tenek, mayo, yaqui, guarijio, mazateco, cuicateco, chinanteca, zapoteca, mixe, mixteco y triqui.[[35]](#footnote-35)

**Artículo 29**

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.

Se busca que las escuelas sean una comunidad plural y compleja, conformada por alumnos y alumnas provenientes de distintos contextos. Para ello, la SEP ha creado un plan de estudios para niñas y niños indígenas que logra un equilibrio entre los conocimientos y aptitudes generales, impartido con un enfoque y estrategias de inclusión y equidad, que a la vez incide en el contexto comunitario y plurilingüistico de los pueblos originarios. Además de la flexibilidad curricular citada anteriormente, el Nuevo Modelo Educativo propone que al menos 60% de las escuelas indígenas contará con el Programa para Asignatura Lenguas Indígenas, y español como segunda lengua para el ciclo escolar 2018-2019.

Los contenidos curriculares nacional y local deberán vincularse para producir resultados significativos. De esta forma, la enseñanza de materias como matemáticas y ciencias no sólo comprenderá una referencia a la geometría o física, sino que explicarán cómo conciben el mundo los saberes comunitarios a partir de su sistema de numeración y su cosmografía.

**Artículo 30**

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

La CDI cuenta con un Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, las cuales surgieron con el objetivo de fortalecer la cultura, la identidad y las lenguas indígenas. Actualmente se cuenta con 21 emisoras que transmiten en 36 lenguas indígenas, en cumplimiento del derecho de los pueblos indígenas a ser informados en su propio idioma. La estimación de audiencia en cobertura es de 16.6 millones de personas, de las cuales la población indígena es de 5.5 millones. En el **ANEXO 23** se encontrarán diversos spots, programas y cápsulas transmitidas en las Radiodifusoras, dando cumplimiento a éste y otros artículos del Convenio.

**Artículo 31**

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

El planteamiento curricular del Nuevo Modelo Educativo “incorporó el propósito de avanzar hacia una educación inclusiva, que fomente el aprecio por la diversidad, elimine la discriminación por origen étnico, género, discapacidad, religión, orientación sexual o cualquier otro motivo, y que permita atender a todos los actores que participan en el proceso educativo a ser y a convivir […].”[[36]](#footnote-36)

**Parte VII. Contactos y cooperación a través de las fronteras.**

**Artículo 32**

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

Sírvase indicar si algún grupo indígena o tribal de su país está separado por una frontera internacional de otros miembros del mismo pueblo residentes en otro Estado. Caso de ser así, se ruega indique qué medidas se han tomado para poner en ejecución este artículo y, más concretamente, si se ha concertado algún acuerdo internacional con este fin.

En México existen varios pueblos indígenas que se encuentran separados por fronteras internacionales, a saber, en la frontera norte, están los Kumiai, pa ipai, cucapá, pápago, yaqui, pima y kikapú, mientras que en la frontera sur se encuentran los akateko, awakateco, chuj, ixil, jakalteko, kaqchikel, kíche´, mam, q´anjob´al y q´eqchi´.

El 15 de octubre de 2016, el Departamento del Interior de los Estados Unidos de América y la CDI firmaron un Memorándum de Entendimiento, en el que se reconoce la “importancia de fortalecer las políticas orientadas a fomentar la protección y el bienestar de los pueblos y personas indígenas que habitan en el territorio de sus países […]” y en el que se contempla la posibilidad de “fortalecer su cooperación en asuntos indígenas mediante el diseño de mecanismos que faciliten el intercambio de mejores prácticas, lecciones aprendidas, información, experiencias y conocimientos, para mejorar la calidad de vida de los pueblos y personas indígenas de cada país. **ANEXO 24.**

Por otra parte, se destaca que la Secretaría de Relaciones Exteriorescreó el *Programa Especial de Atención al Migrante Indígena (PEAMI)* con el objetivo de fortalecer la asistencia y protección consular a la población indígena mexicana en Estados y Canadá, la cual, debido a su diversidad étnica y lingüística, suele enfrentar diversas situaciones de alta vulnerabilidad cuando se ve involucrada en procesos judiciales, casos de separación familiar, deportaciones o interacciones con autoridades.

Por lo anterior, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), se creó un *Directorio de Hablantes de Lenguas Nacionales de Apoyo Consular* ante la necesidad de contar con intérpretes que pudieran asistir a la población mexicana de origen indígena que radica en los países antes mencionados.

El Directorio permite ubicar geográficamente a los grupos indígenas mexicanos en Estados Unidos y Canadá; localizar a aquellos que pueden y desean fungir como intérpretes de su propia lengua; y planear de manera más precisa y eficiente las actividades comunitarias a través de las 50 representaciones consulares de México en Estados Unidos. Todo esto, con el fin de formular y ejecutar políticas públicas a favor de una adecuada protección y mejores servicios consulares a esta población que enfrenta retos específicos.

A la fecha, se encuentran registrados en el PEAMI 794 migrantes hablantes de lenguas indígenas. El mixteco es la lengua que tiene mayor número de representantes y cuenta con 229 registros, constituyendo casi el 29% respecto del total; seguido por el náhuatl y el zapoteco, con 111 y 95 registros respectivamente, que representan el 14% y 12%.

**III, V y VIII**

**México 2013**

En atención a disposiciones de la Oficina Internacional del Trabajo, en el sentido de evitar repeticiones y simplificar la información, se reproduce lo manifestado en la Memoria del período inmediato anterior, debido a que en lo relativo a estas partes del formulario de Memoria del Convenio no se advierten modificaciones.

**IV**

**México 2018**

En cuanto a indicar si los tribunales ordinarios de justicia u otros tribunales han dictado resoluciones sobre cuestiones de principio relativas a la aplicación del Convenio 169, a continuación, se transcriben algunas tesis y criterios jurisprudenciales a manera de ejemplo, sobre usos y costumbres:

*Época: Décima Época*

*Registro: 2015120*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Tipo de Tesis: Aislada*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*

*Libro 46, septiembre de 2017, Tomo III*

*Materia(s): Constitucional, Administrativa*

*Tesis: (IV Región) 1o.6 A (10a.), Página: 1963*

***PERSONAS INDÍGENAS QUE SON PARTE EN UN JUICIO AGRARIO. EL TRIBUNAL DE LA MATERIA DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LOS DATOS NECESARIOS PARA CONOCER SUFICIENTEMENTE LAS COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CULTURALES DE LOS PUEBLOS O COMUNIDADES A QUE PERTENECEN, A FIN DE ESTABLECER SI RESULTAN RELEVANTES PARA LA SOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA.*** *El artículo 2o., apartado A, fracción VIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un derecho fundamental de las personas indígenas que, en los juicios en los que figuren como parte, las autoridades jurisdiccionales deben resolver tomando en cuenta las costumbres y especificidades culturales del pueblo al que pertenezcan. Por su parte, el precepto 164, fracción I, de la Ley Agraria señala que para la resolución de las controversias en que una de las partes sea persona indígena, los tribunales considerarán los usos y costumbres del grupo al que pertenezca siempre que no contravengan la Norma Suprema o la propia ley, ni se afecten derechos de tercero. En ese contexto, constituye un derecho fundamental de las personas indígenas y un imperativo para los Tribunales Agrarios, recabar oficiosamente, a través de informes o cualquiera otra fuente que tengan a su alcance, los datos necesarios que les permitan conocer las costumbres y especificidades culturales que rijan en el pueblo o comunidad al que aquéllas pertenezcan para establecer si resultan relevantes para la solución del juicio agrario. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.*

*Amparo directo 64/2017 (cuaderno auxiliar 333/2017) del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Teresa Vásquez López. 8 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Faustino Arango Escámez. Secretario: Marcelo Cabrera Hernández.*

*Amparo directo 1182/2016 (cuaderno auxiliar 221/2017) del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Pablo Rojas Gracida y otro. 15 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Virgen Avendaño. Secretaria: Ana Livia Sánchez Campos.*

*Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 1a. CCCXXIX/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PERSONAS INDÍGENAS. LAS PRERROGATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDEN EXIGIRSE EN CUALQUIER TIPO DE JUICIO O MOMENTO PROCESAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 610.*

*Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.*

*Época: Décima Época*

*Registro: 2003595*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Tipo de Tesis: Aislada*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3*

*Materia(s): Constitucional, Penal*

*Tesis: I.6o.P.35 P (10a.), Página: 1830*

***INDÍGENA CON CARÁCTER DE INCULPADO. LA RECOPILACIÓN OFICIOSA DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE PERMITAN VALORAR SUS COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CULTURALES PARA HACER EFECTIVO SU DERECHO AL PLENO ACCESO A LA JURISDICCIÓN, ES PARTE DE LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO, POR LO QUE LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE LLEVARLA A CABO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES ESENCIALES DE ÉSTE QUE AFECTA A LAS DEFENSAS DE AQUÉL.***

*Conforme al artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho al pleno acceso a la jurisdicción del Estado, y para garantizarlo en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, deberán tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, teniendo en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura; por tanto, el Estado es quien tiene la obligación de garantizar un plano de igualdad entre las normas y las especificidades de la persona indígena sometida a su jurisdicción, y no ésta quien deba renunciar al reconocimiento de sus especificidades, costumbres y cultura, en la aplicación de las leyes estatales. En ese tenor, cuando opera el acceso de la jurisdicción estatal para conocer de un asunto penal, y el inculpado tiene reconocida su calidad de indígena goza, entre otros, de los siguientes derechos: a) expresarse en su propio idioma ante el órgano jurisdiccional que lo está juzgando y a que éste le designe un intérprete-traductor durante la tramitación del juicio; b) ser asistido por un defensor con conocimiento de su lengua y cultura y, c) que sus costumbres y especificidades culturales sean reconocidas y ponderadas por el juzgador, quien tiene la obligación de allegarse, para la toma de decisiones, de las periciales antropológicas, culturales, y jurídico-antropológicas pertinentes, apoyándose, incluso, en las opiniones de miembros de la comunidad indígena con reconocido prestigio en el conocimiento de los usos y costumbres de su comunidad, o de cualquier otro medio que le permita adquirir esa información y que resulte necesaria para emitir sentencia; derechos que deben ser garantizados antes de dictarse ésta, pues sólo así es tangible el principio de igualdad formal del derecho estatal, ante la desigualdad de facto que se presenta entre la comunidad indígena y el resto de la composición pluricultural que forma la Nación Mexicana. De ahí que la recopilación oficiosa de aquellos elementos que permitan valorar las costumbres y especificidades culturales de los indígenas para hacer efectivos los mencionados derechos sea parte de las formalidades esenciales del procedimiento, pues con su operatividad, el inculpado sabrá y entenderá -en la lengua o idioma que hable y comprenda- la naturaleza de la acusación, el hecho punible que se le atribuye y podrá defenderse al tener una comunicación clara y expedita con su defensor, los testigos, el órgano acusador y el tribunal que lo está juzgando. Consecuentemente, conforme al artículo 160, fracciones II, VI y XVII, de la Ley de Amparo, la omisión del juzgador de allegarse de esos elementos para hacer efectivos dichos derechos indígenas constituye una violación a las leyes del procedimiento que afecta las defensas del inculpado. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.*

*Amparo directo 391/2012. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: Gerardo Flores Zavala.*

*Época: Novena Época*

*Registro: 170126*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Tipo de Tesis: Aislada*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tomo XXVII, marzo de 2008*

*Materia(s): Administrativa*

*Tesis: XIII.1o.35 A*

*Página: 1735*

***AUTORIDADES INDÍGENAS REGIDAS POR USOS Y COSTUMBRES. EL NOMBRAMIENTO QUE OTORGAN PARA QUE UN GOBERNADO DESEMPEÑE UN SERVICIO PÚBLICO, SIN SU CONSENTIMIENTO Y SIN REMUNERACIÓN ALGUNA, ES UN ACTO VIOLATORIO EN SÍ MISMO DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.*** *Si bien es cierto que el artículo 2o., apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de los pueblos indígenas de aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, es decir, de acuerdo con sus usos y costumbres; también lo es que el propio precepto limita esa prerrogativa a la sujeción a los principios generales de la Constitución Federal, y al respeto, entre otros aspectos, de las garantías individuales y de los derechos humanos. En ese sentido, el nombramiento otorgado por una autoridad indígena regida por usos y costumbres, como puede ser una asamblea de ciudadanos, regulada por el artículo 3o., fracción X, de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, para que un gobernado desempeñe un servicio público, sin su consentimiento y sin retribución alguna, constituye un acto violatorio en sí mismo de la garantía prevista en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

*PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.*

*Amparo en revisión 369/2007. Celedonio Maldonado Castro. 19 de diciembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Carrete Herrera. Secretaria: Edna Matus Ulloa.*

En cuanto a decisiones administrativas y/o judiciales que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas a las tierras que tradicionalmente ocupan y que solucionen las reivindicaciones de tierra sobre la base de la ocupación tradicional, a continuación, se transcriben algunas tesis o criterios jurisprudenciales, relativos al tema:

*Época: Novena Época*

*Registro: 185567*

*Instancia: Segunda Sala*

*Tipo de Tesis: Aislada*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tomo XVI, noviembre de 2002*

*Materia(s): Constitucional*

*Tesis: 2a. CXXXVIII/2002*

*Página: 445*

***DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE EL PRINCIPIO TERRITORIAL DE SUS PUEBLOS Y EL DERECHO PREFERENTE DE LAS COMUNIDADES AL USO Y DISFRUTE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LOS LUGARES QUE OCUPAN.*** *El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, establece como uno de los aspectos de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, la conservación y mejoramiento de su hábitat, la preservación de la integridad de sus tierras y el derecho de acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que ocupan, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas. De lo anterior se advierte que dicho precepto consagra el principio territorial de los pueblos indígenas, al reconocer su unidad con los territorios que ocupan y su hábitat y, por tanto, el derecho a su explotación en la forma y modalidad de propiedad y tenencia de la tierra que libremente decidan dentro de los establecidos en la Constitución Federal y las leyes de la materia, en debido respeto a su derecho de decidir su forma interna de organización económica, para lo cual se establece la posibilidad de coordinación y asociación de las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, lo que, desde luego, debe hacerse en el marco constitucional que exige el respeto a derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad.*

*Amparo en revisión 123/2002. Comunidad Indígena de Zirahuén, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán. 4 de octubre de 2002. Cinco votos a favor de los resolutivos; mayoría de tres votos en relación con las consideraciones. Disidentes: Juan Díaz Romero y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.*

*Nota: Conforme al artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esta tesis no es apta para integrar jurisprudencia.*

*Época: Novena Época*

*Registro: 186132*

*Instancia: Segunda Sala*

*Tipo de Tesis: Jurisprudencia*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tomo XVI, agosto de 2002*

*Materia(s): Administrativa*

*Tesis: 2a./J. 96/2002*

*Página: 375*

***REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS QUE RESUELVEN SOBRE SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN DE PROPIEDADES PARTICULARES INCLUIDAS EN PERÍMETROS DE TERRENOS RECONOCIDOS Y TITULADOS A FAVOR DE COMUNIDADES INDÍGENAS.*** *La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 54/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 33, sostuvo el criterio de que las solicitudes administrativas de exclusión de propiedades particulares enclavadas en perímetros de superficie confirmados y titulados a favor de comunidades agrarias, efectuadas bajo la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria y del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, actualmente son consideradas como asuntos jurisdiccionales de la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción XIV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con los diversos numerales noveno, decimotercero, decimosexto, y transitorios 1o. y 2o. del mencionado reglamento. En congruencia con tal criterio, se concluye que en contra de las resoluciones que emita el Tribunal Unitario Agrario en relación con ese tipo de solicitudes resulta improcedente el recurso de revisión, ante el Tribunal Superior Agrario a que se refieren los artículos 198 de la Ley Agraria y 9o., fracciones I, II y III, de la ley orgánica citada, ya que la procedencia de dicho recurso está condicionada a la circunstancia de que la sentencia materia del medio impugnativo se dicte en juicios identificados con las hipótesis previstas en las fracciones I, II y IV del artículo 18 de la ley últimamente referida, esto es, en controversias por límites de tierras entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, o entre uno o varios de estos sujetos colectivos de derecho agrario y uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; en los juicios relativos a la acción de restitución de tierras, bosques y aguas; así como en los de nulidad intentados contra actos de autoridades estatales en materia agraria.*

*Contradicción de tesis 27/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 9 de agosto de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.*

*Tesis de jurisprudencia 96/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciséis de agosto de dos mil dos.*

*Nota: La tesis 2a./J. 54/2000 citada, aparece publicada con el rubro: "EXCLUSIÓN DE PROPIEDADES PARTICULARES INCLUIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE TERRENOS COMUNALES CONFIRMADOS. CONTRA LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PROCEDE EL AMPARO DIRECTO.".*

*Época: Novena Época*

*Registro: 194773*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Tipo de Tesis: Aislada*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tomo IX, enero de 1999*

*Materia(s): Administrativa*

*Tesis: XI.3o.12 A, Página: 912*

***REVISIÓN, RECURSO DE. ES PROCEDENTE EN LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO AGRARIO EN QUE SE RECLAME CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE A AFECTAR DERECHOS AGRARIOS COLECTIVOS DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL.*** *El artículo 198 de la Ley Agraria establece: "El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: I. Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; II. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales, o III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.". De la interpretación armónica de las dos primeras hipótesis, se colige que si el recurso de revisión procede sobre cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; dicho recurso también debe resultar procedente en la tramitación de un juicio agrario, en que se reclame cualquier acción tendiente a afectar derechos agrarios colectivos de los núcleos de población ejidal o comunal, pues de la exposición de motivos de la Ley Agraria vigente, se advierte que la iniciativa de reforma a dicha ley tiende a proteger las comunidades indígenas, al disponer "que dicha protección no estaría completa si la iniciativa no estableciera el derecho que asiste a los núcleos de población para obtener la restitución de las tierras que les fueron ilegalmente arrebatadas. Este derecho se fortalece con el respaldo del recurso de apelación ante el Tribunal Superior Agrario, en el evento de que la resolución del Juez de primera instancia sea lesiva a los intereses del núcleo de población afectado.". De lo que se advierte que la intención del legislador fue establecer dicho recurso, contra las resoluciones que en primera instancia afecten exclusivamente derechos agrarios colectivos de los núcleos de población ejidal o comunal.*

*TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.*

*Amparo directo 483/98. Francisco Roa Corona. 15 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Moisés Duarte Aguíñiga. Secretaria: Martha Lilia Rodríguez López.*

*Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 258, tesis XVI.1o.55 A, de rubro: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA, RECURSO DE. SOLAMENTE ES PROCEDENTE CUANDO SE AFECTAN DERECHOS AGRARIOS COLECTIVOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL.".*

*Época: Novena Época*

*Registro: 202594*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Tipo de Tesis: Aislada*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tomo III, abril de 1996*

*Materia(s): Administrativa*

*Tesis: III.2o.A.16 A*

*Página: 341*

***ASESOR JURIDICO O DEFENSOR EN MATERIA AGRARIA. ES UN REPRESENTANTE LEGAL FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.*** *Dos de los principios que rigen el procedimiento permanente, no los transitorios, de la Ley Agraria, son el de igualdad entre las partes moderado hacia la equidad o "igualdad racional", y el de la defensa material. El primero de estos principios se halla en forma patente en lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley de que se trata, en cuanto dispone que si una de las partes se encuentra asesorada y la otra no, debe suspenderse el procedimiento y solicitarse los servicios de un "defensor" de la Procuraduría Agraria, quien gozará de cinco días contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento, para enterarse del asunto. Esta disposición se encuentra relacionada con el artículo 135 de la misma Ley Agraria, que establece que la citada Procuraduría está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, de sus sucesores, de los ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de la propia Ley. La igualdad de las partes también se tutela en los artículos 186, tercer párrafo, y 164 de la Ley Agraria, al disponer el primero de ellos que en la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, el tribunal obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellos, "sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad"; y el segundo que los tribunales deberán considerar las costumbres y usos de los grupos indígenas cuando en los juicios se involucren tierras de éstos, mientras no contravengan la ley ni se afecten derechos de tercero. El principio de la defensa material está contenido en los artículos 164, tercer párrafo, y 186, segundo párrafo, de la Ley Agraria. El primero de dichos artículos ordena al tribunal suplir la deficiencia de las partes en los planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como de ejidatarios o comuneros. Y el segundo dispone que el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. Las destacadas disposiciones legales conducen a concluir que, en el vigente procedimiento agrario, los contendientes, aparte de la defensa material en los casos que proceda la suplencia de la deficiencia en los planteamientos de derecho, deben contar con una defensa formal adecuada, en la que se incluye el derecho de estar debidamente asesorado inclusive por un miembro de la Procuraduría Agraria, si su contrario procesal concurre con un asesor a la audiencia del juicio. De todo esto igualmente se concluye que la figura del asesor jurídico o defensor prevista por el artículo 179 de la Ley Agraria, es la de un verdadero representante legal facultado para promover todo lo relacionado con la defensa de los derechos agrarios de quien asesora en el juicio. De ahí que, si un tribunal agrario le reconoce a una persona el carácter de asesor jurídico de una de las partes en un procedimiento agrario, ese asesor jurídico tiene facultades para promover el juicio de amparo en representación de la parte a quien asesoró.*

*SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.*

*Amparo directo 169/95. Eduardo Rodríguez Jiménez. 6 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Mojica Hernández. Secretaria: Emilia Hortencia Algaba Jacquez.*

*Nota: Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 13/2008-SS, de la que derivó la tesis 2a./J. 75/2008, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, mayo de 2008, página 14, con el rubro: "ASESOR JURÍDICO O DEFENSOR EN MATERIA AGRARIA. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN REPRESENTACIÓN DE SUS ASESORADOS O DEFENDIDOS."*

**VI**

**México 2018**

*Inspecciones laborales.* Se realizan inspecciones a empresas agrícolas bajo diversos protocolos aplicables a ese gremio, entre los que están incluidos los trabajadores indígenas, tales como los relativos a seguridad, trata de personas y erradicación de trabajo infantil.

El Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos Delitos 2014-2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.

Entre las estrategias del programa citado, se encuentra la *Estrategia 1.6. Fomentar la verificación de establecimientos y medios de comunicación que, por sus servicios, pudieran derivar en la comisión de los delitos en materia de trata de personas*, el cual contempla cinco líneas de acción: Adoptar medidas para la inspección de centros laborales, negocios y servicios que pudieran proporcionar la comisión de delitos en la materia, Implementar lineamientos de verificación en medios de comunicación a fin de prevenir la comisión de delitos de trata de personas; Diseñar y difundir códigos de conducta éticos para las ramas de la industria, sector agrícola, empresarial, comercial y de servicios, fomentar la implementación de código de ética en centros laborales, urbanos, rurales, industriales, manufactureros o agrícolas y Vincular a los sectores social, empresarial, industrial y productivo en acciones de prevención de la trata de personas; cuya implementación corresponde entre otras dependencias a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En este marco, la STPS emitió el Protocolo de Inspección para Prevenir y Detectar la Trata de personas en los Centros de Trabajo. La versión de 2017 de esta herramienta tiene como objetivo establecer mecanismos de actuación que deben seguir los Inspectores del Trabajo, tendientes a prevenir, detectar y erradicar la trata de personas, así como proteger de manera integral los derechos de las y los trabajadores, con especial énfasis en aquellos que pudieran ser víctimas del delito de trata de personas, para los grupos altamente Protocolo de Inspección 5 vulnerables como son trabajadores indígenas, trabajadores del campo, migrantes, mujeres, niños, niñas, menores y adolescentes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad, entre otros.

En 2017 se realizaron visitas a 229 centros de trabajo, y se dictaron 10,475 medidas técnicas de seguridad e higiene para que los jornaleros gocen de condiciones mínimas en esas materias, verificándose el cumplimiento de todas estas medidas. El número de las medidas dictadas en 2017, supera a las 5,964 impuestas en 2016.

**VII**

**México 2018**

De conformidad con lo dispuesto por el párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución de la OIT, se envían copias de esta memoria a las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores: Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

Respecto a la aplicación del presente Convenio, COPARMEX señala lo siguiente:

“6.- C169 - CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES, 1989 (NUM.169)

COPARMEX celebra la actitud del Gobierno Federal de continuar aportando la información oportuna y pertinente a la Comisión de Aplicación de Normas en relación con las diferentes solicitudes de informe que le solicita la CEACR en relación con el cumplimiento de los diversos tópicos comentados respecto del Convenio 169, reiterando su preocupación en dos sentidos: el primero, que debe ser congruente la perspectiva de aplicación del Convenio con el desarrollo económico y social que el País va requiriendo en atención al crecimiento de la población general y de los grupos indígenas y tribales, y sus requerimientos consecuentes en todas las áreas de nuestro país, (educación, infraestructura, electricidad, salud, oportunidades de empleo, etc.) para lo cual debe tomarse en cuenta igualmente la exigencia que estos mismos grupos plantean al respecto en sus lugares de origen y residencia, que implican sus tierras y demás aspectos de su vida y que deben ser congruentes con la pretensión que se cuestiona en relación con la necesaria adecuación y uso de tierra, aguas y subsuelo; segundo, que en algunas de las regiones del País, las pretensiones de reconocimiento de pagos indemnizatorios, en lugar de estar debidamente sustentadas, se apoyan en movimiento pesado reivindicatorios indígenas, se traduce en simples protestas con fines exclusivos de presionar a las autoridades y lograr un beneficio que en nada se relaciona con alguna afectación real de los derechos de dichos grupos y que amparados en este Instrumento que enarbola la protección de quienes efectivamente tienen o lleguen a tener alguna afectación, se concretan a realizar actos de afectación a la población en general con tomas de carreteras, poblaciones o incluso empresas productivas que nada tienen que ver con sus erróneas pretensiones.

COPARMEX, por conducto de diversos Centros Empresariales afiliados, tiene amplio contacto con la producción agrícola, pesquera, lacustre, ganadera y es particularmente respetuosa de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas y demás especialidades productivas vinculadas con la industria, apoya sin limitación a los derechos que derivan de este Convenio y considera que sería deseable que igualmente los Expertos tuvieran en cuenta estas circunstancias que en un momento dado se marginan de la interpretación de una norma como esta y dan margen a distorsiones de la interpretación y alcance de su contenido, en ocasiones incluso en perjuicio de los mismo grupos.”

A la fecha ninguna organización de trabajadores consultada ha proporcionado alguna observación sobre la aplicación de este Convenio.

#### México 2018

**Observación 2013**

*Seguimiento de las recomendaciones del Comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT), presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares (STIMAHCS).*

*Construcción de una carretera.* **La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y reitera su pedido al Gobierno para que indique la manera en que se resolvieron los reclamos y los pedidos de pago de indemnizaciones presentados por las comunidades indígenas con motivo de la construcción de la carretera Oaxaca Istmo (documento GB.296/5/3, junio de 2006).**

Convenio de ocupación previa.-Es el acto por virtud del cual la dependencia o entidad promovente de una expropiación por causas de utilidad pública, toma posesión de un bien ejidal o comunal, para la procedencia de esta ocupación, es requisito indispensable que los ejidos o comunidades a través de un acuerdo de asamblea tratándose de tierras de uso común, o los ejidatarios o comuneros individualmente considerados en caso de tierras parceladas, aprueben dicha ocupación.

El convenio de ocupación previa deberá contener los requisitos que establecen los artículos 57 y 58 del reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Si de la revisión del convenio de ocupación previa, se concluye que el mismo cumple con los requisitos legales, la Procuraduría Agraria intervendrá en su formalización, a fin de solicitar su inscripción en el Registro Agrario Nacional. Los ejidos y comunidades agrarias tienen derecho a recibir una contra prestación por autorizar la ocupación previa y cuando se emita el decreto del presidente de la república autorizando la expropiación el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) emitirá los avalúos correspondientes, que deberán pagarse previo a la ejecución del decreto.

Para el caso que nos ocupa esta es la situación de las comunidades afectadas por la construcción de la carretera:

1. San Pedro y San Pablo Ayutla; Mpio. San Pedro y San Pablo Ayutla. Se cuenta con convenio de ocupación previa por el derecho de vía, mismo que data del dieciocho de octubre del dos mil cinco, legalmente inscrito en el Registro Agrario Nacional.
2. Jalapa del Márquez; Mpio. Santa Maria de Jalapa del Márquez. En fecha diecisiete de noviembre de dos mil cinco y veintisiete de marzo de dos mil ocho, suscribió convenios de ocupación previa por el derecho de vía, el cual hasta la fecha no han sido inscritos en el Registro Agrario Nacional.
3. San Juan Juquila Mixes; Mpio. San Juan Juquila Mixes. Esta comunidad suscribió convenio de ocupación previa por el derecho de vía en fecha veintinueve de agosto de dos mil ocho, mismo que está legalmente inscrito en el Registro Agrario Nacional.
4. San Lorenzo Albarradas; Mpio. San Lorenzo Albarradas. Este núcleo agrario suscribió en fecha siete de febrero de dos mil cinco, convenio de ocupación previa por el derecho de vía, mismo que hasta la fecha no se encuentra legalmente inscrito en el Registro Agrario Nacional.
5. San Pedro Quiatoni; Mpio. San Pedro Quiatoni. Este núcleo agrario suscribió en fecha treinta de julio de dos mil siete, convenio de ocupación previa por el derecho de vía, mismo que se encuentra legalmente inscrito en el Registro Agrario Nacional.
6. Santa Maria Albarradas; Mpio. San Pablo Villa de Mitla. Este núcleo agrario suscribió en fecha treinta y uno de agosto de dos mil cinco, convenio de ocupación previa por el derecho de vía, mismo que se encuentra legalmente inscrito en el Registro Agrario Nacional.
7. Santa Maria Mixtequilla; Mpio. Santa Maria Mixtequilla. Este núcleo agrario suscribió en fecha nueve de julio de dos mil tres, convenio de ocupación previa por el derecho de vía, mismo que hasta la fecha no se encuentra legalmente inscrito en el Registro Agrario Nacional.
8. Santiago Lachiguiri; Mpio. Santiago Lachiguiri. Suscribió convenios de ocupación previa por el derecho de vía, el doce de febrero de dos mil cinco y el catorce de diciembre de dos mil seis, estando estos legalmente inscritos en el Registro Agrario Nacional.
9. Santiago Quiavicusas. Mpio. San Carlos Yautepec. Suscribió en fecha veinticuatro de agosto de dos mil cinco, convenio de ocupación previa por el derecho de vía, mismo que se encuentra legalmente inscrito en el Registro Agrario Nacional.
10. Santo Domingo Tepuxtepec; Mpio. Santo Domingo Tepuxtepec. Esta comunidad suscribió convenio de ocupación previa por el derecho de vía el nueve de noviembre de dos mil siete, el cual está legalmente inscrito en el Registro Agrario Nacional en el Estado.
11. Xaaga; Mpio. San Pablo Villa de Mitla. En fecha veintiséis de junio de dos mil tres, suscribió convenio de ocupación previa por el derecho de vía, mismo que hasta la fecha no se encuentra legalmente inscrito en el Registro Agrario Nacional.

*Seguimiento de las recomendaciones del Comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT), presentada* por la delegación sindical D-III-57 sección XI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Radio Educación.

*Comunidad de San Andrés de Cohamiata. En lo que respecta a la evolución de la disputa territorial que fue examinada en una reclamación (documento GB.272/7/2, junio de 1998), el Gobierno indica que sigue dando atención continua a dicha problemática agraria, aunque las condiciones de negociación entre las partes no hayan sido propicias para su resolución definitiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno mantendrá una comunicación continua para que, de manera consensuada y en condiciones de respeto y cordialidad, se mantengan las pláticas hasta su resolución definitiva.* **La Comisión se remite a sus observaciones anteriores, y reitera su esperanza de que las partes en conflicto realicen esfuerzos para llegar a una solución satisfactoria y se ponga fin a una situación conflictiva que se prolonga desde hace décadas. La Comisión invita al Gobierno a continuar informando sobre toda evolución al respecto.**

Derivado de los conflictos de linderos que presenta la comunidad indígena de **San Andrés Cohamiata** con las comunidades indígenas del estado de Nayarit San Juan Peyotán, Santa Rosa y Zoquiapan; se generó la problemática por la definición de linderos de los estados de Jalisco y Nayarit; siendo la intención de un grupo de comuneros del estado de Jalisco adherirse al estado de Nayarit (12 localidades).

La anexión de facto pretende ser legitimada como simple reconocimiento de fronteras por parte del Congreso de Nayarit, que aprobó reformas a la Ley de División Territorial, el Ejecutivo de Jalisco acude al procedimiento jurídico de la controversia constitucional, dado que la Constitución Política del país determina las fronteras entre los estados, y el órgano supremo para dirimir conflictos en el tema es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La demanda fue presentada el 4 de junio de 2018, tras que el Congreso de Jalisco aprobara la determinación de linderos del municipio de Mezquitic.

La controversia es “Contra los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Nayarit”, con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, 21 y 22 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105, de la misma Constitución. En la demanda se reclama la invalidez del decreto de fecha 17 de abril del año en curso, que reforma el Artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el día 20 de abril del 2018”.

**Jalisco solicita a la SCJN, sea concedida la suspensión para los siguientes efectos:**

*A). - No se ejecuten los actos y consecuencias de todos los actos, decretos, ordenes o cualquiera que sea su denominación por medio de los cuales el Estado de Nayarit por conducto de sus tres poderes estatales y sus municipios, pretende desconocer los límites territoriales con el Estado de Jalisco.*

*B). - No se ejecuten los efectos y consecuencias de todas las determinaciones y mandamientos emitidos por el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, tendientes a materializar el decreto impugnado, en concreto, los actos para ejercer actos de autoridad sobre las localidades materia del decreto reclamado, tales como el establecimiento de partidas de la Policía Preventiva del Estado de Nayarit dentro de dicho territorio; y*

*C). - No se ejecuten ninguna de las determinaciones y mandamientos emitidos por el Gobernador, Congreso, municipios y cualquier otra autoridad de hecho o de derecho del Estado de Nayarit, por medio los cuales pretenden ejercer actos de imperio dentro del territorio del Estado de Jalisco, territorio que tiene y ha tenido a lo largo de la historia.*

El 21 de junio de 2018, se llevó a cabo reunión de trabajo en Palacio de Gobierno del estado de Jalisco con autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad indígena San Andrés Cohamiata, donde se abordaron los siguientes asuntos: Decreto, demanda de controversia, plano de acuerdo a decreto del Municipio de Mezquitic y acciones de colaboración entre comunidad y estado para efectos procesales de la controversia. Llegándose a los siguientes acuerdos:

Acompañar en el procedimiento de la controversia constitucional dejando como fecha tentativa un mes para dar seguimiento a las mesas informativas, salvo que surgiera alguna situación de carácter urgente se convocará a reunión extraordinaria.

Por parte de la Secretaría General de Gobierno se buscarán alternativas de reinserción para atender al grupo minoritario quejoso de la comunidad y mantener la paz social.

1. Serrano, E., A. A. Embriz y P. Fernández, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002, México, INI-PNUD-CONAPO 2002. [↑](#footnote-ref-1)
2. INALI, 2009, Catálogo de lenguas indígenas nacionales. Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, México, INALI. [↑](#footnote-ref-2)
3. Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. [↑](#footnote-ref-3)
4. Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. [↑](#footnote-ref-4)
5. El indicador de promedio de habitantes por vivienda se calcula considerando la población indígena total estimada por la CDI (11,132,562) entre las viviendas con población indígena (2,426,290), ambos datos extraídos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 2010, lo cual da una estimación de 4.5 habitantes por vivienda indígena. [↑](#footnote-ref-5)
6. Las cifras que se presentan sobre este tipo de apoyo son con corte al mes de abril de 2018. [↑](#footnote-ref-6)
7. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247794/V14\_Resena.pdf [↑](#footnote-ref-7)
8. Espacios físicos en los que mujeres indígenas brindan atención a otras mujeres indígenas, desde una perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas; y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. [↑](#footnote-ref-8)
9. Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs). [↑](#footnote-ref-9)
10. Artículo 2º […] III. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. [↑](#footnote-ref-10)
11. Puede consultarse en: <http://www.sitos.scjn.gob.mx/condhap/protocoloIndigena/inico.html> [↑](#footnote-ref-11)
12. Tesis Jurisprudencial 114/2013, 10 Época, Primera Sala de la SCJN; de fecha diciembre de 2013. PERSONAS INDÍGENAS BILINGÜES O MULTILINGÜES. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 15, párrafo segundo: 18 párrafo tercero: 141 Apartado a, fracción X y 154 párrafo segundo; del Código Federal de Procedimientos Penales. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Acuerdo A/067/03 del Procurador General de la República, por el que se crea la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas. [↑](#footnote-ref-12)
13. Considerando que, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, en México existen 68 lenguas originarias con 364 variantes lingüísticas. [↑](#footnote-ref-13)
14. Amuzgo, Chinanteco, Chontal, Ch’ol, Cora, Maya, Mayo, Mexicanero, Mixteco, Nahua, Náhuatl, Otomí, Pai Pai, Pame, Tarahumara, Teenek, Tepehuano del Norte, Tepehuano del Sur, Tlapaneco, Totonaco, Triqui, Tseltal, Tsotsil, Wixárika (Huichol), y Zapoteco. [↑](#footnote-ref-14)
15. Suscrito por los titulares de SEGOB, SEP -por la participación de INALI-, PGR, Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y CDI. [↑](#footnote-ref-15)
16. Su objetivo es contribuir a que la población indígena sujeta a un proceso legal, acceda a la jurisdicción del estado conforme a derecho, proporcionando servicios de asesoría y gestoría a las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, presentación de peritajes en materia antropológica/cultural, y acciones para promover la libertad de personas indígenas. Se otorga apoyo a través de la aplicación de medidas cautelares (garantía económica, reparación del daño, sanción pecuniaria) o salidas alternas (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias) en términos de la legislación que rige al sistema de justicia penal acusatorio. [↑](#footnote-ref-16)
17. Otorga apoyo a los beneficiarios del Programa a través de la intervención de intérpretes – traductores en lenguas indígenas en diligencias de carácter judicial o administrativa en favor de la población indígena. [↑](#footnote-ref-17)
18. El documento se encuentra disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_003.pdf>. [↑](#footnote-ref-18)
19. Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México Oriente, Estado de México Poniente, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz Norte, Veracruz Sur, Yucatán y Zacatecas. [↑](#footnote-ref-19)
20. Modelo Educativo. Equidad e Inclusión, sep, 2016. Pag. 32.

    <http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12302/1/images/equidad-e-inclusion.pdf> [↑](#footnote-ref-20)
21. <http://dgei.basica.sep.gob.mx/files/infografias/2016-2017/nacional_2016_2017.pdf> [↑](#footnote-ref-21)
22. <http://dgei.basica.sep.gob.mx/files/infografias/2014-2015/nacional_2014_2015.pdf> [↑](#footnote-ref-22)
23. Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica, SEP. 2016. Pág. 38. [↑](#footnote-ref-23)
24. <http://dgei.basica.sep.gob.mx/es/fondo-editorial.html> [↑](#footnote-ref-24)
25. <http://aprendizajesclave.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/Prim-indigena/1EDU-PRIMARIA-INDIGENA.pdf>. [↑](#footnote-ref-25)
26. “El bilingüismo tiene que ver con la capacidad de un individuo a comunicarse de forma alterna en dos o más lenguas, dependiendo del contexto comunicativo. El Multilingüismo, en cambio, se refiere a la coexistencia de dos o más lenguas en el mismo territorio”. Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica, SEP. Pág. 158. [↑](#footnote-ref-26)
27. https://coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/files/fichero\_lengua\_indigena\_ok\_etc\_2014.pdf Véase ejemplar “Fichero lengua indígena”. [↑](#footnote-ref-27)
28. Véase el apartado “Conoce los libros cartoneros,” que se encuentra al final de la página de la Dirección General de Educación Indígena: <http://dgei.basica.sep.gob.mx/> [↑](#footnote-ref-28)
29. <http://dgei.basica.sep.gob.mx/es/fondo-editorial/juegos-didacticos.html> [↑](#footnote-ref-29)
30. La convocatoria para el presente año se puede consultar en el vínculo:

    <http://dgei.basica.sep.gob.mx/convocatorias/narraciones/19concursonacional2018.pdf> [↑](#footnote-ref-30)
31. <http://documentos.bancomundial.org/curated/es/114691468279331265/Plan-indigena> [↑](#footnote-ref-31)
32. <http://dgei.basica.sep.gob.mx/es/fondo-editorial/biblioteca-escolar.html> [↑](#footnote-ref-32)
33. http://dgei.basica.sep.gob.mx/ [↑](#footnote-ref-33)
34. <http://dgei.basica.sep.gob.mx/es/fondo-editorial.html> [↑](#footnote-ref-34)
35. Las transmisiones en línea o *streaming* se pueden ser escuchadas en el vínculo <http://www.cdi.gob.mx/ecosgobmx/> . [↑](#footnote-ref-35)
36. Modelo Educativo. Equidad e inclusión. SEP. 2017. P.207. [↑](#footnote-ref-36)